

Los errores del PC

LOS comunistas preferimos un partido derrotado antes que dividido".

La respuesta es de Corvalán. Y la pregunta que la motivó, hace un tiempo en Madrid, es la misma que esta semana han venido repitiéndose sin descanso los tradicionales "aliados históricos" del PC: los desconcertados socialistas de la Alianza Democrática y el Bloque que, luego de todos sus esfuerzos por incluir a los comunistas dentro de un gran Pacto Constitucional, han visto cómo los propios interesados optan por auto-marginarse...

La pregunta es: ¿no se están condenando de antemano a una derrota al persistir en la vía violenta contra un gobierno militar que ha dicho en todos los tonos, aun en los más propensos a un tránsito más rápido hacia la democracia, que el camino no es por la fuerza, porque "no vamos a capitular"?

¿Derrota? Corvalán no la descartó en su respuesta. Pero dijo —y las palabras del Partido y del Secretario General no se discuten— que... "preferimos la derrota antes que la división".

"¿Por qué?"

¿Y quién ha hablado de división en el PC? Los integrantes de la oposición democrática —a la que "El Siglo", órgano oficial del PC, llama "la oposición burguesa"— han tenido tiempo de calibrar los problemas internos que han venido arrastrando los comunistas.

"Lo que ha ocurrido —dijo uno de ellos— es una verdadera 'purga', en que los 'viejos tercios' —ex parlamentarios y dirigentes comunistas de la 'antigua vía democrática y electoral' que llevó a Allende a la Presidencia— han sido desplazado por los nuevos 'cuadros insurreccionales' que han descartado todo 'camino burgués' para llevar a cabo su 'proyecto histórico'".

La purga —al estilo del PC— se habría realizado fría y pulcramente a comienzos de este año y consistiría en ir relegando, sin reclamos de sus discípulos militantes, al baul del olvido a antiguos y destacados comunistas. "Fue un corte con cuchillo carnicero en que hubo llantos, incredulidad y decepción", aseguró uno de los "opositores burgueses" que, en reuniones informales con dirigentes o en los encuentros formalizados de la "movilización social", ha mantenido contactos cercanos con el PC.

En el análisis, otros destacan que la solución del Secretario General fue salomónica: "se decidió cortar a los 'viejos cuadros' porque se sabe que ellos, disciplinadamente, mantendrán en el anonimato sus quejas y no abandonarán el partido. En cambio, los jóvenes (de entre 30 y 40 años, que vivieron la euforia del triunfo de Allende y luego la depresión de la dictadura) han adoptado una posición tan intransigente que ya amenazaban con una dura escisión del comunismo".

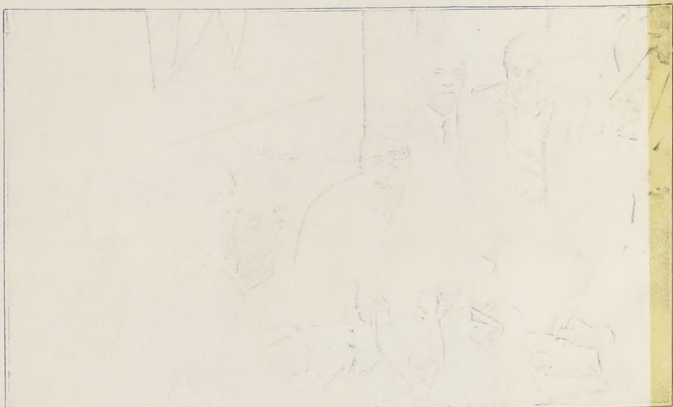
Asimismo, se señala que el viraje permite al PC anular el efecto de otras "espinas" que, después de la experiencia del exilio, presionaban por una autocrítica fuerte. Al estilo del renunciado jefe de comunicaciones, Rodríguez Elizondo, hoy en Perú. O del también renunciado ex presidente de la FECH, Alejandro Rojas:

"En esto quisiera ser muy claro —señaló este último en carta a Luis Corvalán—, la razón principal de mi renuncia es la convicción de que la concepción teórica que nutre al Partido Comunista de Chile, la visión del proceso histórico, que lo caracteriza, su metodología de funcionamiento y su concepción del socialismo, son insuficientes para sustentar un proyecto auténticamente democrático para Chile".

El "arrastre" de Rojas, conformado por muchos otros militantes "contagiados" —por decirlo de alguna manera— con los aires del eurocomunismo europeo y choqueados por la evidencia del dogmatismo de los comunistas chilenos, ha venido siendo clausurado con siete candados en los últimos años. Pero un vuelco de la línea política, con pronunciamiento claro en contra de la vía violenta y retomando el camino democrático que propiciaban los "viejos tercios", habría acrecentado los aires renovados y aperturistas dentro del PC.

Eso habría terminado por alejarlo de Moscú, como ha ocurrido con otros partidos comunistas en el mundo. Y no habría sido permitido, de ninguna manera, por la dirección política en el exilio, demasiado preocupada de mantener la amistad de sus camaradas rusos: ni Corvalán ni la Unión Soviética querían otro partido comunista sacando en cara a la URSS sus agresiones en Afganistán o en Polonia.

Entonces, había que anular que la epidemia de los Rodríguez Elizondo o los Alejandro Rojas pudiera crecer al amparo de un PC "amansado" por la búsqueda de una salida pacífica junto al resto de la oposición que, en Chile,



Primera conferencia del PC el año pasado. Desde entonces mucho "ho interno" los ha llevado a acentuar "todas las normas de lucha" a cambio de la vía democrática que alguna vez propició Corvalán.

podría involucrar hasta a sectores de derecha.

Una línea "de rebelión popular" declarada, hasta con publicación de una carta desafiantes que nadie pidió —"ineportuna", como dijeron algunos integrantes de la Alianza Democrática— asegura en cambio la unión de los comunistas en una posición "combatiente". "Si hasta parecen estar pidiendo a gritos una acción más antimilitarista de parte del gobierno" —señaló uno de los "desconcertados"— en esa actitud, que a algunos les parece casi "suicida", hay mucho de esa frase de Corvalán: "Preferimos un partido derrotado, antes que dividido".

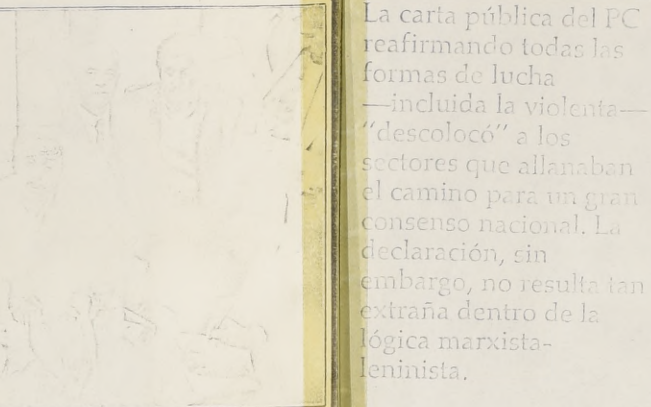
Las otras "espinas"

Porque la amenaza de una división se convirtió en "medo vivo" dentro de la dirigencia del PC. A la peligrosa influencia de los contagiados con los aires europeos, hay que agregar la decepción de los exiliados comunistas militantes de base (unos 3 mil asegura la directiva), que viajaron a vivir el "socialismo real". Sobre el punto es prácticamente "sediciosa" para la estabilidad del Partido la carta de uno de ellos, el médico Alfonso González Dagnino, también renunciado después de "toda una vida de militancia".

"Lo primero que hizo el partido, al recibir poder sobre los exiliados, fue prohibirnos hablar de lo ocurrido en Chile, salir de la ciudad adonde habíamos sido enviados, escribir cartas, hablar por teléfono, viajar a la capital y ni sonar siquiera con hablar a un dirigente. Incluso se nos prohibió saludarnos entre nosotros, no obstante ocupar un mismo edificio de departamentos. En las reuniones de célula, individuos de ceño adusto nos comunicaban informes amenazantes precedidos de la siguiente observación: 'no se aceptarán opiniones...'. A los exiliados los enviaron a trabajar como obreros. Había ingenieros que pintaban ruedas de automóviles, químicos cargando caucho sintético ardiente, profesoras universitarias cargando golillas, lingüistas puliendo lentes... Al cabo de cierto tiempo aparecieron los trastornos físicos y los síquicos. 'Los locos al manicomio', sentenció un dirigente y zanjó el asunto... Yo sentía en carne viva la ironía del destino: Nosotros que, bajo las banderas del PC chileno nos habíamos jugado por darles a la libertad y la democracia un contenido pleno, mediante un socialismo civilizado y plural, éramos los primeros privados de todo aquello de un plumazo apenas el PC chileno conseguía el poder necesario. Apenas llegados al socialismo 'real'."

¿Y el costo social?

El peligro de quiebre era, pues, un peligro que había que detener a la manera comunista. De un solo corte, frío y eficiente, aunque implique sacrificios. Sacrificios grandes porque, como recuerdan algunos "la vía pacífica y democrática" era el mérito de Corvalán que, paso a paso, elección tras elección, llevó al PC al gobierno constitucional con Salvador Allende. "Era y muchos piensan que sigue siendo la línea de Corvalán en el fondo de su corazón —indicaron algunos analistas—. Es la misma que el PC mantuvo después del '73, cuando llamó a la Democracia Cristiana y a los sectores democráticos a formar un gran 'frente antifascista'. Y debe haber seguido siendo la suya, pese a que en el '80, la situación internacional de la Unión Soviética (implicada ya en la invasión de Afganistán) lo presionó a dar la orden de la 'violencia aguda'. Fue entonces cuando empezaron a primar las posiciones de otros más intransigentes, como Amé-



rico Zorrilla y Jorge Inzunza, en el exilio, para pronunciarse por la vía violenta. Lo que se dice es que Corvalán lanzó a la discusión interna del PC esta última opción, pero luego hizo todo lo posible por combatirla".

3246 01

Hoy la línea está trazada y seguirá en pie, aunque signifique también otros "sacrificios". Como el distanciamiento cada vez más evidente con sus "aliados históricos" (los socialistas y —como otros también señalan— los radicales). Entre los socialistas sólo permanecen a su lado los almeydistas (que según sus críticos, han terminado por perder toda identidad y convertirse casi al PC). El resto, los integrados a la Alianza y buena parte de los que se mantienen en el Bloque, ha manifestado más o menos públicamente su resistencia al PC chileno. La más evidente fue la expresada en un extenso documento por los socialistas encabezados por Carlos Briones, ex Ministro del Interior de Allende.

El texto se detiene en aquella frase de Corvalán "un partido derrotado antes que dividido", y se pregunta:

"¿Es el objetivo de la actual política del PC mantener su unidad y no poner término a la dictadura...? ¿Y por qué una política más ajustada a la realidad chilena podría dividir al Partido Comunista?... ¿Y el costo político que lleva (la vía violenta) lo pagan entonces los que se adhieren y no el PC?... ¿Y el cruento costo social ¿quién lo paga?"

Esta última pregunta —con seguridad la más importante para los disciplinados "viejos tercios", hoy desplazados de la toma de decisiones— no tiene respuesta oficial en el PC, pero sí

La carta pública del PC reafirmando todas las formas de lucha —incluida la violenta— "descolocó" a los sectores que allanaban el camino para un gran consenso nacional. La declaración, sin embargo, no resulta tan extraña dentro de la lógica marxista-leninista.

tiene origen, más que en una particular visión de la situación chilena, en la estrategia que decide la URSS para América latina: "Para el PC, la lucha contra la dictadura militar debe darse por el camino que posibilite contribuir al cumplimiento de la estrategia del PC de la URSS, en orden a ir creando focos de conflictos armados a través de América latina que necesariamente distraigan la atención y esfuerzos en el terreno político y militar de EE.UU. Ello llevaría a EE.UU. a aflojar su tensión en otras latitudes que aparecen bajo la influencia soviética".

La crítica de los socialistas se acentúa al indicar que: "el costo político que conlleva la práctica de estos lineamientos del PC (contruidos dentro de los intereses de la URSS) no sólo lo pagan quienes adhieren a ellos, sino que el conjunto de las fuerzas democráticas opositoras. Y el costo social... finalmente lo paga el pueblo".

La referencia a la Alianza Democrática es evidente e implica muchas más discrepancias entre los antiguos aliados. No sólo implica ya el proyecto histórico entre los que, siguiendo con el marxismo, postulan hoy un socialismo democrático en contra del "leninismo de Estado" de los comunistas. Se profundiza, además, en el análisis sobre la "capacidad revolucionaria" de la actual clase obrera, que muchos advierten bastante disminuida en estos once años de gobierno militar. El mismo órgano oficial del PC sale a enfrentar estas teorías que califica peyorativamente de "renovadas": "Supuestamente —señala— la 'modernización' del capitalismo habría significado una importante disminución cuantitativa de la clase obrera en beneficio de las capas medias de la sociedad. Tal decisivo cambio cuantitativo redundaría, a juicio de estos nuevos teóricos, en la incapacidad de la clase obrera para conducir a otras clases y capas sociales tras un proyecto revolucionario y renovador de la sociedad".

Los análisis socialistas "renovados" indican, entre otras cosas, que los cambios económicos introducidos durante estos once años han disminuido la proporción relativa de la clase obrera en relación a otras clases, y que ello llevaría a considerar, en primer lugar, el papel político de estos otros sectores medios. Entre las cifras se consulta el aumento porcentual del sector comercio y servicios de un 37 por ciento en 1970 a un 50 por ciento en 1981.

El PC zanja el problema recurriendo, como siempre, al marxismo leninista. "En términos efectivamente marxista-leninistas, jamás se ha afirmado que el rol de la clase obrera dependa fundamentalmente de su índice numérico o cuantitativo... Si tuviéramos que atenernos a la razón numérica, nunca habría sido posible el triunfo de la revolución socialista en Rusia zarista y los primeros pasos de la construcción socialista en la Unión Soviética, pues se trataba de un país en que la inmensa mayoría de la población era campesina, 'inmensa masa pequeño burguesa', en las propias palabras de Lenin y ¿Y qué decir de Bulgaria y Cuba, en las que la mayoría numérica no era clase obrera?"

No fue precisamente una respuesta a la profunda crítica manifestada por los socialistas de Briones, señalando que "la innegable dependencia doctrinal del PC de Chile en su relación con el PC de la URSS lo ha llevado casi de manera permanente a supeditar su acción bajo el padrón de los intereses de la política internacional de la Unión Soviética más que de los intereses populares".

Sobre el punto, el documento donde que la actual lucha, "en todas sus formas, incluyendo la violenta",

siendo el modelo, el esquema posible para llevar a cabo su proyecto histórico, es algo que a los no-comunistas da risa y califican de "beatería", pero que el PC reconoce como verdad sacrosanta.

Tanto así que, ahondando en su actual línea política, los analistas y los que mantienen contactos más cercanos con la dirigencia se encuentran con sorpresas. ¿Qué empuja a los "cuadros" más jóvenes, los "insurgentes" que hoy han desplazado a los "viejos tercios", de la vía democrática?

"Una especie de teoría de que la 'pera está madura', que la situación económica es tan grave, que las protestas han sido tan "exitosas", que la desesperación de los pobladores (que para los comunistas forman "el ejército obrero de reserva", por su condición mayoritaria de cesantes) es tan desesperada, que lo ocurrido en los sectores populares ha alcanzado ya un grado de 'insubordinación civil', que... jamás se volverá a presentar una oportunidad como ésta para pasar del gobierno militar a la revolución comunista".

Eso explica, por un lado, su insistencia en todas las formas de lucha, incluida la violencia y el patrocinio que intenta hacer, en detalle en su última carta pública, de "el uso de piedras contra Carabineros... las barricadas de neumáticos quemados, los grandes troncos de semáforos, el cobro de peaje o los asaltos a supermercados... formas de lucha que apoyamos, nos esforzamos por darles la mejor dirección y participación en ellas...".

Se explica esa declaración —que les cuesta un serio descalabro en sus intenciones de aproximarse a la Alianza Democrática— y se entienden sus demandas de continuar las protestas "sin transar" porque estiman que la acentuación de esa "insubordinación civil" hará que, finalmente... la fruta caiga del árbol en su mano.

Y se entiende también que el otro camino que ofrecen —intransigente— sea el de un Pacto Constitucional para llamar a una Asamblea Constituyente y a un Gobierno provisional. De ese Gobierno provisional lo esperan todo. Exigen "la estatización de la banca, del comercio exterior y de la industria monopolística, la dictación de una nueva ley de Reforma Agraria, la remoción de todos los mandos de las FF.AA., la moratoria de la deuda externa, la democratización del Poder Judicial".

La fruta les parece tan madura —afirman algunos observadores— que, siempre con Lenin en la mano, hacen comparaciones entre el momento en que cayó el Zar en la Rusia de 1917 y el momento en que en Chile asumiera la Constituyente: "La primera medida del Gobierno socialdemócrata fue el retorno de los exiliados (entre ellos Lenin y Trotsky) que luego harían la revolución. El Gobierno 'menchevique', con el socialdemócrata Kerenski a la cabeza, trató de encauzar al país dentro de una 'moderación' de los ánimos. Los bolcheviques le hicieron oposición aprovechando el descontento y el desconcierto de esos caóticos primeros meses. Terminaron desplazando a los socialdemócratas y concretando una revolución que se mantiene en el poder luego de sesenta años".

El esquema de la revolución de octubre —les parece a los comunistas más exaltados— estaría a punto de desembocar en Chile. De ahí —indican algunos— que, aunque a primera vista parezca desconcertante, al PC no le importe mantenerse marginado de lo que se ha llamado un gran acuerdo nacional: "Todos saben, hasta los más encandados opositores, que una vuelta rápida al mando civil democrático no resolvería los problemas económicos, no superaría la cesantía, el problema de vivienda, etcétera, de un día para otro. Con los comunistas incentivando ese caldo de cultivo, la verdad es que cualquier Gobierno lo pasaría mal".

Entonces, la tendencia de la oposición democrática ha sido incluir a los comunistas dentro del acuerdo: "son preferibles los comunistas dentro del acuerdo, involucrados con el nuevo proceso, no afuera capitalizando el descontento", es el argumento muchas veces escuchado.

Pero no atendido por el PC que, definitivamente, tratando de resolver sin quiebre sus propios conflictos internos e ilusionado con coger la fruta que cree a punto de caer del árbol, ha ejecutado una movida política que sólo sorprendió a los que no están al tanto de su propio "proceso mental" para llevar adelante el proyecto histórico de Marx y Lenin.

Que Lenin y la revolución de octubre —ocurrida hace 67 años— siguen

Por MARIA ANGELICA DE LUIGI

¿La clase obrera?

El sacrificio de enemistarse con sus "aliados históricos" es un precio que, al parecer, el PC —en aras de su unión interna— ha decidido pagar... "al menos en la actual conjuntura, porque ellos cuentan con que, polarizada la situación en Chile, buena parte de esa izquierda volvería a ser su "aliada natural".

La divergencia salta también energicamente en el documento de los socialistas de Briones: "La conducta (del PC) de desconocimiento, hostigamiento, y a veces franca agresión en contra nuestra... pone en el tapete como problema prioritario para el PC la conquista "a cómo dé lugar" de la hegemonía del movimiento popular".

Respuesta de "El Siglo": "Compañeros! ¿Dónde estamos? Agresiones son las que estamos respondiendo. Hostigamiento de parte nuestra no hay ni habrá. ¿Desconocimiento? ¿Quiénes han aceptado y toleran hasta hoy una alianza excluyente: Ustedes o nosotros?"

La referencia a la Alianza Democrática es evidente e implica muchas más discrepancias entre los antiguos aliados. No sólo implica ya el proyecto histórico entre los que, siguiendo con el marxismo, postulan hoy un socialismo democrático en contra del "leninismo de Estado" de los comunistas. Se profundiza, además, en el análisis sobre la "capacidad revolucionaria" de la actual clase obrera, que muchos advierten bastante disminuida en estos once años de gobierno militar. El mismo órgano oficial del PC sale a enfrentar estas teorías que califica peyorativamente de "renovadas": "Supuestamente —señala— la 'modernización' del capitalismo habría significado una importante disminución cuantitativa de la clase obrera en beneficio de las capas medias de la sociedad. Tal decisivo cambio cuantitativo redundaría, a juicio de estos nuevos teóricos, en la incapacidad de la clase obrera para conducir a otras clases y capas sociales tras un proyecto revolucionario y renovador de la sociedad".

Los análisis socialistas "renovados" indican, entre otras cosas, que los cambios económicos introducidos durante estos once años han disminuido la proporción relativa de la clase obrera en relación a otras clases, y que ello llevaría a considerar, en primer lugar, el papel político de estos otros sectores medios. Entre las cifras se consulta el aumento porcentual del sector comercio y servicios de un 37 por ciento en 1970 a un 50 por ciento en 1981.

El PC zanja el problema recurriendo, como siempre, al marxismo leninista. "En términos efectivamente marxista-leninistas, jamás se ha afirmado que el rol de la clase obrera dependa fundamentalmente de su índice numérico o cuantitativo... Si tuviéramos que atenernos a la razón numérica, nunca habría sido posible el triunfo de la revolución socialista en Rusia zarista y los primeros pasos de la construcción socialista en la Unión Soviética, pues se trataba de un país en que la inmensa mayoría de la población era campesina, 'inmensa masa pequeño burguesa', en las propias palabras de Lenin y ¿Y qué decir de Bulgaria y Cuba, en las que la mayoría numérica no era clase obrera?"

No fue precisamente una respuesta a la profunda crítica manifestada por los socialistas de Briones, señalando que "la innegable dependencia doctrinal del PC de Chile en su relación con el PC de la URSS lo ha llevado casi de manera permanente a supeditar su acción bajo el padrón de los intereses de la política internacional de la Unión Soviética más que de los intereses populares".

Sobre el punto, el documento donde que la actual lucha, "en todas sus formas, incluyendo la violenta",

siempre



DECLARACION DE LA COMUNIDAD EUROPEA

Traducción no oficial

"Los diez (Ministros de Relaciones Exteriores de los países de la Comunidad Europea) deploran el aumento de la violencia en Chile. Están firmemente convencidos de que el diálogo entre el Gobierno chileno y la oposición democrática es el camino de llegar a un consenso en el país. Denuncian con fuerza el abandono de ese diálogo en virtud de medidas que perjudican seriamente las libertades individuales básicas contenidas en la declaración de derechos humanos de las Naciones Unidas.

"La proclamación de estado de sitio priva a los ciudadanos chilenos, entre otras cosas, de la protección de un sistema judicial así como de la transición hacia una democracia pluralista.

"Los diez expresan su profunda preocupación acerca de esta situación y sus víctimas, y expresan su convicción de la necesidad de establecer, lo más rápido posible, todas las libertades democráticas en el país.

"Los diez también están preocupados por las restricciones que ha interpuesto el Gobierno chileno para el reingreso a su país de un número muy grande de chilenos. Esperan que el Gobierno chileno reconsidere su política y revise los casos de aquellos ciudadanos a quienes les está prohibido retornar a Chile".

12 de Noviembre de 1984

Pinochet won't go

The Economist
24/11/84



Unless Chile's politicians create a workable alternative

If Chilean democrats really want President Augusto Pinochet to end 11 years of military rule, they are going the wrong way about it. They are violently demonstrating for his departure. They are not demonstrating that they can produce the sort of alternative government that might persuade him to depart. General Pinochet is a stubborn man, and still commands the instruments of power in Chile. He will not make way for a vacuum. And the people around him who might be urging him to give way will not do so until a democratic alternative has taken shape.

The opposition's technique is to organise a series of "days of national protest", the next of which are due on November 27th and 28th. These days of protest have been increasingly destructive. They have led to bomb explosions and attacks on electricity pylons. A state of siege was imposed this month. The police rounded up thousands of slum-dwellers, arresting 227 of those with police or terrorist records and banishing another 40 to mountain villages for three months. Chile's bishops have held a day of fasting and prayer to "pacify spirits and pray for a consensus that will allow us to rebuild society".

That consensus is still missing. Without it, unlike some other Latin American dictatorships, the Pinochet regime has no incentive to budge. Unlike the Argentine generals, President Pinochet is not retreating headlong from a Falklands defeat. Unlike Brazil's General Figueiredo, he does not see himself as the midwife who will bring about a rebirth of democracy; he is an anti-democrat on principle, not just because democracy did not work last time. Unlike most Latin American military presidents, General Pinochet is still on active service as the army's commander. And, unlike most military bosses, he has a claim, of sorts, to legitimacy: a referendum in 1979 brought in a constitution which entitles him to remain in office until 1989.

None of this would necessarily prevent political change if General Pinochet's advisers, who are worried by the growing violence in the country, could tell him that a return to democracy would not mean the collapse of society he claims to fear. In Argentina, the generals knew they would hand over power to the candidate either of the Radical party (Mr Raul Alfonsín, who got it) or of the Peronists. Brazil's generals know they will hand over the presidency next year either to their own

man or to the opposition candidate, whom some of them privately prefer. All the possible contenders in those countries are middle-of-the-roaders. That is why re-democratisation is possible.

In Chile, the Christian Democratic party—probably the country's biggest—is divided between men who are prepared to talk about the future with the friends of the regime and those who want to rival the Communists for control of street demonstrations. The conservative National party is split in two. The Socialists, who under the late President Allende were to the left of the Communists, have splintered into several factions.

Look back to 1964

Can Chile put together a workable alternative of the centre? Well, it did in 1964. Then, as now, Chile was divided into three: the National party, the Christian Democrats and the Marxist left. To stop the left's Allende winning that year's election, the National party backed the Christian Democratic candidate, Eduardo Frei, who then gave Chile six years of modest economic growth and continuing freedom. At the next election, in 1970, the National party and the Christian Democrats went their separate ways; Allende scraped home with 36% of the vote; and the sequence of events that led to the Pinochet regime began.

The necessary condition for a return to democracy is an understanding between the National party and the Christian Democrats. That requires both parties to pull themselves together under leaders who will collaborate to produce a coherent programme of government: who will, in short, rebuild the centre. The two parties could then issue a joint call for the election, in early 1986, of a congress which could amend the Pinochet constitution. This would be welcomed by many present supporters of the Pinochet regime. A lot of Chileans, who accepted military dictatorship after the Allende experience, nevertheless want to see democracy restored. General Pinochet would presumably stay on as president, but he would have to coexist with a congress pressing him to step down, sooner or later, in favour of a civilian.

It is always a temptation for men trapped in powerless opposition to squabble interminably among themselves; that is why many dictatorships last longer than they need. Chile has to produce an opposition that shows it can also be a responsible government.

"Manifestaremos Dentro del Estado de Sitio"

- ★ Preocupa a Washington la Crisis Chilena: Hughes
- ★ Cuatro Personas Heridas por Disparos de la Tropa

SANTIAGO, Chile, 28 de noviembre. (DPA, AFP, AP, EFE y UPI)—"Santiago es una ciudad ocupada militarmente y el propósito intimidatorio de Pinochet se ha cumplido. Vamos a tener que acostumbrarnos a protestar bajo estado de sitio", dijo hoy Ricardo Lagos, líder de la opositora Alianza Democrática.

La jornada de protesta nacional que culmina hoy, no alcanzó la magnitud prevista, porque el gobierno militar logró intimidar a la población, según se comentó en círculos políticos, mientras que en Washington el Departamento de Estado manifestó su "creciente preocupación" por la situación chilena y exhortó a

SIGUE EN LA PAGINA ONCE



HORTENSIA Bussi, viuda del asesinado Presidente de Chile, Salvador Allende, habla de la situación política de su país. (Foto de Dante Bucio)

- ★ Institucionaliza el Terror el Régimen: Hortensia Bussi
- ★ Provoca una Guerra Civil que Nadie Desea, Afirma

Por R. RIVA PALACIO

Seria, firme, emotiva. Hortensia Bussi viuda de Allende, en el exilio desde hace 11 años, sentencia:

"Pinochet ha declarado la guerra al pueblo chileno. Pinochet quiere institucionalizar el terror. Pinochet quiere mantenerse en el poder por la fuerza de las armas."

El régimen de César Augusto Pinochet, general, presidente chileno, cabeza de un golpe de estado que derrocó al gobierno constitucional de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, tiene al país en estado de sitio, toque de queda, censura a los medios de comunicación; hay allanamientos, reportes de tortura, repre-

SIGUE EN LA PAGINA VEINTE

Postulan en Sonora los Tres Sectores del PRI a Rodolfo Félix Valdés

(Información en la página 41)

Suspensión de Garantías en Perú Como Respuesta al Paro de la CGTP

(Información en la página 2)

Plazo que se Cumple

UNA clara imagen de lo que es el actual régimen chileno se decanta de las declaraciones emitidas por la señora Hortensia Bussi, viuda de Salvador Allende, quien fuera sacrificado por las fuerzas encabezadas por Augusto Pinochet en un acto de regresión que ha sumido al pueblo chileno en profundas depresiones.

Motivos tiene la señora de Allende para guardar acerbos resentimientos contra el régimen que no sólo asesinó a su marido, sino a la democracia y la libertad en su país, pero no son ellos los que hablan al señalar que "Pinochet ha declarado la guerra al pueblo chileno", sino el estricto reconocimiento a la verdad.

Lo que está ocurriendo en el país andino es, en efecto, una guerra declarada por la dictadura contra los esfuerzos de emancipación que los grandes sectores populares están lle-

vando a cabo, mediante el pago de un elevado precio en vidas y libertades cotidianamente sacrificadas por el indebido ejercicio de las armas.

Una guerra que ya tiene perdida el Presidente chileno y sólo queda por cumplirse el plazo señalado por la historia para que cambie el fiel de la balanza con el desplazamiento del régimen militar por otro que seguramente será civil y representativo del pueblo.

Palabra por palabra, el análisis que hoy publicamos de la situación chilena en boca de Hortensia Bussi de Allende es fidedigno y constituye un ilustrativo documento para comprender a fondo lo que está ocurriendo en su patria. "Son estertores, la agonía de un régimen", dice en relación a los sucesos que commueven al mundo, y como estertores no es mucho lo que pueden todavía prolongarse artificialmente.

"Manifestaremos Dentro del Estado de Sitio"

Sigue de la primera plana
plantear iniciativas que permitan superar "el impase"

que detiene la transición de la democracia en el país. Lagos, de la Alianza Democrática, reconoció que la

situación puede ser considerada como "una victoria de Pinochet", pero advirtió que habrá otras manifestaciones

bajo distintas formas, providas por la Alianza agrupada a derechistas republicanos, democristianos, radicales, socialdemócratas y un sector del socialismo. La protesta de dos días se inició el martes pasado con manifestaciones aisladas en las que hubo decenas de detenidos y algunos golpeados, pero las autoridades informaron que la vida del país no fue alterada como ocurrió durante el "paro nacional" que organizaron los sindicatos en octubre pasado.

Sin embargo, cuatro personas resultaron heridas anoche por disparos de militares y policías en incidentes ocurridos en el primer día de las protestas a nivel gubernamentales, caracterizado por el gran despliegue de tropas en las calles.

Erika Fuentes Altamirano, de 16 años, recibió un balazo en el tórax cuando fuerzas militares dispersaron a manifestantes.

Otras tres personas resultaron igualmente heridas de bala o balines de goma en otros puntos de la ciudad, según testigos.

El aparente fracaso de la jornada que hoy culmina se debió, según el líder Ricardo Lagos, de Alianza Democrática, a que "Santiago es una ciudad ocupada militarmente", añadió el líder.

"CRECIENTE PREOCUPACION"

John Hughes, vocero del Departamento de Estado, destacó que no deseaba dar la impresión de que Estados Unidos aspira a dirigir la búsqueda de una solución a la crisis política que afecta al país sudamericano.

"No estamos sugiriendo eso. Estamos sugiriendo a quienes están por el progreso y la democracia, que tomen iniciativas para lograr sus fines", subrayó.

Asimismo, Hughes se negó a revelar, en rueda de prensa, cuál será la posición de Washington cuando el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo considere, hoy o mañana, un préstamo a Chile por 125 millones de dólares que se destinaría a obras municipales. "Pienso que no vamos a indicar nuestra posición antes de la votación", dijo.

Hughes insistió en que Washington ve la situación en Chile con "creciente preocupación" ante el ciclo de terrorismo, opresión y protestas que amenaza al proceso de transición e im-

"Manifestaremos Dentro del Estado de Sitio"

Sigue de la página once

pide la formación de un consenso" de las fuerzas oficiales y las de afuera del gobierno, manifestó el vocero.

En tanto, el Sindicato de Periodistas de Estados Unidos calificó hoy de "censurable" la disposición del gobierno militar de Chile acerca de retirar las acreditaciones a los corresponsales extranjeros residentes en el país.

"Cualquier medida que pueda perjudicar la seguridad de los corresponsales extranjeros generará la vigorosa condena de la comunidad periodística internacional, particularmente de Estados Unidos y Canadá", dijo el presidente del sindicato, Charles A. Perlick Jr., en un comunicado.

POLICIA SECRETO FUE CAPTURADO

Un agente "secreto" fue capturado hoy en Santiago por los estudiantes de la Universidad de Chile y sometido a un "proceso popular", en la Facultad de Ingeniería, según comprobó el corresponsal de la agencia noticiosa AP.

El policía, que se identificó como Víctor Acuña, de 30 años, pertenece a la Central Nacional de Informaciones (CNI) y portaba una pistola Luger.

Los estudiantes lo interrogaron durante una hora y fue entregado posteriormente a las autoridades de la Universidad.

Por otra parte, se informó que las personas confinadas en las últimas cuatro semanas por el gobierno militar suman ya 520.

Noventa y ocho son dirigentes políticos, estudiantiles y gremiales. Los restantes fueron capturados durante los allanamientos masivos.

Tenemos Derecho de Vivir en Chile, Dicen Exiliados

Por JORGE SANDOVAL, corresponsal de EXCELSIOR

ROMA, 28 de noviembre. En una acción más de la llamada "operación retorno de los cinco mil chilenos que viven en el exilio", diez ciudadanos de ese país decidieron desafiar al gobierno militar y abandonar Roma, para imponer su derecho de vivir en Chile.

Los "Diez", que viajan acompañados de cinco parlamentarios italianos, partieron anoche de esta capital y se espera que arriben a Santiago en las próximas horas.

Los funcionarios italianos pertenecen a los partidos socialista, comunista, izquierda independiente y demócrata. Aunque esta misión no fue nombrada oficialmente, fuentes allegadas aclararon que lleva todo el apoyo y reconocimiento del canciller, Giulio Andreotti.

La delegación parlamentaria es portadora de una misiva dirigida al régimen de Augusto Pinochet, en la cual se demanda el fin del estado de sitio y la liberación de los detenidos políticos.

Los diez chilenos que viajan a Santiago son: Antonio Leal, dirigente de Chile Democrático; Daniel Salinas, ex diputado socialista; Iván Quintana, ex diputado comunista; Eduardo Salum, embajador de Unidad Popular en Argel; Héctor Coloma, profesor de estado; Víctor Pinochet, escritor; Roberto Romero, profesor; Rafael Rojas, médico, y Leo-

nardo Soto, técnico agrícola. Hace dos meses, seis chilenos que decidieron retornar a su patria no pudieron entrar al país por órdenes del régimen militar y es muy probable que en esta ocasión suceda lo mismo. Según los exiliados, la denuncia ante la opinión pública y la solidaridad internacional, el apoyo de las fuerzas democráticas del mundo y la misma iglesia, impulsan, día a día, a cientos de chilenos a intentar el retorno a su país.

En caso de que estos diez chilenos no puedan pisar su tierra, los parlamentarios italianos proseguirán con sus gestiones de mediación, que incluyen negociaciones con autoridades gubernamentales a todos los niveles, así como con los representantes de la iglesia católica.

OTRAS RECCIONES EN COLOMBIA

En Bogotá, una veintena de miembros del Comité de Chilenos Demócratas en el Exilio, encabezados por el profesor Oscar Núñez, efectuaron un ayuno de 24 horas en contra de la violencia, que el régimen de Augusto Pinochet ha desatado en los últimos días.

El ayuno, que se inició esta mañana en la sede del Círculo de Periodistas de Bogotá, se prolongará hasta mañana. Entre los participantes están los exiliados chilenos José Fuentes, Patricio Olmedo, Hilda Ffrias, Patricio Vera y Silvio Merelo.

Institucionaliza el Terror el Régimen

Sigue de la página veinte.

Pinochet y, sobre todo, la unidad de todos los chilenos, de todas las fuerzas progresistas.

"Cuando el pueblo se une, triunfa", asevera.

—Realidad histórica. Pero las fuerzas opositoras en Chile están desunidas.

"No negamos que hay divisiones —contesta la señora Allende con un tono de voz más alzado—. Están fraccionadas las fuerzas opositoras. Por el momento hay choques, pero si bien es cierto que no se ha llegado a una concertación, hay unidad de acción, unidad absoluta y entendimiento.

"Pero se ha llegado a una concertación política. Hay que deponer las discrepancias ideológicas porque el hambre y las necesidades del pueblo son más importantes que todo. Es necesaria una concertación más amplia de todos".

Para doña Tencha, la dictadura es una opción que, como se vio en Argentina, se está viendo en Uruguay y se verá próximamente en Brasil, se está clausurando.

La guerra contra el pueblo es "un signo de debilidad" del régimen ante un pueblo que rechaza sus políticas.

—¿Se acerca el fin de Pinochet?

—Sería un falso optimismo decir que ya va a caer; aún tiene el poder de mando", reconoce.

Pero no duda ni se detiene al aseverar:

"Nadie puede asegurar cómo va a caer Pinochet, ni cuándo ni dónde. Pero de que va a caer, de eso sí, tenga usted la seguridad".

BUSCA EL GOBIERNO

Sigue de la página tres

que duró dos horas y media, el mandatario polaco dijo que las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense habían perjudicado la economía de Polonia pero también habían fomentado nexos estrechos con sus aliados del bloque soviético.

Afirmó que Polonia quería mejores relaciones con Estados Unidos, pero criticó acremente la política del gobierno de Ronald Reagan a raíz de que Jaruzelski impuso la ley marcial para aplastar al Sindicato Independiente Solidaridad en diciembre de 1981.

Bromeó en el sentido de que Reagan habían ayudado a que Polonia aprendiera la autosuficiencia.

Institucionaliza el Terror el Régimen: Hortensia Bussi

Sigue de la primera plana
sión, y ha reabierto campos de concentración.

La señora Allende, Tencha —como la llaman—, añade:

“Estos son estertores, la agonía de un régimen. Pinochet ha retrocedido el país casi 20 años en lo económico. En lo social y político, al punto máximo. No aprueba la existencia de partidos políticos ni acepta el diálogo. Rechaza un gobierno transitorio y trata de arra-

sar todas las organizaciones sociales. Se ha llegado a un punto cero.”

—¿Se camina hacia una guerra civil? —inquire el entrevistador.

Y, pausada, tras meditar el alcance de sus palabras, responde:

“Nadie lo desea. Todos quieren que Pinochet caiga en una forma pacífica. Nadie desea la vía violenta, la guerra civil, una guerra fratricida. Pero si sigue es-

ta obstinación de Pinochet...”

—Si sigue...

“El la está provocando. Es tanta la brutalidad, la persecución, que empuja a la gente a defenderse. Pinochet quiere institucionalizar el terror. El practica la violencia. Pero los chilenos han vencido el miedo.”

“Las imágenes del Chile de hoy —y sobre todo la de los detenidos en el Estadio Nacional de Santiago—, son las de hace 11 años.”

“Lo que se vive ahora en Chile es casi igual a los peores primeros momentos después del golpe”, dice la señora Allende. “O el equivalente a los primeros años del golpe en número de torturados.”

Con copias del semanario chileno Hov —de tendencia Demócrata Cristiana—, el único de oposición que, pese a la fuerte censura, no ha dejado de aparecer en los quioscos, con una protesta del Episcopado chileno

que el gobierno no dejó que se difundiera en ningún medio, con recortes de informaciones periodísticas sobre los acontecimientos recientes en su país, señala que a Pinochet no lo asusta la condena unánime de la opinión pública internacional.

Sistemáticamente, la Organización de Naciones Unidas ha condenado al régimen pinochetista. Hace poco la Organización de Estados Americanos lo censuró. La Administración Carter le suspendió asistencia militar y buscó bloquearlo económicamente por su mala actuación en el respeto a los derechos humanos. La Administración Reagan, que reanudó la ayuda, ha dado muestras recientes de su descontento con ese gobierno. El Fondo Monetario Internacional ha detenido una línea de crédito urgente. En Roma la Iglesia Católica no quiere a Pinochet.

“El gobierno de Pinochet está más aislado que nunca”, asegura la señora Allende. “Pinochet está solo. El apoyo sólo lo tiene en la cúpula de las Fuerzas Armadas, porque los cuadros bajos también se han resentido por los efectos económicos. Pinochet quiere quedarse en el poder y se mantiene por la fuerza de las armas”.

Y con el suave acento que no ha podido extinguir el exilio, sostiene:

“Chile vive un clima de estado de guerra. Pinochet ha declarado la guerra y la violencia al pueblo chileno”.

—¿Una guerra de Pinochet contra el pueblo?

—Está en su ideología, en su esquema. Está en su idea fija de que ha renacido el comunismo, que es defensor de la civilización cristiana occidental. Se presenta como adalid para combatir el comunismo. Pinochet achaca todos los males al comunismo.

Y aporta la fría realidad de las estadísticas: más de 40 por ciento desempleados; la inflación es de 8,5 por ciento, según las cifras ofi-

ciales (“más de 50 por ciento en realidad”); la deuda externa, de 22,000 millones de dólares, es la más alta del mundo “per cápita”. Además, hay mendicidad generalizada, prostitución, retroceso industrial y la agricultura se encuentra en su punto más bajo.

“Pinochet ha fracasado —dice, tajante, llanamente, la señora Allende—. “No ha dado ninguna solución a los problemas ni en lo económico ni en lo político ni en lo social.”

“El modelo de Milton Friedman y sus ‘Chicos de Chicago’, está probando ser inoperante en un país en desarrollo. Peor aún, está agudizando las contradicciones.”

“EN LA MAS HONDA DE LAS CRISIS

“Chile se está jibarizando al trazar el paralelo político-socio-económico chileno con el proceso de empequeñamiento de cabezas de los indios jibaros del Amazonas. Está en la más honda de las crisis, más

aún que la de 1930”.

—¿Y cuál es el proyecto político que tiene Pinochet?

—Pinochet piensa gobernar hasta 1989, y después buscar la reelección hasta 1997.

“Pero nuestro pueblo está cansado; nuestro pueblo ha dicho basta y quiere la democracia, ahora”.

“Parece que el anciano de poder de Pinochet es ilimitada. Con 11 años en el poder es el gobierno más largo que ha tenido Chile. Y se ha enriquecido mucho.”

“Entre el pueblo hay ira, indignación y rabia. Nosotros queremos que Pinochet caiga, que haya un gobierno de transición, que se convoque para una nueva Cámara y que se haga una nueva Constitución; más para ello se requieren ciertos factores y determinadas circunstancias”.

Para la señora Allende esos factores son tres: romper la unidad monolítica de las Fuerzas Armadas; que Estados Unidos no apoye a



AHORA EN MEXICO

BROTHER PRINTFORM

electrónica de disco impresor pantalla de 15 caracteres memoria de corrección de 2 líneas justificación de margen derecho memoria de hasta 8 mil caracteres ó 26 diferentes modelos de carta.

BARBOSA Y CIA., S. A. AV. CUAUHEMOC 587
687-90-06, 687-90-96

I. B. M. DE ESFERA

CON CORRECTOR
— NUEVAS —

MUEBLES DE OFICINA
CALCULADORAS-REGISTRADORAS
CAJAS FUERTES



CALCULADORA DE PANTALLA E IMPRESION.
UN AÑO DE GARANTIA
AHORA \$24,750.00

ENTREGA INMEDIATA

MAS AISLADO QUE NUNCA

Pinochet sigue.

JACK ANDERSON

A-III-14

U.S. Planning Tougher Line on Chile

President Reagan will follow up his public criticism of South Africa's white supremacist policies with a tougher line against another unpopulous regime—the military dictatorship of Gen. Augusto Pinochet of Chile.

A preliminary step in implementing the new policy will be the replacement of Ambassador James Theberge, who has spent four years in Santiago trying to ingratiate himself with the Pinochet government and who reportedly opposed the get-tough policy.

In fairness to Theberge, his attitude toward Pinochet may be the result less of sympathy than pragmatism. The strategy behind Theberge's approach is explained in an embassy document, which I quoted in a recent column.

The United States "is critical of the Pinochet government because it has not been moving rapidly enough toward a democratic transition and because of human rights violations in Chile . . .," stated the document. "The U.S. Embassy in Santiago has and will continue to practice secret diplomacy, and the ambassador will quietly discuss with officials of the Chilean government the importance of political liberalization."

With this as his guideline, Theberge repeatedly demonstrated, in small but significant ways, seeming U.S. support for Pinochet. For example, he was the only ambassador from a Western democratic country who attended a recent ceremony honoring the military regime. On the other hand, he was the only one who failed to attend the 10th anniversary celebration of a Catholic human-rights group.

Apparently, Pinochet hasn't been the least influenced by any secret U.S. pressure to liberalize. On the contrary, he recently called out the troops and truncheons to suppress his political opponents in violent confrontations.

So President Reagan will add a little public pressure. The new policy is being drafted behind closed doors by the State Department's Latin American and human-rights bureaus. It's still closely guarded, but my associate Lucette Lagnado has learned about the proposed changes. For example:

- The embassy will attempt a delicate "tightrope act" between the Pinochet regime and the opposition parties. The new ambassador will open lines of communication with both sides, making it clear that the United States doesn't necessarily embrace either the regime or its critics.
- The White House and State Department will make more frequent, public criticism of Pinochet. The pattern, in fact, has already begun. An inside source said the State Department has made about 15 critical public statements about Chile recently.
- Like the first two proposals, an economic "sanction" being suggested by the policy drafters is significant but more symbolic than practical. The proposed policy would have the United States abstain from votes on Chilean loans from the Inter-American Bank and other international institutions. Secretary of State George P. Shultz opposes the use of loans to pursue political policy. But abstention would register U.S. displeasure, without directly blocking the loans or preventing other nations from blocking them.

101 2246 01

A - VII - Revisions Internationally

(New)

DEPARTMENT OF STATE DECLARATION
MONDAY, FEBRUARY 4, 1985

WE CONTINUE TO BE DEEPLY DISTURBED ABOUT THE COURSE OF EVENTS IN CHILE AND THE LACK OF PROGRESS ON THE TRANSITION TO DEMOCRACY. OUR VIEWS ON THE STATE OF SIEGE REMAIN AS STATED BY THE DEPARTMENT ON NOVEMBER 7 AND BY OUR SPOKESMAN IN THE UNITED NATIONS ON DECEMBER 7.

AT THIS TIME I WOULD REITERATE THAT THE U.S. SUPPORTS A RETURN TO DEMOCRATIC GOVERNMENT IN CHILE. WE HOPE THAT THE RENEWAL OF THE STATE OF SIEGE WILL NOT PRECLUDE THE INITIATION IN THE NEAR FUTURE OF TALKS BETWEEN THE GOVERNMENT AND MODERATE DEMOCRATIC FORCES ON A TRANSITION TIMETABLE.

DOMINGO 10 DE FEBRERO DE 1985

A-III-14

E.UU. busca apoyo de Venezuela favor de la democracia en Chile

Washington estudia reanudación parcial de la ayuda militar a Santiago

Golden

WASHINGTON, 9 (UPI)

El gobierno estadounidense pediría al Congreso la reanudación parcial de la ayuda militar a Chile como parte de iniciativas destinadas a persuadir al gobierno castrense de esa nación suramericana a permitir una transición hacia la democracia. Funcionarios del Departamento de Estado.

Una de las medidas sería llevar a la mesa de negociaciones al régimen militar y a la oposición de mediante presiones de gobiernos de naciones americanas y el reemplazo del actual embajador de Estados Unidos en Chile.

Esta última medida, según algunos funcionarios, podría mejorar las relaciones entre diplomáticos norteamericanos en Santiago y líderes gubernamentales y oposición.

Funcionarios gubernamentales esperan apoyo de Venezuela y Brasil en sus esfuerzos por al gobierno y la oposición chilena a la mesa de negociaciones.

La Iglesia Católica en Chile, que el año pasado se podría potencialmente actuar como mediador, ya que se ha "quemado" por sus críticas contra la represión gubernamental, y los funcionarios.

El cambio, contactos entre el partido oficialista de Acción Democrática y la oposición a Democrática Chilena, y entre los militares chilenos y chilenos podrían ser más efectivos, según funcionarios.

Funcionarios del Departamento de Estado, acciones de la embajada de Estados Unidos en Chile con el gobierno y la oposición podrían mejorar el reemplazo del embajador James Theberge, derechista que ha pedido el apoyo a Pinochet opuesto a las denuncias en torno a la presunción de los derechos humanos en ese país.

Se espera que Theberge sea reemplazado por el embajador norteamericano en la India, Harry Harbo.

Esta muestra de la frustración del gobierno del presidente Ronald Reagan con Pinochet surgió el pasado cuando, por primera vez, Estados Unidos se abstuvo de votar en el Banco Interamericano de Desarrollo a favor de Chile, protestando la acción del estado de sitio en ese país.

Desde el 6 de noviembre, Pinochet ha enviado a disidentes a exilio interno, censurado fuertemente la prensa, y proscrito las reuniones públicas.

La policía chilena arrestó el miércoles pasado a tres líderes de la oposición e irrumpió en la sede del Cato Nacional de Periodistas.

Un funcionario del Departamento de Estado dijo que el gobierno no había descartado la opción de votar en contra de una ayuda multilateral para Chile.

Esta es una cuestión que aún no se ha decidido, pero se deberá resolver", dijo un asesor político.

El gobierno estadounidense requiere que el gobierno chileno ponga a la ayuda no humanitaria a los gobiernos chilenos acusados de violar los derechos humanos. Estados Unidos suspendió la ayuda militar a Chile en 1977.

Pinochet, quien derrocó violentamente al presidente socialista Salvador Allende en 1973, se desdijo de declaraciones hechas en agosto indicando que podría convocar a elecciones parlamentarias antes de lo previsto.

De acuerdo a la constitución de 1980, el mandato de Pinochet concluye en 1989.

Desde el otoño pasado, Estados Unidos ha incrementado su presión diplomática sobre Chile, especialmente en los contactos en Washington entre funcionarios del Departamento de Estado y el embajador chileno, Hernán Errazuriz.

Además, progresivamente el Departamento de Estado ha emitido declaraciones que critican fuertemente al régimen chileno.

Sin embargo, según un funcionario del departamento, "nada de lo que hemos hecho ha tenido mucho resultado".

Funcionarios norteamericanos recientemente dijeron a legisladores del oficialista Partido Republicano que debido a que ya casi no tienen influencia sobre Pinochet, Washington desearía reanudar parcialmente la ayuda militar a Chile.

El pedido, de ser realizado, requeriría que el Congreso cambie una ley establecida en 1981 bajo la cual el gobierno de Estados Unidos debe certificar que Chile ha mejorado su récord en el campo de los

derechos humanos para poder recibir asistencia militar.

"Actualmente, no estamos en una posición para certificar la ayuda", dijo un funcionario norteamericano.

Funcionarios gubernamentales dijeron que la ayuda propuesta incluiría 100.000 dólares para el entrenamiento de oficiales militares chilenos —ya pedido en el presupuesto de 1986— y la venta de equipo de seguridad de aviación.

El representante James Leach dijo que el subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, Langhorne Motley, y otros funcionarios gubernamentales se sorprendieron ante la fuerte oposición a la medida de parte de varios republicanos.

El día antes de que Estados Unidos se abstuviera de participar en la votación de un préstamo para Chile del 30 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo —finalmente aprobado—, legisladores presentaron resoluciones instando a Estados Unidos a oponerse a la ayuda no humanitaria al gobierno chileno.

El gobierno de Reagan respondió a la fuerte y creciente presión legislativa afirmando que ocho votos en contra de préstamos multilaterales a Chile bajo el mandato del ex presidente Jimmy Carter no produjeron resultados positivos.

Habla el triunfador

Tancredo Neves concedió su primera conferencia de prensa como presidente electo dos días después de la reunión del Colegio Electoral, respondiendo durante una hora y media a 52 preguntas de periodistas brasileños y extranjeros. Conformando el *slogan* de su campaña "muda Brasil", Tancredo habló a la prensa de modo directo, reinaugurando una práctica que será mensual, a partir del 15 de marzo, cuando llegará de hecho y de derecho al cargo.

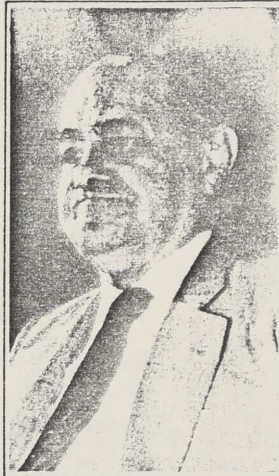
Con relación a la prensa y medios de comunicación, Tancredo precisó que nuevos parámetros serán fijados con la Asamblea Nacional Constituyente "para que tengamos una nueva ley de prensa a la altura de nuestro país; la que está ahí, si fuera aprobada en mi gobierno, sería una deshonra".

"Las concesiones de emisoras de radio y televisión —agregó— han sido hechas por medio de criterios políticos o aun personalistas. La primera idea que se me ocurre es la creación de un Consejo Nacional de Comunicaciones que tenga participación directa en las decisiones de concesión de emisoras de radio y televisión y también de fiscalización de sus actividades.

"El tratamiento que pretendo mantener con la prensa —continuó— no será en ningún momento inferior al que es dado por los presidentes de las naciones más democráticas del mundo, como Francia, Inglaterra o Estados Unidos".

Con relación al golpe de 1964, Tancredo Neves destacó dos aspectos: "En el político, fue la usurpación de los derechos, de las libertades democráticas. Fue realmente un retroceso de conquistas democráticas que teníamos como definitivas. En lo material, hubo significativos avances en las telecomunicaciones, energía eléctrica y muchos otros campos. El Brasil dejó de ser la 28 nación en términos de producto interno bruto, ocupando hoy la séptima posición entre todas las naciones. Es la vieja cuestión política entre la restricción, la libertad y la eficiencia administrativa. Evidentemente, nosotros, como demócratas, sabemos que no compensaron las ventajas materiales delante de las terribles restricciones impuestas a la nación en estos 20 años".

Leircio Miranda



El gran desafío de Tancredo Neves

En lo tocante al rubro de escándalos financieros y corrupción, el presidente electo del Brasil advirtió que "nuestro compromiso es realizar un gobierno austero, digno y de irreprochable moralidad administrativa; en nuestro gobierno cualquier deslize que se practique con el dinero del pueblo será sancionado severamente. Los escándalos ocurridos anteriormente son objeto hoy de comisiones parlamentarias de investigación y están en manos de la justicia brasileña".

Con respecto al Frente Amplio dijo que "la heterogeneidad de fuerzas que apoyan mi candidatura es un aspecto positivo y no negativo; ello da la base política para que el nuevo gobierno tenga la debida autoridad para gobernar".

Cuando se le interrogó sobre el Servicio Nacional de Información (SNI), señaló que "el problema de este organismo es que asumió en el Brasil un carácter policial, violando nuestras tradiciones democráticas. Ningún gran país puede prescindir de un servicio de informaciones. Lo que cabe es limitarlo a sus funciones de asesoría técnica de informaciones".

"Confío mucho en las fuerzas democráticas del país —agregó—; creo que las fuerzas de derecha o de izquierda, llevadas al extremo, que pre-

tendan la subversión del régimen, encontrarán en la propia sociedad la resistencia a sus propósitos".

En cuanto a las torturas y desaparecidos en los regímenes militares anteriores, el presidente electo advirtió que "es evidente que los hechos ocurridos en el Brasil fueron de verdad muy lamentables, pero alcanzamos la amnistía por decisión prácticamente unánime del Congreso. Ella le corresponde a todos y es recíproca, alcanzando a todos los niveles, a todos los departamentos, y a todos los sectores de la vida social brasileña. Reabrir este problema sería implantar el revanchismo en el Brasil. Y descuidaríamos el presente y el futuro. Nuestro tiempo sería pequeño. Y no creo que la sociedad brasileña aspire a esto".

Con respecto a los últimos acontecimientos políticos registrados en el Cono Sur, Tancredo aseguró que "el progreso por la lucha de la democracia está hoy, merced de Dios, muy avanzada. La democracia en la Argentina es una realidad y la nación vive la plenitud de un régimen democrático. El Uruguay, dentro de poco, entregará el poder a un presidente electo en toda su fuerza para ejercer un gobierno plenamente democrático. Donde realmente tenemos problemas es en Chile. Y la posición del gobierno brasileño y de toda la conciencia nacional es de apoyo intransigente a las fuerzas democráticas que luchan en ese país por la restauración de las instituciones libres".

Finalmente, refiriéndose a la moratoria, Tancredo Neves dijo: "Soy contrario a la moratoria unilateral. Una suspensión brusca de nuestros compromisos estremecearía nuestra economía. Y nuestras reservas no son suficientes para que podamos hacer un juego tan duro. El Brasil pagará su deuda. Y lo hará negociando, procurando el mejor entendimiento. El Brasil es una nación seria. Debemos dinero, y éste se paga con dinero. No se paga con el hambre, la miseria, el desempleo del ciudadano brasileño".

"Hasta el día que tome el cargo la responsabilidad de las negociaciones con los acreedores es del actual gobierno. Espero que las negociaciones estén concluidas hasta el 15 de marzo. El Brasil, dentro de sus tradiciones, respetará los compromisos asumidos. Ahora, aquellos que el nuevo gobierno no tenga condiciones de cumplir deberán ser renegociados".

CHD2F

R POLBT 02-06 00241
DP2479 mun exg exb icx

nnnn ggg pppppp vvvv

A-III-14

PRESIDENTE ELECTO BRASIL; SITUACION CHILENA, DELICADA-1
(con neves)

Brasilia, 6 feb (Efe).-- El presidente electo brasileno, Tancredo Neves considera como 'delicada' la situacion politica chilena y el tema formo parte de sus conversaciones con Ronald Reagan y los lideres europeos con los que converso la semana pasada.

El dato fue conocido aqui a medida que se van revelando los detalles de las conversaciones privadas que mantuvo Neves en la gira que cumple por siete naciones de Europa y America.

A pedido del secretario de estado norteamericano, George Shultz, el presidente electo menciono a Reagan el caso chileno.

El experimentado politico brasileno de 74 anos vaticino que el general Augusto Pinochet Ugarte no durara en el poder mas de dos años, publico en su ultimo numero la revista "Veja".

En opinion de Neves el retorno a la democracia de Brasil y Uruguay dejo en mala posicion al regimen militar chileno.

El nuevo mandatario brasileno interpreta que Chile se 'radicalizo demasiado' porque de un lado la mayoria de la poblacion quiere derrocar al regimen y de otro, las fuerzas armadas intentan defender su estabilidad.

En su primera declaracion publica hecha 24 horas despues de ser nominado como el primer presidente civil tras 21 años de gobiernos autoritarios, Neves expreso su apoyo a las fuerzas democraticas chilenas.

sigue hhhh

02/06/13-44/85

CHD9D

R POLBT 02-06 00217
DP2480 mun exg exb icx

nnnn ggg pppppp vvvv

PRESIDENTE ELECTO BRASIL; SITUACION CHILENA, DELICADA-2F

Pinochet desde que accedio al poder en septiembre de 1973, tras un sangriento golpe de estado que derroco al presidente Salvador Allende, tuvo en los regimenes brasilenos a un formidable aliado.

Esa alianza fue mucho mas notoria durante los gobiernos de Emilio Garratazu Medici y Ernesto Geisel.

Las fuentes brasilenas revelaron aqui que el presidente frances Francoise Mitterrand observa con una 'fuerte dosis de pesimismo' la evolucion de los hechos en Chile.

En la conversacion que tuvo Neves con el mandatario galo discordo con el pesimismo de Mitterrand porque solo asigno uno o dos años mas de vigencia al regimen militar chileno.

El presidente francés dijo a su visitante que solo veia una salida para la situacion chilena, en la perspectiva de una fisura en las fuerzas armadas.

Neves, segun las fuentes brasilenas, recordo a Mitterrand que Brasil y Uruguay salieron de su periodo de gobiernos militares y retornaron a la democracia.

El tema de la situacion chilena, agregan las fuentes, tambien estuvo presente en el dialogo que sostuvo el presidente electo en Espana con Felipe Gonzalez y en Portugal con Mario Soares. efe.

frb hhhh

3246 .01

02/06/13-48/85

La izquierda chilena apuesta por la rebelión armada contra Pinochet

3 2 4 6 0 1

ANTONIO CAÑO, ENVIADO ESPECIAL, Santiago de Chile

La izquierda chilena, de la que un alto funcionario de Estados Unidos ha dicho recientemente que sólo busca "venganza por Salvador Allende (el ex presidente derrocado y muerto en 1973) y sangre por Letelier (ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de la Unidad Popular, asesinado en Washington en 1976)", desafía al resto de la oposición y al Gobierno con un programa de rebelión armada hasta acabar con la dictadura.

Hay sectores de izquierda moderada en la Alianza Democrática, incluso en el seno del Partido Demócrata Cristiano, pero la izquierda tradicional está agrupada en el Movimiento Democrático Popular (MDP). La columna vertebral de esa coalición es el Partido Comunista Chileno (PCCh), que en las únicas elecciones libres celebradas en más de 11 años en este país, las de la Universidad Nacional, obtuvo el año pasado el 17% de los votos.

En torno al Partido Comunista se encuentra en el MDP el Partido Socialista de Clodomiro Almeyda (marxista-leninista), el extremista Movimiento de Izquierda Revolucionaria (cuya dirección está radicada en Cuba), otros dos partidos socialistas minúsculos y el MAPU-Obrero y Campesino, de mínima influencia.

El Partido Comunista ha roto con la tradición de moderación de la que hizo gala durante el periodo de Allende, para pasar a defender la lucha armada. La aparición hace menos de dos años del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (nombre de un antiguo espía con los colonizadores españoles), ya responsabilizado del asesinato de varios carabineros y con explosivos, se atribuyó

directamente a una decisión del comité central del PCCh. José Sanfuentes, de 33 años, comunista, secretario general del MDP, rechaza esta acusación. "El Partido Comunista ha dicho que el Frente patriótico Manuel Rodríguez no es su brazo armado, pero le manifiesta profunda simpatía porque son jóvenes que dan su vida por una causa histórica y legítima que es echar a la tiranía. Naturalmente que hay militantes del PCCh que participan en el Frente Patriótico, pero no es un órgano del PCCh".

División opositora

La decisión de los comunistas, que junto con la Democracia Cristiana constituyen el único partido sólido, organizado e implantado, capaz de participar en la lucha armada contra el régimen, es una de las causas de la desunión de la oposición. La Alianza Democrática (AD, demócratas cristianos, liberales y socialdemócratas) ha advertido que nunca negociará con el MDP mientras recurra a la violencia. José Sanfuentes, por su parte, explica que "la acción común se hace sobre la base de las cosas en las que concordamos".

El MDP ha sido declarado anti-constitucional y sus dirigentes tie-

nen que actuar en la clandestinidad, por lo que la entrevista con Sanfuentes exige un largo prólogo de citas falsas, esperas y controles. Sanfuentes niega que el cambio experimentado por su partido no sea realista. "Lo realista es luchar por un solo objetivo: echar a Pinochet. Y no se nos puede decir que sólo lo hagamos con los métodos pacíficos, porque emplear sólo fórmulas pacíficas significa tener a Pinochet hasta 1989 o hasta el año 2000. Frente a esta dictadura fascista es legítimo rebelarse y a utilizar toda forma de lucha".

Sanfuentes representa al sector del PCCh con el poder en el comité central. Apoyados por el secretario general, Luis Corvalán, que reside en Moscú, la generación jo-

ven ha impuesto su táctica radical, que no le está dando malos resultados, sobre todo por el fracaso de la política de diálogo de AD. El sentimiento anti Pinochet, no sólo de las clases más humildes, sino también entre la clase media, es tal, que buena parte de la población es capaz de admitir los métodos violentos en la proporción limitada con que se han empleado hasta ahora.

La crítica fundamental que otros sectores de oposición le hacen al MDP es la de que con su táctica están justificando la represión del régimen, desproporcionada para el nivel de terrorismo existente.

El PCCh no rechaza el diálogo por principio. "Nosotros estamos

de acuerdo con negociar con los hombres de armas de este país que estén dispuestos a democratizar el país, esa es la única condición. Si las Fuerzas Armadas desplazan a Pinochet y se muestran dispuestas a convocar unas elecciones, nosotros estamos dispuestos a conversar mañana mismo", afirma el dirigente comunista.

Mientras tanto, el PCCh confía en un crecimiento generalizado de las protestas nacionales. "Pretendemos convertir al país en un gran escenario de lucha popular, empujando por la protesta el próximo 27 de marzo, que debe de colocar al pueblo chileno ante el segundo gran paro nacional, probablemente el próximo 30 de abril", afirma Sanfuentes.

alentaba más que presionaba al propio régimen pinochetista para que emprenda esas reformas de manera que se pueda llegar en un cambio en cámara lenta hasta la fecha constitucional de 1989. El propio Motley ha exhibido en declaraciones realizadas durante su visita una comprensión sin límites para los gobernantes de Santiago y su entrevista con los representantes de la oposición moderada se ha parecido enormemente a aquellas protocolarias tomas de contacto con la oposición al franquismo durante la última fase de la dictadura española. El segundo grupo es el de esta misma oposición moderada, formada principalmente por quienes se cerraron política y económicamente contra el régimen de Allende sin calcular las fuerzas aciagas que iban a desencadenar apoyando el golpe de Estado de 1973. A esta fuerza se suman algunos posibilistas de mejores credenciales democráticas que los anteriores, pero de desfalleciente confianza en el futuro. El tercero es el propio régimen, que trata de perpetuarse como clase y como fuerza capaz de evitar todo tipo de represalias, incluyendo la conservación de los privilegios materiales de los que ahora gobiernan.

La negación a este tránsito moderado e ideal, que ha tratado hasta ahora de aplicarse como fórmula única a otros muchos países del mundo —y no sólo dentro de América— sin resultados prácticos, hay que verla en un sector popular que parece muy amplio —por las manifestaciones, los mítines, los desafíos a los disparos, a las detenciones y a la nueva ola de torturas— y, paradójicamente, en el propio Pinochet. Nada más lejos de su ánimo que retirarse; y, por ello, la única posibilidad de mantenerse es la de continuar ejerciendo la violencia institucional. Su intento es el de vender ese carácter de contrarrevolucionario único y sin alternativa posible a Estados Unidos, para lo que había encontrado un interlocutor muy estimulante en el embajador de Reagan en Santiago, James Theberge. La última operación de cambio de Gobierno realizada por Pinochet parece dirigida principalmente a deshacerse de quien podía ser un sustituto capaz de protagonizar la transición sin Pinochet, el ministro del Interior, Sergio Onofre Jarpa, reemplazándole por un desconocido García Rodríguez, al mismo tiempo que a sus partidarios colocados en el Gobierno anterior, por unos jóvenes tecnócratas poco comprometidos con los primeros tiempos siniestros del régimen. Sin embargo, este *lavado de cara* de su Gobierno no sirve a otro propósito que al de concentrar toda la fuerza del mismo en el propio dictador, rodeado del denso anonimato de sus colaboradores.

El conjunto de peticiones que presentaba entonces el conglomerado de la oposición se basaba especialmente en la desaparición de Pinochet, al que sustituiría una asamblea constituyente y un gobierno provisional, bajo los cuales se haría una Constitución realmente democrática. Actualmente, la Alianza Democrática (el partido de derecha republicana, los socialdemócratas, la Democracia Cristiana, los radicales y una parte de los socialistas) y la Iglesia católica se ven enfrentadas con la presión de mantener a Pinochet hasta 1989 a cambio de unas reformas que estarían sostenidas financieramente por Estados Unidos. Y a cambio, también, de repudiar a los izquierdistas del Movimiento Democrático Popular y del bloque socialista que presionan en el sentido del cambio inmediato de régimen.

La solución no se vislumbra en el horizonte. Sobre todas estas presiones de los grupos distinguidos hay una que puede tener más fuerza: la del velocísimo deterioro económico y social que sufre el país. Quienes lo padecen han cifrado en el nombre de Pinochet la clave de todos los males chilenos. Es esta lucha contra una agitación creciente la que se trataba de restañar por la reforma hacia mayores libertades —un remedo del *aperturismo* que también vivió el franquismo— y la entrada de ayudas económicas. Pero Pinochet insiste en la exhibición y el uso continuo de la fuerza para prevenir la revolución, aceptando la reforma sólo como una posible máscara de su violencia.

Pinochet y las reformas en Chile

LA IDEA de que sea el propio Pinochet el que presida una transición hacia una democracia en Chile no parece demasiado verosímil. Hay, sin embargo, tres grupos que están obrando en ese sentido. El primero tiene su centro motor en la propia acción política norteamericana. La reciente visita de dos días del enviado especial de Reagan, Langhorne Motley, ha servido para presionar a la oposición de centro-derecha para que acepte un plan de reforma *blando* de las instituciones y, a cambio del apoyo de Washington, se aisle de la izquierda, al tiempo que

el País
4-11-85

Cartas al director

La izquierda chilena

En diversos despachos enviados por corresponsales de ese diario que viajan a Chile, y especialmente en los del periodista Antonio Caño, se formulan apreciaciones y juicios sobre los partidos políticos chilenos que creo indispensable objetar.

1. El MDP no representa a la *izquierda tradicional* chilena, sino a una parte —tal vez la menor— de ella. La izquierda tradicional (década del treinta en adelante) estuvo integrada por el Partido Socialista, el Partido Radical y el Partido Comunista. Más adelante, en tiempos de la Unidad Popular, la

coalicción izquierdista la integraban el Partido Socialista —cuyo militante Salvador Allende accedió democráticamente a la Presidencia de la República—, el Partido Comunista, el Partido Radical y tres grupos provenientes del movimiento cristiano: el MAPU, el MOC y la Izquierda Cristiana. En las últimas elecciones parlamentarias, en marzo de 1973, el Partido Socialista obtuvo el 60% de los votos de la izquierda.

2. El Partido Socialista de Chile no ha sido nunca un partido *socialdemócrata*, y más aún, por establecerlo así su Declaración de Principios del año 1933, no ha pertenecido jamás a ninguna internacional, lo que no obsta a que mantenga fraternas relaciones con numerosos partidos socialistas y comunistas del mundo.

3. El Partido Socialista de Chile se define como un partido autónomo, marxista, revolucionario y democrático. Para nosotros, revolución significa *cambio de estructuras*, y para llegar a ese *cambio* se puede recurrir —según las circunstancias históricas— a diversos métodos

Pasa a la **página 12**

3246 01

Viene de la **página 11** de lucha. Por ejemplo, Allende llegó a ser presidente de la República por la vía constitucional.

4. Ricardo Lagos, tan reiteradamente presentado como el líder *socialdemócrata*, no es el secretario general del Partido Socialista de Chile, pues ese cargo lo ocupa Carlos Briones, último ministro del Interior de Salvador Allende. Lagos es el representante de la dirección del partido en la Alianza Democrática, organismo que trata de llegar a una *oposición nacional única*, instrumento necesario para desestabilizar a la dictadura. El socialista Ricardo Lagos no es, entonces, *socialdemócrata*, sino un miembro de la dirección partidaria que reside en Chile.

5. Si el cartabón que se utiliza para definir a los que son de izquierda o son socialdemócratas es la adhesión que muestren a los llamados a la *lucha armada*, debo aclarar que ser izquierdista no significa llamar al pueblo a que se lance de cabeza contra la pared, ya que una invitación como esa contraría no sólo las leyes de la física y de la biología, sino que también las normas más elementales de la lógica formal. En *estos momentos*, una apelación a la lucha armada en Chile es una proposición de suicidio colectivo. Si somos *menos* izquierdistas porque creemos que ahora lo que corresponde es impulsar las protestas nacionales, la movilización de las masas, los cacerolazos y otras formas de expresión de la voluntad nacional, tendríamos que aceptar el criterio de los corresponsales extranjeros. Pero, la verdad, no queremos entrar en una polémica con quienes demagógicamente llaman a la rebelión, ya que lo único que nos interesa es la unidad del pueblo para oponerse a la dictadura.

6. *Last but not least*, la *división* del Partido Socialista de Chile es más aparente que real. El grueso de la

militancia permanece, en Chile y en el exilio, en torno al *tronco histórico*; basta con que se mire la realidad de los exiliados en España, que es idéntica a la de otros países europeos: permanecen en el partido los parlamentarios residentes en España, como Erich Schnake, Alejandro Jiliberto o Leonargo Hagel; los periodistas residentes en España, como Miguel Ángel San Martín, Víctor Vaccaro, Ruth González, quien firma esta carta, etcétera. Todos queremos defender la *imagen* de un partido al que le hemos dedicado la vida entera y por cuya causa fuimos a un campo de concentración y luego a un doloroso y traumático exilio, prácticamente indefinido. Para nosotros no se trata de retóricas ni de bizantinismos; se trata de la razón misma de nuestras vidas, y nos impacta el vernos definidos como reformistas o socialdemócratas por haber seguido siendo, simplemente, militantes del Partido Socialista de Chile, buscando por nosotros mismos el mejor camino para nuestro combate.—Oscar Waiss, ex director del diario *La Nación* y actual director de la revista teórica del PSCH *Pensamiento Socialista*. Madrid.

al País!
12-111-85

Cartas al director

La izquierda chilena, alternativa de poder

Los chilenos residentes en España, y especialmente los que tenemos el título de exiliados políticos, agradecemos la permanente información que su diario contiene sobre nuestra patria. En ese plano no podemos dejar de recordar las excelentes crónicas que enviara desde Santiago José Luis Martín Prieto.

Sin embargo, en los últimos días han aparecido apreciaciones en ese periódico, provenientes de un enviado especial, que presentan un panorama de la política chilena tan maniqueo como mal informado.

Constituye una falta de información sostener, como lo hace el se-

ñor Caño, que la "izquierda chilena desafía al resto de la oposición y al Gobierno con un programa de rebelión armada hasta acabar con la dictadura", como asimismo decir que "la izquierda tradicional está agrupada en el Movimiento Democrático Popular (MDP)"..., cuya "columna vertebral es el partido comunista". De alguna manera, ésta es la interpretación interesada de la propia dictadura y de unos pocos sectores de la política norteamericana. Me explico: la *izquierda tradicional chilena*, por su peso específico, ha sido una alternativa de poder desde 1938 en Chile. Pinochet y algunos norteamericanos quieren convencer al mundo de que tras esta izquierda sólo se encuentra la "venganza por Salvador Allende" y el deseo de "sangre por el asesinato de Orlando Letelier", ambos próceres del socialismo chileno, y, qué decir, el caos, la violencia y la negación de la democracia. Así las cosas, sería preferible continuar con Pinochet. No habría más alternativas. Al presentar de la manera que lo hace el enviado especial la situación chilena

Pasa a la página 10

3246 01

Viene de la página 9

na, sin quererlo, se ciñe a ese padrón.

Y puntualizo: la llamada *izquierda chilena* estuvo tradicionalmente integrada por el Partido Socialista de Chile, el Partido Comunista de Chile y el Partido Radical, a los que en los años previos a la Unidad Popular se agregaron el Partido Mapu Obrero y Campesino, el Mapu y la Izquierda Cristiana. De esta alianza, el partido socialista representó en marzo de 1973 más del 50% de sus votantes. Hoy la situación es bastante diferente a como se pinta en las crónicas mencionadas y a como fue en el pasado. La Alianza Democrática, además de la Democracia Cristiana y los liberales republicanos, está integrada por el partido socialista, la convergencia socialista, el Partido Radical y el Mapu Obrero y Campesino. De la llamada izquierda tradicional sólo queda en el MDP el partido comunista y una fracción del partido socialista, además del MIR, movimiento que jamás participó en la Unidad Popular.

Sostener lo contrario, al calor de la realidad, es pensar que la izquierda sólo está donde se encuentra el Partido Comunista de Chile. Sobre todo si en la información que comento se le asigna al Mapu Obrero y Campesino una pertenencia al MDP que no es tal.

Es obvio que ya no se pueden utilizar afirmaciones sobre una *izquierda tradicional* que ha variado tan sustancialmente, ni atribuir dentro de ella liderazgos que, situados en un partido minoritario, aunque importante, no son posibles de cuantificar.

Más difícil aún es hacerlo si se considera que, además de la Alianza Democrática y el MDP, se encuentra también en el espectro opositor el Bloque Socialista, del que forman parte el Partido Socialista de Chile, el Mapu Obrero y Campesino, el Mapu, la IC y la CS, que —bien podría sostenerse— es la fuerza mayoritaria de la izquierda y el proyecto más serio de un socialismo renovador, democrático y revolucionario para Chile. Pero el adivinar dónde están las mayorías en plena dictadura no es mi oficio, y sólo quedará en claro, como en España, cuando se restablezca el juego democrático.

Tampoco parece objetivo —por la intencionalidad que allí tiene de quitarle su personería— sostener que el Partido Socialista de Chile, representado en la Alianza Democrática por uno de sus principales dirigentes, Ricardo Lagos, sea un partido socialdemócrata. Nada tenemos contra la socialdemocracia, y, por el contrario, creemos que la

europaea ha sido el mejor bastión contra la dictadura chilena y le ha brindado a nuestro pueblo un valioso apoyo solidario. Pero, simplemente, somos socialistas revolucionarios y autónomos, y preferimos, en consecuencia, que no se nos confunda ni con el partido comunista, como les sucede a algunos en mi país, ni con una socialdemocracia, que en Chile existe y se encuentra en la Alianza Democrática.

Por último, estimar que "buena parte de la población es capaz de admitir los métodos violentos", como estrategia de liberación de mi país, insinúa, por el contexto de la crónica, algo más, y es, a mi juicio, desconocer la idiosincrasia, la historia y el sufrimiento del pueblo chileno.

Es natural que la desesperación, el hambre y la carencia de toda clase de libertades provoquen estallidos de violencia en Chile. La mayor parte de las veces, impulsados por la propia dictadura. Pero de allí a transformarlos en métodos de lucha y finalidad asumidos "por una parte importante del pueblo chileno" hay un abismo. Las protestas generalizadas, las huelgas y la desobediencia civil son formas democráticas de lucha contra una dictadura, y a ello se suma toda la oposición.

La dictadura se asienta en las armas, y con ellas reprime y agobia a la inmensa mayoría de los chilenos. Las armas y la violencia son sus instrumentos diarios de trabajo, es lo que mejor conoce y domina.

El pueblo chileno conoce la democracia por más de un siglo y ha sufrido la fuerza durante estos últimos 11 años, sin más armas que su organización. Situar hoy los términos del desafío democrático en la violencia es hacerle el caldo gordo a quienes pueden más eficazmente que nosotros ejercerla. En mejores condiciones de organización y de cuota de poder no hicimos uso de la violencia para impedir el asesinato de Salvador Allende y de nuestra democracia en 1973, incluido el partido comunista; mal podemos plantearla hoy como una alternativa.

El pueblo de Chile quiere una salida ya a la dictadura, no en 5 ni en 10 años más, y para ello sabe que es preciso ser coherente y realista. Coherente con los valores democráticos asumidos desde muchas décadas y realista en la búsqueda de soluciones viables. Y ésta no es una apreciación romántica mirada desde el exilio, que también la he vivido en Chile mismo, sino la apreciación de la mayoría de la oposición chilena, que mete menos ruido porque no pone bombas ni ejecuta atentados personales, pero

Cartas al director

que ha sabido irse ganando un espacio desde el cual la democracia deje de ser una utopía. Lo anterior no obsta en absoluto a que los socialistas chilenos sigamos pensando que es necesario unificar a toda la oposición, sin exclusiones de ninguna naturaleza, en la lucha por derrocar a la dictadura y en el consenso necesario el día de mañana para reconstruir nuestra democracia. Pero obvio es que queremos esta unidad no sólo en el objetivo final, sino también en los métodos a emplear para conseguirlo, como expresamente se lo dijera Ricardo Lagos a su enviado especial.

Termino con una elemental rectificación histórica. Manuel Rodríguez fue un gran patriota chileno que jamás ejerció de "espía contra los colonizadores españoles". Siendo un abogado criollo, profesó de guerrillero en la época de la reconquista (1814-1817) y fue caudillo progresista hasta su asesinato en 1818.— **Erich Schnake Silva**, ex senador socialista de Chile. Madrid.

METAMORFOSI DI UNA DITTATURA

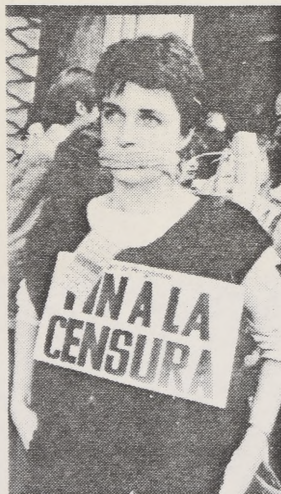
Santiago sembra Madrid all'indomani della morte di Franco

Nel Cile senza futuro si parla di democrazia

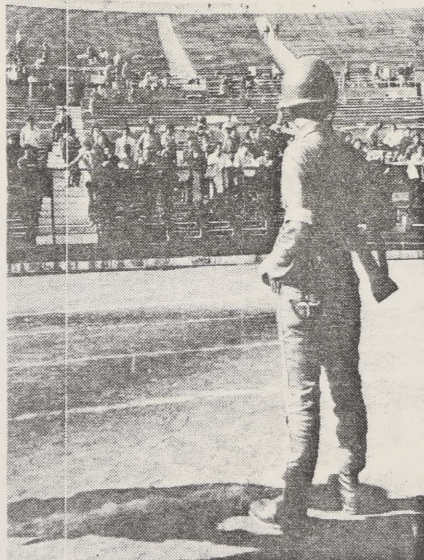
*E' cominciata l'agonia del regime
ma il regista è sempre Pinochet*

dal nostro inviato EDGARDO BARTOLI

SANTIAGO — Nelle strade del centro, fra il palazzo della Moneda e la Piazza d'Armi, con i caffè affollati e le edicole ammantate di copertine multicolori, i giornali di tutto il mondo allineati sul bancone, non si riconosce davvero un paese appena uscito da sette mesi di stato d'assedio, prossimo a compiere i dodici anni di dittatura. Dappertutto giornali, opuscoli, volantini, carta stampata. Il Comitato per i diritti dell'uomo raccoglie e pubblica regolarmente i nomi degli arrestati e dei perseguitati, documentando caso per caso i sistemi usati dalla polizia politica. Altrettanto fa la Vicaria della Solidarietà, con la cui creazione la Chiesa si è eretta a «partito morale» di tutta l'opposizione, dove ogni arbitrio e ogni violenza vengono immediatamente riportati, e le vittime trovano il difensore gratuito che presenta appelli, ricorsi e denunce alla magistratura. Mentre i settimanali pubblicano i racconti di chi è stato sequestrato, torturato, minacciato, e le fotografie e le confessioni di seviziatori pentiti e di ex-terroristi di Stato, e gli indirizzi e le piantine degli edifici dove «carabinieri» e Cni conducono gli interrogatori con le sciariche di corrente...



In alto a destra la copertina di un settimanale cileno: «Quando se ne va?». Qui accanto: prigionieri nello stadio di Santiago. Sopra: una manifestazione contro la censura



La prima impressione è che il «caudillo» abbia i giorni contati. Poi ci si rende conto che le ultime concessioni sono la prova di forza di un governo che non ha altro obiettivo dichiarato che quello di combattere il comunismo. Gli errori di Allende, gli anni del miracolo economico e l'arrivo dei «Chicago boys»

Si discute di tutto

Si discute, apertamente, pubblicamente, di tutto; su quanto tempo la dittatura potrà ancora resistere, su come superarla, o abbatterla, sull'assetto politico ed economico da instaurare dopo la sua fine. Il generale Pinochet è ancora saldo al potere, e Santiago ricorda in qualche modo Madrid all'indomani della morte di Franco. Una quarantina fra partiti, gruppi e formazioni collegati fra loro in modo labirintico, tutti formalmente fuori legge e tutti tollerati (tranne il Movimento Democratico Popolare, dichiarato incostituzionale lo scorso gennaio, formato dai comunisti di Corvalan esule a Mosca, e dai socialisti di Almeyda, esule a Berlino-est) partecipano al gran dibattito che si svolge fra giornali, centri di studio, istituti, convegni e congressi.

La prima impressione è che il regime cileno si sia ormai diluito in un autoritarismo burberamente concessivo, e che esso abbia comunque i giorni contati. Occorre qualche tempo per rendersi conto che questa concessività è una prova di forza piuttosto che di debolezza da parte di un regime che non ha altro obiettivo dichiarato che quello di combattere il comunismo e d'impedire il ripetersi della situazione nella quale esso prese il potere dodici anni fa; un regime duro e repressivo che incarna una reazione di tipo classico, privo di una sua ideologia, privo perfino di una sua retorica, perché non intende affermare nulla, né ha dietro di sé un partito che esprima pure confusamente elementi innovatori quali quelli che entusiasmarono ad esempio, la borghesia fascista italiana; e la cui azione politica, di conseguenza, mira solo al mantenimento di un potere che affonda la propria radice legittimista fino a quel lontano 11 settembre 1973 quando il presidente Allende, armi in pugno, morì in difesa di una democrazia che lui stesso aveva smontato al tracollo.

«Un regime autoritario, ma non totalitario», dice Edgardo

Boeninger, direttore del centro di studi per lo sviluppo (una villetta harvardiana nel quartiere elegante di Providencia, segretarie impeccabili, atmosfera accademica), «che non affronta il costo di impedire le attività intellettuali. Un regime difensivo, senza futuro, senza progetti: ma di carattere istituzionale, con una forte adesione sociale che lo ha legittimato inizialmente...».

Ragioni di pudore democratico, sommate al raccapriccio dinanzi agli stadi trasformati in campi di concentramento, alle esecuzioni, agli almeno cinquemila *desaparecidos*, impedirono allora di riconoscere che la cruenta presa di potere da parte dei militari fu salutata con sollievo dalla stragrande maggioranza del paese, esausto dal dilettantismo marxista-leninista di un regime che cercava nell'utopia la via di scampo dalla propria inettitudine, e aveva nelle «guardie rosse» la pattuglia d'assalto del suo socialismo tropicale. Del resto, è noto che negli ultimi due anni Allende resistette grazie ai militari che aveva chiamato a far parte del suo gabinetto; e che negli ultimi giorni egli cercò l'appoggio della Democrazia cristiana, la quale glielo rifiutò ritenendo che solo un intervento militare avrebbe potuto a quel punto risolvere la situazione.

Non si tratta di illusioni postume. Sono confessioni rese con onorevole rimorso dagli stessi protagonisti: da Patricio Alwyn, il presidente della Dc che recò personalmente il suo «no» ad Allende e che oggi è uno dei pilastri dell'opposizione raccolta nell'Alleanza Democratica; da Rodomiro Tomic, che nel '70 era stato il candidato democristiano alla presidenza sconfitto da Allende; dallo stesso cardinale Silva Henríquez, arcivescovo di Santiago fino al maggio dell'83, il creatore della Vicaria della Solidarietà (1976), adesso guida ed emblema dell'opposizione al regime, il quale però testimonia che la prima lettera di protesta ai generali egli la scrisse soltanto nell'aprile del 1974.

I generali, insomma, diedero il colpo di grazia ad Allende, ma era stato Allende a dare il colpo di grazia alla democrazia cilena: la più vecchia democrazia conti-

nente dopo quella degli Stati Uniti, con una storia ininterrotta di cinquantasette anni; una democrazia di stampo conservatore e aristocratico (la riforma elettorale che ha allargato il suffragio oltre il 55 per cento della popolazione fu introdotta da Frei nel 1965), rigorista, austera, disciplinare, usa a vedere nelle forze armate il baluardo delle istituzioni e a ricorrervi per brevi periodi di riassetto. Così mentre i generali hanno dietro di sé un generico presupposto di legittimità, l'opposizione democratica non ha più un «prima» al quale richiamarsi.

Un plebiscito incontrollato

«...E se anche il consenso sociale al regime è crollato», continua Boeninger, «perché la stessa borghesia degli affari è rimasta delusa dell'inefficienza economica del governo, rimane il problema di creare qualcosa intorno a cui raccogliere i dissensi, una coalizione che superi la tradizionale divisione in tre parti uguali del paese, una destra capitalista, un centro democratico, una sinistra marxista, capace di produrre solo governi minoritari. Oggi è in corso un riallineamento politico. Al tempo di Allende i socialisti, folgorati dall'illusione cubana, si dichiararono leninisti-rivoluzionari scavalcando il «gradualismo» dei comunisti. Ora i comunisti sono stati sospinti verso posizioni estremiste, nel gennaio scorso il «plenum» del Pci si è pronunciato in favore della lotta armata contro il regime. Ma nel frattempo la maggioranza socialista ha rotto l'alleanza storica con loro a favore del centro, mentre anche la destra si sta dividendo e partecipa al nuovo «progetto democratico», cosicché saranno possibili in futuro i centro-destra e i centro-sinistra che daranno fluidità alla vita politica, che si è spezzata per la sua eccessiva rigidità».

«Pinochet non è sincero quando dice che la democrazia tornerà nell'89. La sua costituzione, varata nell'80 con un plebiscito incontrollato (fra l'altro, i registri elettorali erano stati distrutti nel

'73 e mai ricostituiti), la costituzione che lo ha fatto Presidente separandolo dalla giunta militare, stabilisce che a quella data si terrà un altro plebiscito sul nome del successore designato dalla giunta; e che se questo non verrà approvato, Pinochet resterà al potere ancora un anno, mentre un Consiglio da lui nominato deciderà il da farsi. Sarebbe un nuovo colpo di stato, questa volta costituzionale. Ecco perché c'è fretta di concretare un "progetto" per una democrazia stabile, determinandone l'ordine economico, il sostegno sociale, le condizioni politiche. Ai nostri seminari partecipano rappresentanti di tutti i partiti, anche di quello comunista; e partecipano personaggi come Jaime Guzman, che fu l'ideologo della costituzione dell'80, e Sergio Fernandez, che fu ministro degli Interni di Pinochet. Questo dice tutto».

Le stesse cose le ripeté Ricardo Lagos, capo del Partito socialista, aggiungendo all'analisi una nota di trepidità sociale che vibra gentilmente fra le pareti ancora spoglie dello studio da avvocato dove s'è trasferito dopo che quello precedente gli fu distrutto dai soliti poliziotti in borghese, durante una delle giornate di protesta dell'83-'84: «Il Cile ha bisogno di democrazia prima che di socialismo. Noi dobbiamo ricostruire tutta la società, non solo un sistema di governo: ci manca perfino un accordo sulla costituzionalità e sulla giurisdizione, e dobbiamo partire di lì per costruire un "progetto nazionale" per il transito alla democrazia. La crisi cilena non si limita alla presenza di Pinochet. C'è un disastro economico nel quale qualsiasi governo democratico di domani sprofonderebbe. La nostra capacità industriale è ridotta al 30 per cento di quella che era nel 1970. Abbiamo salari reali in caduta continua, che nell'82 erano già inferiori a quelli del '70. Abbiamo il 30 per cento di disoccupati. Nelle Poblaciones intorno a Santiago, i quartieri delle baracche e della miseria, il 65 per cento dei giovani è disoccupato, e l'altro 35 per cento lavora mediamente due mesi l'anno. Questi giovani protestano contro tutti, non soltanto contro Pinochet».

Non, non solo per Pinochet sof-

fre il Cile. Ma tutti i mali del paese si riassumono in lui, che se ne è nutrito, e li ha utilizzati per rafforzare la propria posizione. L'anonimo generale chiamato da Allende allo stato maggiore dell'esercito nell'agosto del '73, rimasto estraneo all'organizzazione del colpo di stato, trascinato quasi a forza dai suoi colleghi nella giunta golpista, è riuscito a rompere le regole del gioco che i generali si erano date, avvinghiandosi al potere che la regola dei turni a rotazione gli assegnava, imponendo alla giunta stessa (grazie alla preponderanza dell'esercito che rappresenta il 75 per cento delle forze armate) un regime duramente personalistico, un vero e proprio «caudillaje», trasformando la reggenza militare in un «ducismo». E quando il generale dell'aviazione Leigh, che era stato l'ispiratore e l'architetto del golpe, o l'ammiraglio Merino, cominciavano a protestare contro il suo monopolio del potere e a reclamare un'apertura verso le forze politiche civili, ecco un improvviso benessere colpire il Cile e addormentare le proteste. Gli anni dal '76 all'80 (durante i quali Pinochet si sbarazzò di tutti i concorrenti a cominciare da Leigh e organizzò la propria incoronazione come Presidente) furono quelli di un miracolo economico dagli effetti letali.

Dollari e pesos

I giovani allievi della scuola monetarista americana, i cosiddetti «Chicago boys», presa in appalto l'economia del paese, deciso di creare un volano di domanda interna, e spalancate le frontiere al mercato esterno, stabilito un canale preferenziale con gli Stati Uniti, favorirono i consumi dando al paese l'illusione di essere stato assunto nei paradisi di vita occidentale, avanzando a occhi bendati sulla via di un liberismo dogmatico che non si curava della progressiva non-competitività e rapida estinzione dell'industria locale. Col cambio del dollaro congelato a 39 pesos era sempre più conveniente comprare all'estero che produrre sul posto. Una bottiglia di whi-

sky costava meno di una di *pisco* locale, e, simmetricamente, un pasto in una bettola costava, in dollari, quanto un pranzo nel primo locale parigino. «Regine» apriva il suo locale anche a Santiago, come già a Parigi, a Montecarlo, a New York. Il denaro correva dolcemente, e le banche prestavano a piene mani, il paese s'indebitava. In dollari.

Finché, col dollaro che nel frattempo aveva raddoppiato il suo valore, l'istituto centrale si arrese. Sganciato dal cambio fisso, alla fine dell'82, il dollaro volò in una settimana a ottanta pesos. Il paese, già indebitato fino al collo per la sua follia consumista, si trovò così indebitato per il doppio. E il governo; non potendo far altro, intervenne assumendosi i debiti dei privati, vale a dire diventando responsabile verso l'estero dei debiti delle banche private e dei privati imprenditori. Il regime autoritario e ultra-liberista di Pinochet si trasformò di fatto, in questo modo, in un regime collettivista detentore del 40 per cento delle banche principali e di oltre il 60 per cento dell'apparato produttivo. Gli applausi della borghesia benestante cessarono di colpo, ma Pinochet si era intanto impadronito dei cordoni della borsa, utili altresì per legare le mani e la lingua ai dissenzienti.

«E per legare a sé gli imprenditori tentennanti», aggiunge Ricardo Lagos, «Pinochet ha poi varato il suo "Plan laboral", la nuova legge del lavoro che ammette un massimo di due mesi di sciopero durante la contrattazione aziendale (in Cile non esistono contratti nazionali di categoria), al termine dei quali, se non si sarà trovato un accordo, varrà la proposta originaria del datore di lavoro, il quale ha del resto piena libertà di licenziamento anche durante la fase di contrattazione. E' vero che in questo modo alcune imprese sono riuscite a sopravvivere zoppicando. Ma se domani, per ipotesi, la metà dei disoccupati trovasse lavoro e ognuno decidesse di comprarsi un paio di scarpe nuove, il paese non sarebbe in grado di produrle. Il Cile ha bisogno di democrazia prima che di socialismo, ha bisogno di scarpe quanto ha bisogno di democrazia».

(1 - continua)

METAMORFOSI DI UNA DITTATURA / *L'appoggio dei comunisti al terrorismo rende impossibile una via d'uscita democratica*

La breve illusione della libertà

Cile, due anni di proteste ma l'opposizione resta divisa

dal nostro inviato
EDGARDO BARTOLI

SANTIAGO — Esploso il palloncino colorato del miracolo economico, la carestia ha colpito il Cile con una violenza tale da far traballare il regime. Alla carestia segue infatti la protesta. E' l'inizio del 1983: l'anno della chiusura delle fabbriche, dei licenziamenti, del ritrovato coraggio. La prima manifestazione di piazza, l'11 maggio, non è affatto mossa da una ribellione ideologica o politica al regime; alla sua testa ci sono i capi sindacali, Rodolfo Seguel, Manuel Bustos, che mobilitano i loro seguaci in nome del pane, non della fede. E il regime, impreparato all'evento dopo gli anni del soddisfatto sopore, dovendo affrontare contemporaneamente la sua prima crisi economica e la sua prima crisi sociale, improvvisamente privato del suo unico capitale politico, che era l'ordine, si difende alla cieca, un po' sparando, un po' cercando accordi. Sulla scia della protesta sindacale, dapprima confusa poi sempre più riconoscibile, si è affacciata infatti la protesta politica. Dopo un anno e mezzo di manifestazioni e di morti, una distinzione fra le due forme di protesta sarà del tutto impossibile. O meglio, la seconda eclisserà la prima.



Madre e figlio: la polizia cilena li arresta entrambi. A destra, un gruppo di carabinieri per le strade della periferia di Santiago sembra far la guardia al «viva Pinochet»

Dice l'ex presidente della Dc Aylwin: "Il Pc con la sua consegna di violenza favorisce il mantenimento del regime di Pinochet, il quale a sua volta con la sua strategia di guerra favorisce il partito di Corvalan"



Il ritorno degli esiliati

Ogni mese, da maggio in poi, c'è una giornata di protesta che si conclude nel sangue. Di fronte alle cinquecentomila persone riunite nel parco O'Higgins, nel mese di luglio, Pinochet chiama a reggere le sorti del governo Onofrio Jarpa (ambasciatore in Argentina, con un passato di estrema destra, leader del Partito Nazionale nel momento in cui questo alimentava la lotta armata contro Allende) e lo incarica di un'"apertura" verso gli esponenti dell'opposizione. Nella protesta del mese successivo, agosto, la polizia ammazza una sessantina di persone, ma il nuovo corso non si arresta. Dall'"apertura" sono naturalmente esclusi i comunisti, che formano il più grande partito comunista del mondo non sovietico dopo quello italiano. D'ispirazione moscovita, con un passato di moderazione rispetto al socialismo estremista, gradualista, sotto molti aspetti «togliattiano», il Pc cileno, respinto d'ufficio da ogni pur vaga ipotesi democratica, darà ben presto il proprio patrocinio ufficiale alla

lotta armata contro Pinochet vale a dire al terrorismo puro e semplice, che altro in Cile non esiste. E mentre Pinochet troverà nel terrorismo il suo migliore alleato, nel tipo di rapporti da instaurare col Pc l'opposizione democratica troverà l'ostacolo più arduo da superare.

Con l'"apertura" si ebbe una grande stagione di libertà. Rientrarono circa mille dei cinquemila esiliati dal regime, prima delle concessioni di Jarpa ai suoi nuovi interlocutori. Si ristabilì di fatto la libertà di stampa: al pari di oggi, i settimanali potevano pubblicare ampie inchieste su «come e dove si tortura in Cile», con gli indirizzi dei centri della polizia politica (Cni). Si aprivano le *peñas*, i cabarets della satira politica, degli imitatori di Pinochet, della poesia, del «canto nuovo». In una straordinaria euforia si fingevano reali cose ancora inesistenti. I partiti agivano alla luce del sole. Nel novembre 1983, per l'anniversario della morte di Frei, nel teatro Caupolicán di Santiago si tenne una riunione della Democrazia cristiana nella quale Mariano Rumor tenne un discorso infocato contro il regime. Il 4 febbraio 1984, nello stesso teatro, si tenne il congresso costitutivo del Movimento Democratico Popolare, cioè del Pc e associati, che nel suo documento affermava la necessità di opporsi con la violenza alla violenza del regime. Tutto a porte aperte e a voce alta.

In che cosa sbagliò l'opposizio-

ne democratica? Forse, nello scambiare quell'effervescenza momentanea per una realtà acquisita. Nel presentarsi al negoziato aperto dal governo con due pregiudiziali invalicabili: dimissioni immediate di Pinochet e riconoscimento dell'illegittimità della costituzione con la quale lo stesso Pinochet aveva cercato di dare veste giuridica al proprio regime. Il risultato fu che il generale-Presidente colse l'occasione della giornata di protesta del marzo '84 per riprendere saldamente le redini in mano, e in una decina di giorni riportò le cose al loro ordine reale: scionfando l'"apertura" di Jarpa, decretò lo stato d'emergenza, impose una censura selettiva sui giornali mediante una nuova legge sulla

stampa, varò una nuova legge anche sul terrorismo portando il fermo di polizia a cinque giorni, fece piazza pulita dei brillanti economisti monetaristi che avevano portato il paese alla rovina nominando un nuovo ministro dell'Economia, istituì barriere doganali... Insomma, diede l'impressione di un cambiamento; e riuscì a riaggianciare parte della destra economica che, andando d'abitudine dove va il vento, fino a pochi mesi prima sembrava andare compatta verso l'opposizione.

Dal marzo al novembre 1984 fu un progressivo indurimento del regime, mentre la protesta languiva, manifestandosi in im-

potenti cori di clacson e caseruole battute, in una Santiago deserta, militarmente occupata. E il 6 novembre 1984 fu dichiarato lo stato d'assedio, durato fino al 6 giugno scorso. Rastrellamenti, deportazioni, azioni dimostrative nelle *poblaciones*: l'obiettivo della nuova manovra repressiva, condotta selettivamente, era il Partito comunista con i suoi satelliti. Durante lo stesso periodo la Democrazia cristiana poté eleggere i 211 delegati provinciali al congresso nazionale di Punta de Tralca, che per due giorni e una notte, presenti ospiti e osservatori, condusse i propri lavori, conclusi con l'elezione di Gabriel Valdés alla presidenza del partito che in quella clandestinità fittizia aveva finalmente ritrovato la propria unità.

«La frutta è immatura»

Dunque, si può dire che il regime cerca di legittimare la propria repressione della sinistra comunista con la tolleranza verso l'attività politica degli altri partiti, comprendendo che sarebbe innanzi tutto un errore psicologico vietarla.

Significherebbe eguagliare tutti gli oppositori sullo stesso piano e quindi facilitare l'accordo fra loro sul «progetto naziona-

le» unitario che deve essere premezza al cambio politico. In questo modo, oltretutto, la repressione selettiva centrata sui comunisti acquista il pretesto giustificatorio della «lotta al terrorismo» che è il grande nemico delle speranze democratiche più di quanto lo sia del potere dittatoriale e con notevole sottigliezza Pinochet adotta la discriminazione analoga verso gli stessi comunisti. Quando tre dei loro, intellettuali e borghesi, vengono rapiti e sgozzati nel marzo scorso il dittatore non tarda ad arrestare 14 carabinieri e a sciogliere la loro branca speciale mostrandosi inflessibile verso il «proprio» terrorismo di stato. Resta così aperto il grande interrogativo: come presentarsi al tavolo delle trattative coi militari avendo moralmente a fianco i comunisti fautori dell'insurrezione armata? E come presentare al paese un «progetto» sottoscritto dai comunisti, se proprio per scongiurare il progetto comunista i militari presero a suo tempo il potere col consenso del paese?

Patricio Aylwin, l'ex-presidente della Democrazia cristiana che negò l'appoggio del suo partito ad Allende, lo ha scritto di recente in un articolo dal titolo «Chi serve a chi?»: il partito comunista, con la sua consegna di violenza, sta favorendo a breve e a medio termine il mantenimento del regime di Pinochet, il quale, con la sua strategia di guerra, sta favorendo a

lungo termine il partito comunista. Ancora più esplicito è Maximo Pacheco (ambasciatore di Frei in Unione Sovietica, ministro dell'Educazione, preside della facoltà di diritto con Allende, ora vice-presidente della Commissione per i diritti dell'Uomo): «Al partito comunista, diretto da Mosca, non interessa affatto la caduta di Pinochet. I comunisti vogliono scuotere l'albero quando la frutta è matura, e la frutta non è ancora matura».

Progetti senza realtà

Lo stesso concetto lo ripete, dall'estrema destra, Andres Allamand, presidente dell'Unione Nazionale, il quale si dichiara «anticomunista dell'ultima ora» proprio perché il Pc di oggi sta aiutando Pinochet: «Si tratta di un problema politico non morale né legale», egli dice. «E' chiaro che il Pc lo si può arginare con una dittatura, però lo si può sconfiggere solo con una democrazia. E come arrivare alla democrazia? Quando Pinochet fece l'"apertura" Alleanza Democratica pose al governo delle condizioni assurde, cominciando col pretendere le dimissioni del governo stesso. Valdés e gli altri confusevano la protesta in appoggio alla negoziazione con la negoziazione

stessa. Così la negoziazione fallì e rimase solo la protesta, cioè la lotta sul terreno dove i militari sono più forti. Così l'"apertura" è fallita. Per forza: nell'83 Pinochet era disposto a modificare la sua costituzione, a riconoscere i partiti, ad anticipare le elezioni di un Parlamento. Il rifiuto dell'opposizione di accettare il riconoscimento dei partiti sulla base di quella costituzione ha indotto Pinochet a ritirare tutte le offerte. E' nel suo interesse mantenere il massimo vuoto politico possibile fino all'89, e l'opposizione si è rifiutata di riempirlo. Adesso torna a serrare i suoi ranghi per intavolare una trattativa coi militari, che sarebbero ben felici di liberarsi di Pinochet. Ma vogliono trattare insieme coi comunisti. Impossibile. Per parlare con loro bisogna impegnarsi a non riconoscere il Pc, salvo poi non mantenere la parola. Che altro ha fatto Sanguinetti in Uruguay?»

La risposta democratica al quesito la dà infine il socialista Ricardo Lagos: «Si può ragionare coi militari avendo i comunisti a fianco? Non lo so. So però che se non si fanno partecipare i comunisti a un accordo nazionale il Cile di domani può diventare ingovernabile. Non è che i comunisti debbano necessariamente far parte del prossimo governo, anzi. Ma i comunisti debbono prendere parte alla fissazione dei principi in base ai quali saranno magari esclusi dal governo».

Parole, ipotesi, concetti. Propositi nobili e visioni fervide si moltiplicano intorno alla forza dove il Potere, asserragliato, resiste. L'"accordo nazionale" è ancora lontano, la protesta dell'83-'84 è annegata in un mare di vane speranze, progetti senza realtà continuano a infrangersi contro una realtà priva di progetti, chiusa in se stessa, sicura della propria esistenza.

Ma Gabriel Valdés è tranquillo. Temibile nella sua inerzia più che nella sua solidità, la realtà del regime cileno si sgretolerà quando si troverà dinanzi una nuova realtà più vitale e più grande. All'accordo, al progetto nazionale, alla mobilitazione civile si arriverà prima o poi, usando gli strumenti che il regime è incapace di usare: la mediazione, la conciliazione, l'accordo sui metodi e sui fini. Quello che occorre è l'appoggio internazionale, la pressione esterna che aiuti a superare le difficoltà interne. Delle denunce e delle manifestazioni di sdegno il Cile non sa più che farsene.

Di attesa in attesa, di delusione in delusione l'opposizione continua a crescere, pacificamente, e a convogliare forze che in essa si rigenerano e si amalgamano, formando una corrente che nessuna singola ideologia può fermare o deviare. La stessa Democrazia cristiana, che in passato si ritenne depositaria di un «progetto unico» e onnivale per il paese, oggi si pone come garante di libertà in un progetto collettivo al quale essa offre il proprio contributo. Non ci si possono nascondere le difficoltà da affrontare: fra le altre, appunto, quella di stabilire rapporti «operativi» efficienti ai fini del ritorno alla democrazia con il partito comunista e la sinistra marxista in genere. E quella di individuare gli ambienti militari disponibili a negoziare il cambio di regime, e di trovare con essi il punto d'equilibrio fra la chiusura a sinistra e l'apertura alla democrazia piena. Egli nutre una fiducia di base nello spirito cileno tradizionale, insoffrente della violenza, alieno a qualsiasi forma di corruzione, austero, concreto, inventivo, umano, e ricorda che dopotutto significa qualcosa quello che diceva il filosofo Miguel de Unamuno: che il popolo basco aveva lasciato due grandi impronte di sé nel mondo, avendo creato i Gesuiti e il Cile.

È ancora lunga l'ombra di Pinochet

di EDGARDO BARTOLI

NEI prossimi giorni il generale Augusto Pinochet celebrerà la data per lui più importante: il dodicesimo anniversario del giorno in cui l'allora presidente della Repubblica cilena, Salvador Allende, in un ennesimo rimaneggiamento delle alte gerarchie civili e militari, incalzato dai drammatici avvenimenti di quei giorni, lo nominò capo di stato maggiore dell'esercito affidandogli così, di fatto, il comando supremo delle forze armate. La nomina fu dettata ad Allende dalla «provata lealtà del soldato a difesa e garanzia delle prerogative della costituzione democratica del paese». Chi conosce bene Pinochet sa che egli ha nel cuore questa data assai più di quella fatidica dell'11 settembre 1973, quando i generali congiurati nel *pronunciamiento* rovesciarono sanguinosamente il governo di «unità popolare».

Quel golpe non fu suo. Alla congiura egli aveva aderito, o meglio era stato costretto ad aderire, solo all'ultimo momento; ma grazie alla posizione cui Allende lo aveva legalmente innalzato alla vigilia poté rapidamente imporsi al di sopra degli altri membri della neo-costituita giunta militare. Per ciò, nella concezione messianica che egli ha del proprio potere personale, Pinochet predilige, su ogni altra, la ricorrenza di quel giorno di mezzo agosto nel quale il destino lo portò dalle lontane province del Sud australe al proscenio del suo paese.

Le violenze di questi giorni in risposta a una protesta che si ricollega a quelle dell'83 e '84, dopo la parentesi dello stato d'assedio, sono la riconferma della sua presenza sovrana al di sopra della vita nazionale, sulla quale egli intende regnare e vigilare prima ancora di governare. Pinochet resta a guardia della porta stretta che divide il potere costituito dalla società civile, controllandone con eguale dispotismo entrambi gli accessi, a salvaguardia di un regime, assediato dal dissenso, che sempre più si identifica con la sua persona.

Il suo regime infatti si regge oggi su una percentuale di consensi minima rispetto a quella che 12 anni fa sostenne la presa del potere da parte dei militari. Allora si formò nel paese un movimento maggioritario che, reclamando a gran voce un cambio di governo, non esitò a sollecitare i militari perché ripristinasero sia l'ordine costituzionale, minacciato dagli esperimenti ideologici di Allende, sia l'ordine pubblico, minacciato dai suoi seguaci. Avrebbe dovuto trattarsi di un intervento temporaneo, come già se n'erano avuti durante gli oltre centocinquanta anni di democrazia che avevano fatto del Cile l'esempio per tutto il Sud America.

OGGI, un movimento ugualmente maggioritario chiede, altrettanto a gran voce, la fine del regime militare: ma Pinochet non ascolta. Lo ha abbandonato anche la borghesia dell'industria e degli alti redditi, che gli aveva dato la propria adesione al negativo, in nome dell'anticomunismo, della paura del disordine, della paura delle espropriazioni e che ora è delusa dal carattere negativo del regime, puramente difensivo, fallimentare sul piano economico, privo di un qualsiasi progetto politico. Ma Pinochet non ascolta e resta saldamente al potere. Come dice il capo socialista Ricardo Lagos, «la maggioranza è contro di lui, ma non ha ancora trovato qualcos'altro di cui essere a favore».

I motivi per i quali manca quel «qualcos'altro» capace di ricondurre il Cile alla democrazia sono sia di carattere interno sia di carattere internazionale. Innanzi tutto, la durezza della repressione esercitata dal regime: spietata e generalizzata nei primi anni, essa è divenuta via via più selettiva focalizzandosi sull'obiettivo principale proclamato da Pinochet: la lotta al comunismo, bandiera ideale e legittimista del regime. La clandestinità e la lotta armata sono la risposta della sinistra estremista alla violenza di Stato. Ne è risultata nel paese una spirale autoalimentantesi con uno scenario nicaraguense come tela di fondo.

Le divisioni nell'opposizione

rappresentano il secondo motivo d'insuccesso dei tentativi finora compiuti di rovesciare il regime, o almeno di spingerlo a ripristinare le più elementari prerogative democratiche. Circa quaranta formazioni politiche formano la platea sulla quale le istanze della destra, del centro, della sinistra, frammentano e vanificano la forza di una protesta animata dal comune accordo contro la dittatura ma divisa sui mezzi e sui modi per esprimerlo. I rapporti fra l'opposizione moderata e il partito comunista cileno, l'accettabilità o meno della Costituzione del 1980, le relazioni con le forze armate, rappresentano i principali temi politici sui quali, fra diatribe o addirittura zuffe, si sono arenati tutti i tentativi di costituire un «frente ampio» unico, maggioritario, e quindi credibile agli occhi del paese.

La forza intrinseca del regime, troppo spesso sottovalutata dagli osservatori esterni, rappresenta il terzo fattore interno che costringe il Cile alla condizione attuale. Certo, l'immagine del dittatore si è appannata. Certo, egli non potrebbe riproporre oggi il referendum col quale nel 1980 fece approvare al paese la «sua» Costituzione, che gli garantisce il potere pieno e assoluto almeno fino al 1989 e gli consentirà poi una specie di colpo di Stato «istituzionale» se le elezioni previste per quella data non daranno il risultato da lui voluto. Ma nonostante ciò, il suo apparato di

potere è sostanzialmente intatto: l'esercito, vale a dire il 75 per cento delle forze armate, resta compattamente schierato dietro di lui, la cosiddetta destra economica è delusa ma i suoi tentennamenti non hanno portato a un'effettiva evoluzione di schieramento, e il mondo genericamente conservatore, per quanto aspramente critico, è rassegnato a quello che considera ancora il male minore rispetto al «cancro comunista».

E INFINE, la corda più robusta con la quale Pinochet tiene legati a sé vasti strati della popolazione produttiva, nonostante i loro malumori politici o le diverse scelte ideologiche, è rappresentata dalla condizione d'indebitamento di questi verso il governo-garante, arbitro della sopravvivenza economica di banche, industrie e imprese grandi e piccole. Come dire: chi non ubbidisce, fallisce.

Dunque, Pinochet può oscillare, traballare, inclinarsi sotto le raffiche della protesta interna, ma la forza di gravità del piedistallo su cui poggia continua a tenerlo in piedi. Né si può sperare che sia un colpo di vento internazionale a stenderlo definitivamente. E' vero che lo scorso giugno Pinochet si è dovuto piegare al ricatto del Dipartimento di Stato americano: o farla finita con lo stato d'assedio, o niente prestito del Fondo monetario internazionale. Ma il Cile dei militari non è solo al mondo. Negli ultimi

A-VII-2

anni gli interessi economici hanno fatto decisamente premio sullo sdegno morale: il Giappone è ben disposto, l'industria statunitense non va per il sottile, la Cina si dichiara pronta a comprare tutto il rame che gli Stati Uniti eventualmente rifiutassero; e, in Europa, la Francia un giorno protesta e un giorno contratta, l'Inghilterra vende aeroplani e navi, la Germania sommergibili, la Spagna socialista cerca appalti; e così via.

Quali sono allora le reali prospettive di sbocco per il Cile? Se ne scorgono tre. *Prima*: Pinochet riesce a impedire il coagulo delle forze d'opposizione fino alla scadenza del 1989, presentandosi allora come unica soluzione possibile e ottenendo così la legalizzazione del suo regime. La prevedibile conseguenza sarebbe l'intensificazione della lotta armata e il progressivo scivolamento del Cile verso le condizioni del Perù o della Bolivia, grandi speranze di Mosca.

Seconda: una parte dell'opposizione moderata, schematizzando un centro-destra, propone un superamento indolore del regime attraverso un'intesa con le forze armate. Questa soluzione, appoggiata dagli Stati Uniti, incontrerebbe un serio ostacolo: Pinochet in persona, niente affatto intenzionato a passar la mano a chicchessia. E rischierebbe le conseguenze insite nella sua stessa parzialità: l'estrema sinistra, esclusa, si mobiliterebbe in una pericolosa

stagione d'instabilità sociale, alimentata dalla carestia economica, creando così le premesse per un ritorno al potere dei militari.

Terza: la formazione di un vasto schieramento d'opposizione, dalla destra non reazionaria alla sinistra non rivoluzionaria (comprendente un partito comunista tornato sui propri passi), capace d'imporre, attraverso un programma pacifico di pressioni civili, un negoziato con le forze armate per stabilire un periodo transitorio verso il ristabilimento della piena democrazia. Per questa soluzione i tempi sono stretti: quest'anno in corso, o al massimo il prossimo, dovrebbero già vedere una tale coalizione imboccare la strada dell'accordo concreto per essere pronta e credibile nel 1989. Ma Pinochet vigila: e i segnali che giungono da Santiago sono ancora deboli.

L'OPPOSIZIONE democratica moltiplica pertanto le richieste di appoggio e di aiuto internazionale a questa via. E come rispondono i paesi occidentali? Lo si è detto: protestano contro Pinochet, e al tempo stesso parlano d'affari col suo regime. Ma, a differenza ad esempio del Giappone, hanno assorbito la propria presenza in Cile con una concreta azione di sostegno delle opposizioni. In altre parole, curano le loro relazioni sia con chi governa oggi sia con chi, sperabilmente, governerà domani.

Tutti, tranne l'Italia, assente dal Cile (insieme col Belgio) dal 12 settembre 1973. La sua linea di condanna del regime è stata univoca, coerente, e pagata a caro prezzo, sia in termini economici (siamo passati dal quinto all'undicesimo posto nei rapporti commerciali col Cile, ma continuiamo a importare la stessa quantità di rame che importavamo dodici anni fa), sia in termini sociali, considerata la numerosa collettività italiana presente nel paese. Ma il corrispettivo politico di questa linea è stato nullo.

Il Cile schierato «contro», infatti, legato all'appoggio internazionale per la sua stessa sopravvivenza, ha atteso invano in questi dodici anni che le nostre condanne verbali si traducessero in un aiuto concreto, all'altezza del nostro conclamato impegno democratico. Magari solo sul piano culturale, creando qualcosa di somigliante ai vari «Goethe Institut» centri francesi, veri e propri fari di libertà nella notte politica cilena. Ma perché non anche su quello economico, ricattando anche noi il regime presso il Fondo monetario o la Banca mondiale, ovvero stabilendo rapporti diretti attraverso canali non governativi. Invece no. Per l'Italia il Cile non esiste fino a quando esiste Pinochet. Non s'è capito che ignorando tutto il paese si è aiutato soltanto il generale-presidente a perpetuare il suo potere.

EDGARDO BARTOLI

A-VII-2

Law and Courage Stir in Chile

NYT
Aug. 19.85

Chile's military rulers adopted yet another form of repression in March: death squads. In Santiago, three Communists were kidnapped and murdered by armed men in civilian clothes. Five trade unionists captured in the same raid were beaten and tortured by electric shock. Offices of a leftist human rights group were also raided and staff members were beaten and raped. For all its tyranny, President Augusto Pinochet's dictatorship was not previously known to cloak its crimes in civilian dress.

How do we know the thugs were connected to the Government? Because, in an unexpected sequel, that cloak was stripped away by a courageous judge, José Canovas Robles. Assigned to investigate the three murders, he did so with determination. He indicted 14 police officers, including two colonels. All were expelled from the hitherto-immune force known as the Carabineros. Two generals offered to resign, forcing the departure of the head of the Carabineros, a Pinochet crony.

Despite the purge, the assaults continue.

Armed men in civilian clothes recently seized and beat Carmen Hales, the 27-year-old daughter of a prominent Christian Democrat. Yet the rule of law somehow survives in Chile, even after 12 years of tyranny. This month, a military prosecutor in Concepción was emboldened to indict three police officers on charges of murdering a student. Meanwhile, a divided democratic opposition is groping for a common strategy.

These are stirrings that cry out for Washington's encouragement and support. The Reagan Administration has been all over the lot in its attitude to Chile. Displeased with a seven-month state of siege that ended in June, it abstained when Chile applied for a development bank loan. But the value of the gesture was nullified when a State Department official visited Santiago in February only to affirm the Administration's confidence in the regime.

What's needed from Washington is something like the clarity of that brave judge in Santiago.

7 Chilean Policemen Ordered Held in 3 Slayings

SANTIAGO, Chile, Aug. 31 (Reuters) — Seven paramilitary policemen, including two colonels, have been arrested in connection with the slayings of three Communist Party opponents of the Government, the police said today.

Judge José Canovas Robles ordered the arrests in a ruling published Friday. Judge Robles sparred a political showdown when he ruled earlier this month that he had evidence that 14 policemen were involved in the murders, which occurred in March.

The judge initially ordered the arrests of 2 of the 14 but banned the others from leaving the country.

Two of the policemen, Col. Luis Pon-

taino and Capt. Hector Díaz, face separate charges in the death under torture of a young Socialist Party member arrested in February.

The charges of police involvement in the murders of the three Communists, José Manuel Parrada, Manuel Guerrero and Santiago Nattino, who were found March 30 with their throats slit one day after they were abducted, touched off widespread anti-Government protests. President Augusto Pinochet denounced the killings as a "brutal crime."

Politicians said the charges also prompted wide support for an agreement signed by many of the country's

political parties last weekend calling for a return to democracy.

The pact, which followed negotiations mediated by the Roman Catholic Church, was the first such agreement in 12 years of military rule in Chile.

Chile's Communist Party, banned since President Pinochet took power in a bloody coup in 1973, refused to enter into the agreement and Friday night called for violent protests to end Mr. Pinochet's rule.

Local and foreign journalists were driven to a clandestine news conference at which three hooded members of the party leadership said that gathering signatures on petitions would not be

effective.

"We can get 20 million signatures and the dictatorship will remain," one of them said, referring to the agreement.

He said violent anti-Government protests similar to those in which more than 100 people died in 1983 and 1984 were inevitable.

In a statement issued at the news conference, the party asserted that violence was justified as a legitimate popular response to official repression.

The Communist leaders criticized the non-Communist opposition for condemning their calls for violence in the agreement signed last weekend. But they pledged not to interfere and called for discussions with other parties to find points of agreement.

Archbishop Juan Francisco Fresno

of Santiago, the key figure behind the 11-party pact, asked Chileans today to stay away from a day of protest called for on Tuesday by the National Workers' Command. The protest has the backing of leftist parties and the centrist Democratic Alliance coalition.

Archbishop Fresno said in a statement that he was calling off a mass planned for Tuesday in homage to André Jarlan, a French priest killed Sept. 4 during anti-Government protests in a Santiago shantytown.

Protests "lead to violence and destruction which affect mostly the poorest people, or, paradoxically, those whose defense is taken up," Archbishop Fresno said.

The Democratic Alliance, in an effort to prevent fresh violence, has called for

the day of protest to be used, instead, for gathering signatures in support of the political parties' agreement.

Train Averts Derailment

ELWOOD, Ill., Aug. 31 (AP) — The engineer of an Amtrak train carrying nearly 300 passengers from Chicago to St. Louis narrowly averted derailment after three youths broke into a control box and switched tracks for the train, the police said. The engineer slowed Friday night as he neared Elwood because control lights showed a problem might be coming up, said Police Chief Walter King.

Business Day
helps you stay ahead

Cardinal Gets Factions to Agree on Steps Toward Civilian Rule

Chilean Church in the Forefront of Politics

By LYDIA CHAVEZ

SANTIAGO, Chile — When President Augusto Pinochet lifted the state of siege two months ago, the opposition magazines immediately resumed publication. Their covers, however, did not feature outlawed political leaders, but people who figure prominently in General Pinochet's most consistent opposition force, the Roman Catholic Church.

Last week, the church showed how influential it is in politics by promoting the first multiparty agreement on the steps needed to end military rule. The accord, largely the work of Juan Francisco Cardinal Fresno, Archbishop of Santiago, was signed by 11 right-wing, centrist and leftist parties. It set no schedule, but called for legislation for direct presidential and congressional elections. To gain the support of the armed forces, it ruled out putting military officers on trial for political crimes.

General Pinochet's Government has yet to respond to the new accord. Cardinal Fresno invited the political parties to meet several months ago when it seemed they were almost as unhappy with one another as they were with the Government. Under the slow, steady tutelage of the church leader, the parties eventually began drafting and debating the joint statement. Up until now, complained Sergio Bittar, a leader of the Socialist Party, they only had been able to agree "to disagree." Genero Arriagada, a leader of the Christian Democratic Party, said the accord was negotiated by the parties, but the

church "gave us the meeting table." This, he said, was "essential."

The only major group excluded was the Communist Party. The exclusion was an example of how careful church leaders have been to avoid issues that would doom a project to failure, political leaders said. Until last week, the parties had been unable to agree partly because of their different attitudes toward the Communists. Although the opposition unanimously rejects Communist support of violence, some are unwilling to rule out future agreements with a party that represents about 16 percent of the vote.

The church's ability to finesse such divisive issues has resulted in public acclaim for its leaders far in excess of anything the political opposition enjoys. "You know, the only one who could beat Pinochet in an election now would be a bishop," said a lawyer, who added he would have nothing to do with any of the opposition's leaders. Representatives from the United States Congress or State Department who visit Chile leave with the same impression of the church's stature.

Neighborhood Strength

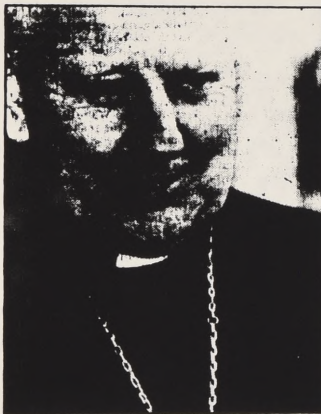
The popularity of the church is as strong in the affluent Santiago neighborhoods as in the poor ones. In the poor sections, the church is the only active community group. It supports a soup kitchen, and youth and adult groups. The parish priests denounce violence and are unafraid to face up to hostile police forces. Last year,

when policemen pointed their automatic rifles at a group of young people in La Victoria, a working-class neighborhood, the Rev. Pierre Du Bos put himself between the police and his parishioners.

"It is the only institution that is organized in these neighborhoods," said the Rev. Patricio Rojas, a priest in Puente Alto, who added that this degree of organization makes it officially suspect.

The church's human rights office, the Vicariate of Solidarity, acts as a virtual legal swat team to keep on top of the numerous political arrests and occasional political murders. In the case of three Communists who were murdered in March, the church assigned lawyers to help Judge José Canovas Robles, the special prosecutor. When there is a day of protest or problems arise in the communities, it is the vicariate that usually receives the news first and a lawyer is dispatched to begin legal proceedings for the victims' release. Carlos Fresno, one of the lawyers, said that although they were unspacious most of the time, they continued to act as a balancing force to the Government's harsh methods.

Such exposure has also made the church a direct target. In the last five months, more than 20 young people associated with the church's neighborhood social action groups have been kidnapped and tortured, according to church sources. Churchmen have asked the Government to appoint a special investigator to look into the incidents, which some priests believe have been provoked by the Government's unhappiness with Cardinal Fresno's "national reconciliation" initiative.



Juan Francisco Cardinal Fresno

Magnus/Albino

Thousands Join in Protests in Chile's Capital

By LYDIA CHAVEZ

Special to The New York Times

SANTIAGO, Chile, Sept. 4 — Thousands of Chileans joined the biggest day of anti-Government protests here in nearly a year today.

One death was reported, a 16-year-old youth who was slain at a community center guarded by Government troops. The circumstances of his death are unclear.

At least 15 people, including an 11-year-old boy, were injured slightly in skirmishes with the police or when demonstrators tried to stop buses.

The police used tear gas and water cannons to disperse scattered demon-

strators in the downtown area, and most shops did not reopen in the afternoon. By the end of the day more than 200 people had been arrested.

Demonstrations and the early closing of shops were reported in several other major cities.

Peaceful Protest Urged

The protests against the Government of Gen. Augusto Pinochet came as opposition members collected signatures of support for a plan to restore democracy. The plan was drawn up last week by 11 opposition parties, including the center-left Democratic Alliance coalition and rightist groups.

The Democratic Alliance, a coalition

of six moderate parties, called on Chileans to protest peacefully today by signing the agreement and returning to their homes in the afternoon.

The demonstrations that disrupted activity in the downtown area were led by a Marxist coalition that has not signed the agreement. The coalition called for Chileans to protest today to demonstrate support for an immediate return to civilian rule.

"I consider today a success in every sense," said Ricardo Lagos, the vice president of the Democratic Alliance. "It is true that some people may have stayed home out of fear because of the sense that something was going to hap-

URSDAY, SEPTEMBER 5, 1985

L

A5

pen on Sept. 4, but others went home as a peaceful way to protest."

Mr. Lagos said that at least "several thousand" people had signed the agreement today, but that an official account would not be ready until Thursday.

The agreement, which was reached with the help of the Roman Catholic Church, calls for a direct popular election of a President and a Congress in 1989. The Government's plan calls for the four-member junta to nominate a single presidential candidate for approval in a referendum in 1989 and for congressional elections a year later. Political leaders fear that this would only prolong the present regime.

Juan de Dios Carmona, a member of the Socialist Christian Movement, said the credit for the slowdown in activity today should go to the Communist

Party. "No other force called for today's protest," he said.

Demonstrators in the downtown area and in the poorer neighborhoods attempted to block traffic in the afternoon by stopping buses or erecting barricades. The police appeared to use more restraint than in the past, often leaving the demonstrators free to chant until they began to block traffic. At that point, water cannons were sent down the pedestrian malls to disperse them and many units fired tear gas.

8 Commuters Injured

The water cannons were also effective in closing the tables that had been set up along the malls to enable Chileans to sign the political agreement. However, people went to other places, such as the College of Medicine, to sign.

Local radio stations reported that eight commuters were injured when their buses were stopped by demonstrators. A priest in Lobermida, a neighborhood in the north of the city, said three residents were injured slightly when policemen drove by and fired a shot.

There were sporadic power failures throughout the city in the evening and a local radio station reported that there were delays on trains coming into the capital because of barricades along the tracks.

President Pinochet spoke today, calling his rule "not hard but a soft dictatorship."

"If things change," he said, "the Government will be obliged to take more drastic measures."

IT'S AN EMERGENCY: SAVE WATER!

The New York Times

Copyright © 1985 The New York Times

NEW YORK, FRIDAY, SEPTEMBER 6, 1985

50 cents

6 Chileans Reported Killed in Wide Protests

By LYDIA CHAVEZ

Special to The New York Times

SANTIAGO, Chile, Sept. 5 — Six Chileans were reported killed in a day of anti-Government demonstrations on Wednesday protesting the military regime of President Augusto Pinochet. More than three dozen people were wounded, including six who were in serious condition.

Activity in most of the capital returned to normal today, but the Chilean Human Rights Commission said there were scattered incidents during the day in which the police used tear gas to disperse crowds in two outlying neighborhoods. It was unclear if there were any injuries.

The protest Wednesday was the largest in a year and the first major show of opposition force since June, when General Pinochet lifted a seven-month state of siege.

No Curfew Is Imposed

Some political leaders said they feared that the violence on Wednesday would provoke a renewed crackdown by General Pinochet. But others said the Government's decision not to order a major troop deployment or an early curfew — moves taken during protests in the past — could indicate pressures within the regime to avoid a direct confrontation with the opposition.

By early today, most of the troops deployed in the capital's outlying neighborhoods had been withdrawn. A water cannon parked near the Presidential Palace was the only sign remaining

from the street demonstrations in downtown Santiago.

Shopkeepers had closed their doors by mid-afternoon Wednesday, 80 percent of the bus drivers stayed home, and truck drivers went out on strike. During the night, the demonstrations in four neighborhoods erupted into clashes with the police, looting and vandalism.

Protests in Most Cities

The protests spread to most major cities, from Arica in the north to Punta Arenas in the south, with more than 550

arrests reported nationwide, according to human rights officials.

The Chilean Human Rights Commission said the six dead had been killed during the demonstrations. While the group attributed some of the gunfire to Government forces, they said the police appeared to use more restraint than in past demonstrations.

Three of the victims were killed by gunfire from passing autos, the Human Rights Commission said. Two victims were killed in separate looting inci-

Continued on Page A4, Column 3

6 Reported Dead in Chile Protest

Continued From Page A1

dents, it said, and a third was killed at a barricade.

The Government used both policemen and army troops on Wednesday, but both forces were deployed in substantially reduced levels compared with past protests.

"This institution did not use firearms in any sector to break up disorders," said a communiqué by the Carabineros, the 35,000-man national police force. The Carabineros have come under attack recently because of their reported involvement in the slaying of three Communists in March. A military judge today returned the investigations of the killings to the civilian court.

Middle-Class Support Cited

Political leaders said the success of Wednesday's protests demonstrated both renewed support from the middle class and the continued ability of the Marxist parties to lead successful street demonstrations.

"The middle class closes its shops, and the lower classes demonstrate in the streets, because they have more to protest," said Jorge Schaulsohn, a member of the centrist Radical Party.

Anti-Government protests here reached a peak in 1983 and then diminished when the Government appeared ready to open talks with the opposition. When General Pinochet retreated from any negotiations in August 1984, the protests resumed. In November, the Government used increasing bombing incidents and the deaths of six policemen to impose a state of siege and strict press censorship.

11 Parties Sign Pact

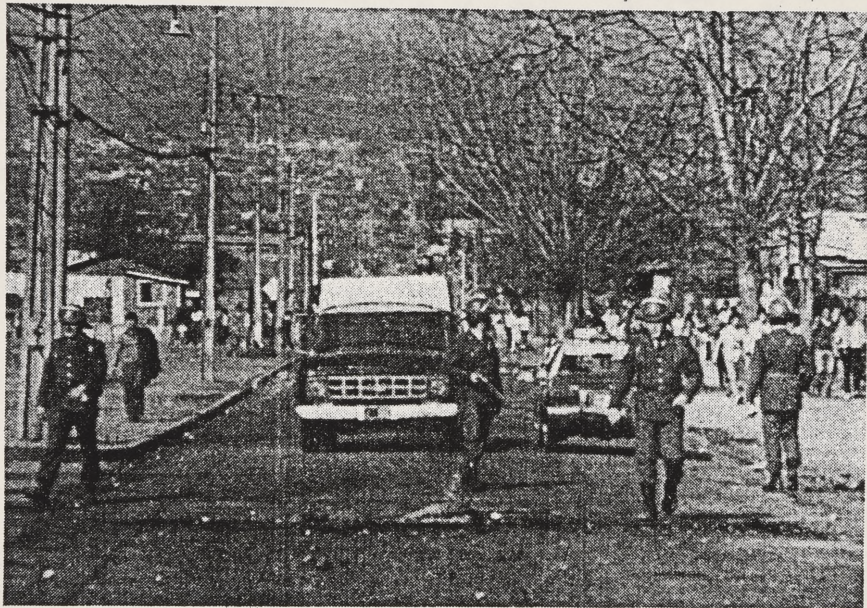
Since the lifting of the state of siege in June, 11 opposition parties from across the political spectrum have joined together to sign a pact outlining

the steps needed to return the country to civilian rule. In calling for the protest on Wednesday, the moderate parties asked Chileans to sign the agreement and return home in the early afternoon to demonstrate unhappiness with the Government. They stressed that the protest should be peaceful.

Following a different strategy, the Marxist-led coalition, which includes the Communist Party, asked its supporters to join street demonstrations and to strike. Both appeals appeared to succeed.

"Response to the agreement proves that people are tired of the Government and want democracy," said Mario Sharpe, a leader of the Social Democrats. "There have always been extreme groups that try to take advantage."

Alicia Flores, a 45-year-old housewife who lives in La Victoria, a shantytown south of the city where more than half of the residents are unemployed, said violence in her neighborhood was predictable. "They don't hear us unless we protest in this way."



Reuters

CHILEAN DEATH TOLL AT 10: Riot police patrolling streets cleared of barricades that had been set up during demonstrations in Santiago. Ten people were re-

ported yesterday to have died in three days of protests against military rule. Santiago was said to be calm as army and air force patrols joined those of the police.

THE NEW YORK TIMES, SEPT 9, 1985

A Challenge To Pinochet

A United Opposition Sees Cause for Hope

By LYDIA CHAVEZ

Special to The New York Times

SANTIAGO, Chile, Sept. 7 — The occasion of the largest anti-Government protests in a year, organized by a fragile alliance of usually fractious opposition parties, has given Chilean political leaders renewed hope for the return of civilian democracy.

Such hopes have been raised and dashed from time to time in the 12 years since Gen. Augusto Pinochet seized power.

But this week, political leaders said, the opposition showed that it had faced reality, moderated its demands substantially by acknowledging that the restoration of democracy will take years, and offered the armed forces a united front that rejects political violence.

"In 1983 we were asking for the immediate resignation of Pinochet, congressional elections and a transition government," said Genero Arriagada, a Christian Democrat. "We have matured since then."

The opposition agreement, called the National Accord for the Transition to a Full Democracy, was nurtured by the Roman Catholic Church and signed this month by 11 parties representing about 80 percent of the electorate. It was the first time such a broad spectrum of the opposition had agreed on the rules for a return to civilian government.

Collective Trials Ruled Out

As an offering to the military, the agreement rules out collective trials for human rights abuses such as the one now being held in Argentina.

The Communist Party declined to sign the agreement.

"We are saying that the alternative to Pinochet is not chaos, as he insists, but a constructive and broadly based democratic consensus," said Fernando Léniz, a member of General Pinochet's Cabinet soon after the general toppled the elected Marxist Government of Salvador Allende Gossens in 1973.

The opposition's daunting task is to woo the armed forces without provoking violent protests, which would encourage General Pinochet to tighten his grip. While protests are needed to bring pressure on the Government, the demonstrations this week, in which 10 people were killed, proved that the moderate opposition cannot control the level of violence.

The Government responded to the new protests by arresting 64 mid-level political and union leaders and saying it would not tolerate future demonstrations.

Divisiveness a Problem

Perhaps as difficult, political leaders say, will be maintaining unity among bedfellows as diverse as the rightist National Party and the moderate Socialists. In the past, General Pinochet has used the infighting among his democratic opponents, together with the violence espoused by the Communist Party, to justify his rule.

The opposition accord calculatingly avoids any precise timetable for its demands, but calls for direct election of both a President and a congress. It explicitly supports a mixed economy and the right to private property.

The accord proposes the immediate drawing up of an electoral register, the legalization of political parties, the return of exiles and the restoration of full civil liberties.

Some political leaders said the accord passively acknowledges an acceptance of General Pinochet's presidency through 1989, the year his tenure ends under the Constitution. But they said they were not prepared to accept anything in 1989 beyond a return to a full democracy, something not envisioned in the Constitution.

Pinochet Scorns Accord

It is the opposition's conviction that General Pinochet intends to retain his power for life. The Constitution now calls for the four-man junta to nominate a single presidential candidate for approval in a referendum in 1989. At times, General Pinochet has hinted he could be the candidate.

General Pinochet rejected the opposition accord, ridiculing its formulators as "pseudopoliticians." A subsequent Government communiqué conceded the document raised some interesting points, but said it lacked clarity and precision.

The strategy of the opposition parties now is to build support for the agreement, especially among the middle class. Their hope is that with strong support for the accord, the armed forces will find it difficult to ignore them. In the best of all worlds, they imagine the military pushing General Pinochet aside and overseeing a return to civilian rule.

"The agreement isolates Pinochet and his position, which may be extremist within the Government," said Jorge Schlausohn, a member of the Radical Party. "The past division in the opposition is the most important argument he has within the military to ignore us."

Communist Role Debated

One political leader said the new unity could come under a severe test by a mere request from the Government that the alliance explicitly reject the Communist Party.

To win the support of the political right and left, the accord was carefully formulated to omit specific mention of the Communists. Instead, it promises that "those whose objective, acts or conduct do not respect" the "rejection of violence" will be "declared unconstitutional."

The political right, like General Pinochet, hates the Communists. The moderate left, while rejecting violence as a solution, finds it impossible to imagine a Chile without the Communist Party, which won 16 percent of the vote in the 1973 congressional elections.

Chile Arrests 64 in Aftermath of Demonstrations

By LYDIA CHAVEZ

Special to The New York Times

SANTIAGO, Chile, Sept. 7 — The Chilean Government arrested 64 people today, including middle-level political and union leaders, according to the police.

Other people were visited early in the morning by Government forces and were summoned to appear before a judge on charges that they had incited violence during anti-Government protests this week in which 10 people were killed.

The Government has said 97 people will be investigated for their roles in planning and organizing "acts of vio-

lence." No specific charges have been filed against those arrested today.

Such roundups have become common in Chile after anti-Government protests. The police sweep today was smaller than others conducted in the past, in which police arrested and questioned all the men in whole neighborhoods.

Largest Protest in a Year

The anti-Government protest on Wednesday was the largest in a year and the first demonstration of force by the opposition since a state of siege was lifted in June. The Marxist parties had called on Chileans to demonstrate

openly. However, the moderate opposition had asked them to show their disapproval of President Augusto Pinochet by returning home early and signing a new political pact outlining the steps for a return to democracy.

Some of those arrested today included middle-level leaders of the leftist political parties that signed the agreement. The accord was signed by the leaders of 11 opposition parties that together represent about 80 percent of the electorate.

Despite the moderate opposition's call for a day of peaceful protests, the demonstrations held Wednesday evening in the poorer neighborhoods

S, SUNDAY, SEPTEMBER 8, 1985

21

became particularly chaotic. The police reported more than 100 incidents of looting, attacks on private property, and vandalism. Nearly 600 people were reported arrested during the nationwide protest.

Warning From Interior Minister

Ricardo García, the Interior Minister, warned that violence served no one and that the Government would not "accept new protests." He also criticized those who he said called for peaceful demonstrations knowing they would end in violence.

Andrés Domínguez, the president of the Chilean Human Rights Commission, called the arrests today a "strong and violent" reaction on the Government's part. Some of the commission's neighborhood workers had been detained, he said.

Mr. Domínguez said it was likely that a "high number" of those arrested would be sent to internal exile. During the seven-month state of siege that was lifted in June, more than 600 Chileans were sent to fend for themselves in remote parts of the country. At present 29 Chileans are serving a three-month period of internal exile.

Outsiders Said to Be Involved

Mr. Domínguez said the investigation into the high level of looting showed that in some cases the incidents had been provoked by groups from outside the neighborhoods. He added that there were indications that the groups included policemen and other Government forces.

Relatives and friends of those detained this morning gathered in front of a police building in downtown Santiago

to wait for news of their relatives.

"Men dressed in civilian clothes came to my house at seven this morning asking for my son," said Frecia González Ponce. When the men were told that her 24-year-old son Patricio did not live there, she said, they immediately went to his home to pick him up.

"He's not involved in anything," she said. "He's been sick for the last month."

The New York Times Sept. 8, 1985

Protests Resume Against Pinochet

Protests against continued military rule in Chile seem to come in waves as President Augusto Pinochet alternately tightens and loosens his dictatorship. Last week the demonstrators were in the streets again, and so were General Pinochet's police. The result of the biggest demonstrations in more than a year was at least 10 deaths, close to 40 injuries, the sacking of dozens of stores and more than 600 arrests.

Two incompatible forces accounted for the renewed anti-Gov-



Reuters

Students blocking a street in Santiago, Chile, last week.

ernment activity. Under the aegis of the Roman Catholic Church, 11 opposition parties drew up two weeks ago an agreement calling for a transition to civilian rule through direct popular elections of a president and congress in 1989. The Democratic Alliance, a coalition of six moderate

parties, sought to give the agreement more weight by collecting signatures among the public and asking the signers to go home in a kind of informal strike. But the Communist Party and other Marxist groups, which were excluded from the agreement, staged simultaneous demonstrations in favor of an immediate end to military government, and most of the trouble started there.

General Pinochet, who ended a state of siege two months ago, characterized his rule as "a soft dictatorship" but warned that "if things change, the Government will be obliged to take more drastic measures." His present term is supposed to end in 1989, but his critics fear little may change if the transition plan he has drawn up is followed. It calls for the four-member military junta to nominate a presidential candidate who would be ratified by referendum. The candidate could well be General Pinochet himself. Congressional elections would not be held until 1990.

The New York Times
Sept. 12, 1985

12 Years of Night in Chile

By Robert F. Drinan

WASHINGTON — What will opposition forces in Chile do today, the 12th anniversary of the coup that brought Gen. Augusto Pinochet to power? I found no clear answers to that question during a visit last month. But I saw water cannons waiting to quell demonstrators. I saw, too, deep frustration among the 11.8 million people, who are humiliated by the torture, murders, harassment and the exiling of citizens who are heirs to one of the richest democratic traditions in Latin America.

I do know the United States has an important role in Chile's future. The arrival shortly of a new ambassador offers the Administration an opportunity to change its policy, in which pieties about a democratic transition are coupled with acts that bolster General Pinochet. We must now press unmistakably for civilian rule.

President Reagan owes Chilean

Robert F. Drinan, S.J., a former Representative who is professor of law at Georgetown University, visited Chile on a mission for the International League for Human Rights.

Reagan can help bring dawn

citizens no less. The disintegration of freedom in the last dozen years has been appalling. In 1973, more than 50 percent of all workers belonged to labor unions; today, only 8 percent. In 1973, the external debt was \$4 billion; today, \$22 billion. The media are censored. Torture touches hundreds each year but intimidates millions. Political parties are suspended.

Aside from the United States, about the only source of hope in Chile is the Roman Catholic Church. At a dinner in the home of Raúl Silva Henríquez, the 78-year-old retired Archbishop of Santiago, this venerable figure reviewed his efforts to deter terror from 1973 to 1983 and concluded by saying that the Government's oppression of the church is as bad as persecution of the church in the Roman

Empire in the early centuries of Christianity. Chile is harassing the church because, almost alone among social institutions, it represents the tortured, the exiled, the unemployed and the poor.

Nearly everyone in Chile wonders when the dark night will end. Now 88 years old, General Pinochet will not go voluntarily because he has no place to go. If he remains in Chile, he could be tried for countless crimes just as generals and admirals of Argentina have been tried. If he wants to go abroad, there is no place to go except possibly Paraguay.

I have hundreds of memories of the people I talked with. But the one I shall never be able to forget is a man I met in a line outside a jail in Valparaíso while waiting to visit 42 political prisoners.

He told me he was waiting to visit his two sons, both imprisoned on unspecified charges of subversion. After two years, no trial date had been set. Torture had been used, but he obviously did not want to talk about it. As I moved out of the line into the prison, he ended our conversation by stating, "What happens to my sons depends on decisions to be made by the President of your country." □

A-VII-2

SUBSIDIZING PINOCHET:

Aid and Comfort for the Chilean Dictatorship

By *W. Frick Curry*,
assisted by *Diana Horowitz*



Slowly unfolding, this time on the continent of South America, is an all-too-familiar foreign policy scenario: The United States supports an intransigent right-wing dictator while his opposition grows increasingly violent—and anti-American. As in Somoza’s Nicaragua and Iran under the Shah, the United States has allied itself with a ruler whose primary talent is laying the groundwork for radical change by the brutal repression of all moderate opposition. Since he came to power in a bloody 1973 coup, Chile’s General Augusto Pinochet has systematically dismantled the institutions of a once-vibrant democracy and compiled one of South America’s worst records of human rights violations. Adding to the misery of the Chilean populace is a deteriorating economy exacerbated by military mismanagement.

Pinochet’s continued rule looks even worse when contrasted with the democratic tide in neighboring countries. Although the promise of a transition to civilian rule was held out by Chile’s 1980 Constitution, General Pinochet seems unlikely to give up his absolute authority. As Argentina, Brazil, and Uruguay have made the transition to civilian rule, Pinochet has openly declared his lack of faith in “orthodox democracy,” claiming that it leads inevitably to communist dictatorship. Indeed, the recent increase in murders and disappearances of government opponents suggests that Pinochet is not about to tolerate political dissent or even a dialogue with his opposition. Given the willingness of the United States and the international financial institutions to supply aid and comfort for the Chilean military government, Pinochet is under little external pressure to abandon his hard line.

Before Chile descends further into the political violence that seems the only recourse of Pinochet’s opposition, it

INSIDE:

Chile’s Constitution	3
Eximbank Exposure	5
MDB Loans and U.S. Votes	6
Loans and Grants to Chile	8
Harkin Amendment	9

is important to document how his regime continues to receive subsidies and assistance from sources that in many cases the U.S. Congress has attempted to legally deny to human rights violators. Used constructively, these spigots of aid could become leverage to encourage a peaceful return to democracy. At the very least, their absence will ensure that the United States does not side with another tyrant increasingly besieged by his own people. If the flows of aid continue, the United States must once again be prepared for the consequences of having backed a ruler who can remain in power only through repression and state terror.

Twelve Years of Pinochet The Descent into Economic Decay and Violence

After the post-coup reign of terror during which some ten thousand people were murdered or "disappeared" (some estimates place the total closer to thirty thousand), it appeared by the late 1970s that General Pinochet had moderated his hard line toward dissent. In reality, any respite in repression was due more to the short-lived economic prosperity of the period than to renewed respect for human rights by the Chilean military. After the so-called "boom" collapsed in the wake of government mismanagement of the exchange rate and excessive foreign borrowing, public opposition to the dictatorship intensified. So too did the government repression.

In early 1984, at the depths of a depression the World Bank calls "Chile's worst experience in the last fifty years," inflation and real unemployment both hovered near 30 percent.¹ Massive foreign borrowing during the boom years had driven external debt to \$17 billion or \$1,460 per capita.² Living standards plummeted as the minimum wage lost 34 percent of its purchasing power between 1981 and 1984. Although the depression was precipitated by a world recession and a decline in the price of Chile's raw material exports, a World Bank internal staff report charges that the military's economic policies "aggravated these effects." The Chilean people apparently also held their government accountable.

Beginning in May of 1983, Chileans took to the streets as never before under the Pinochet regime. Demonstrations became regular occurrences in Santiago with half a million people taking part in Chile's largest-ever demonstration on May Day, 1984. On October 30, 1984 the first nationwide strike since the 1973 coup effectively paralyzed the country. Although Pinochet flirted briefly with what he called an "opening" to democracy in late 1983, the increasingly open opposition to his rule caused him to resort to the iron fist that brought him to power. The Chilean Catholic Church's human rights organization, the Vicariate of Solidarity, estimates that at least one-hundred people were killed by security forces during anti-government demonstrations between May 1983 and

May 1984. On November 6, 1984, the day of President Reagan's reelection, Pinochet imposed a state of siege.

Under the state of siege the human rights situation in Chile has deteriorated rapidly. The Chilean Human Rights Commission estimates that political arrests jumped from a low of 909 in 1981 to 39,429 in 1984. At one point, 8,000 people were detained in a soccer stadium with 467 others (including ten members of the Human Rights Commission) "banished" into internal exile.³ Amnesty International has documented numerous instances of the physical and psychological torture and rape of Chileans arrested or simply taken into custody for political reasons.

Equally ominous has been the return of political murders and "disappearances" at the hands of government officials and death squads. The Vicariate of Solidarity reports that for the first time since 1978 Pinochet's security forces have begun denying knowledge of people under detention. Adding to a growing reign of state-imposed terror has been the emergence of Central American-style death squads. The most flagrant incident to date occurred on March 29 when three members of the Communist Party were kidnapped by armed civilians and later found with their throats slit. The victims included a worker for the Vicariate of Solidarity and the president of a teacher's federation. Opposition leaders and witnesses to the kidnappings have accused members of government security forces of taking part in the death squads.⁴ This increased use of repression by Chile's military government since the imposition of the state of siege has been recognized by the U.S. State Department in its *Country Reports on Human Rights Practices for 1984*:

Measures taken by the Government under the State of Siege resulted in numerous violations of internationally recognized human rights and a general deterioration of human rights practices . . . Torture and police brutality continue to be a serious problem in Chile. Torture by the security services, particularly the CNI . . . is apparently permitted by the Government. High-level government officials deny that the use of torture is authorized, but there is no evidence of specific government action to end torture . . . Arbitrary arrests, detentions and internal exile without trial were among the most serious areas of human rights violations in 1984.⁵

Hastening the descent of Chile into extremist political violence have been stepped-up bombings and other attacks for which leftist groups, especially the Manuel Rodriguez Patriotic Front, have claimed credit. Such incidents increased from 139 in 1983 to 735 in 1984. If avenues of legitimate and meaningful political participation remain closed by Pinochet, it is likely that the violent opposition to his rule will gain more adherents as Chile plunges deeper into an abyss of terror and counter-terror.

CHILE'S CONSTITUTION: A TRANSITION TO DEMOCRACY?

The Reagan administration and General Pinochet both agree that Chile's new constitution should be accepted by the opposition and form the basis of a "transition to democracy." Ratified by the electorate in a plebiscite held at the height of the economic "boom," the constitution has been rejected by opposition parties as an instrument to stifle political debate and legitimate the rule of Pinochet until at least 1997. Indeed, if General Pinochet carries out the constitution as it currently stands (which many observers doubt), it gives him and the military significant advantages over any opposition.

The constitution provides for another plebiscite to be held in 1989 to determine if General Pinochet—or another military-appointed president—should rule for the following eight years. The ban on political party activity would be continued through the plebiscite process and any candidate not approved by the ruling junta is excluded from the ballot.

If the junta candidate loses, General Pinochet would continue in power for another year at which point the plebiscite process would begin again. Even after 1990 a ban on Marxist parties would continue and the president would retain considerable power to arbitrarily restrain civil liberties through a variety of emergency decrees. Although a congress would be elected and convene in 1990, the military would retain much of its influence over public policy through the appointment of key senators, judges and oversight powers vested in the national security council.

The Spigots of Aid

Only the U.S. Congress prevents the Reagan administration from providing aid to the Pinochet dictatorship in the amounts and variety that both Reagan and Pinochet desire. Statements and actions by the Reagan administration strongly suggest that left to its own devices it would return U.S. policy to the days immediately following Pinochet's seizure of power. At that critical juncture, the Nixon and Ford administrations heaped record amounts of aid on the new military junta that had saved Chile from what Secretary of State Henry Kissinger called the "irresponsibility of its own people." In the three years following the coup, direct U.S. economic aid to Chile totalled \$350.5 million compared to only \$27.7 million in aid during the three years of Allende's presidency.⁶ Congressional restrictions and the human rights concerns of the Carter administration later

reduced this assistance to a trickle.

However, earlier this year the president's key adviser for Latin American policy, then-Assistant Secretary of State Langhorne Motley, declared that the country was "in good hands." Accordingly, both Motley and Deputy Assistant Secretary of Defense Nestor Sanchez are reported to have discussed with Pinochet the expansion of U.S. assistance to Chile. In order to achieve this goal, the Reagan administration has stretched, and perhaps broken, current laws intended to limit assistance to human rights violators in general and Chile in particular.

Bilateral Economic Aid

Existing limitations on direct bilateral economic assistance to Chile can be traced to the 1975 amendment to the Foreign Assistance Act proposed by then-Representative Tom Harkin (D-Iowa). This, the first of the human rights laws better known as the Harkin amendments, provides that no U.S. assistance shall be provided to any government that "engages in a consistent pattern of gross violations of internationally recognized human rights." However, exceptions are made for aid that "will directly benefit needy people." Since the Harkin amendment was passed no administration has been willing to certify that the Pinochet government is not a gross violator of human rights. Under the human-needs exception a total of \$23.2 million in direct economic assistance has been provided to Chile during the last four years.

Military Assistance

Congress reacted quickly to the military reign of terror that followed the Chilean military's coup of September 11, 1973. In December of that year the Senate voted for the first time to halt all military aid to Pinochet's junta. Congress imposed yearly sanctions until 1976 when an amendment introduced by Senator Edward Kennedy (D-Mass.) made the prohibition on military aid and sales to Chile a permanent part of security assistance legislation. In 1981 the Kennedy amendment was watered down by the addition of a provision permitting aid and arms sales to the Chilean military if the administration certifies to Congress that Chile "has made significant progress in complying with internationally recognized human rights." To date the Reagan administration has made no such certification. However, this has not stopped the administration from bypassing the congressional sanctions in the case of arms exports and proposing a resumption of training funds for the Chilean military.

In 1984, for the first time since passage of the Kennedy amendment, U.S. military equipment was exported to Chile. The Reagan administration was able to avoid the congressionally-mandated certification procedures by reclassifying ejection seat parts for Chile's U.S.-made F-5E and A-37B military aircraft as "safety-related" so they were not covered by the law. Although the amount

of material was small, only \$11,000 worth, the precedent used and the message this action sent to the Chilean military should be of concern to Congress. This small but critical pipeline will be kept open following Congressional approval of the administration's fiscal year 1986 request to provide for the sale of additional "safety-related" equipment for U.S. aircraft supplied before January 1976. This will permit additional commercial arms to be licensed for export to Chile in the coming year.

The Reagan administration also has proposed resumption of the training of Chilean military personnel in the United States and Panama under the International Military Education and Training Program (IMET)—a step that would require the administration to certify that Chile is no longer a gross violator of human rights. The Administration says that "Renewed contact and cooperation between the U.S. and Chilean military . . . will help strengthen the professional orientation . . . and respect for human rights . . . of the Chilean Armed Forces." This justification, similar to that which underlies all IMET proposals, should be considered in light of the fact that the United States spent over \$16 million to train 6,352 Chilean military personnel in the years between 1950 and the 1973 military coup.⁷

Showing that it is willing to engage in any form of military cooperation with the Chilean junta not expressly prohibited by law, the Reagan administration has resumed the practice of holding joint naval exercises with Chile. The "Unitas" anti-submarine exercises are being held again this year between August 13 and September 13 and involve port calls in Chile by U.S. warships.

A Space Shuttle Base for Chile

The National Aeronautics and Space Administration (NASA) has proposed to construct the first U.S. base on Chilean soil. Early this year NASA approached Chile with a plan to expand an airport on Chile's Easter Island to serve as an emergency landing site for the space shuttle. Although it is a civilian agency, NASA will require the use of Easter Island for military shuttle flights to be launched into polar orbits from Vandenberg Air Force base in California beginning in 1986. A contingency landing site on Easter Island will permit NASA to achieve its "performance commitment to the Department of Defense."⁸

Although chances of ever making an emergency landing on Easter Island are slight, the absence of this contingency base would require the shuttle to "hold propellants in reserve" for a return to Vandenberg in the event of a problem during the launch. Easter Island's availability will permit NASA to "dedicate the main propulsion propellants for injecting the orbiter and its payload into its required orbit." Although classified, payloads are likely to include devices for the "Star Wars" program. The polar orbit achieved with launches from Vandenberg will also enable the shuttle to traverse much

more of the Soviet Union than is possible with the equatorial orbits resulting from Cape Canaveral launches.

The plan includes the extension of an existing airstrip and the addition of electronic navigation facilities and emergency landing equipment. Although NASA requested that \$7.6 million be reprogramed from its 1985 budget for the project, the Chilean air force estimates the total project cost at \$18 million.

Opposition to the shuttle base, including public demonstrations, has surfaced in Chile. Concern centers on the potential for Chile to become a target in a nuclear war because of the military-related use of the Easter Island base. It is more than likely that the junta used this opposition to its advantage in negotiations with the U.S. over the base proposal. Rather than a simple executive agreement, the junta's Foreign Ministry called for a formal treaty with the United States prior to construction. During a May, 1985 meeting of a special Chilean cabinet commission set up to consider the proposal, Foreign Minister Jaime del Valle warned that the base would "disrupt normal life" for inhabitants of the small island. Moreover, del Valle used the occasion to urge the United States to end its nine-year military sales embargo against Chile.⁹ Although the Easter Island base does not approach the scale of U.S. bases such as Subic Bay in the Philippines, del Valle's remarks indicate the potential for even such a small outpost to be used as a lever of pressure on the United States. A twenty-one-item treaty allowing construction and use of the Easter Island base was signed by the United States and Chile on August 2.

Backdoor Bilateral Aid

Although congressional action has significantly curtailed or halted most forms of direct bilateral assistance to Chile, the U.S. government continues to subsidize and encourage private-sector dealings with Chile through less scrutinized channels. These include the Commodity Credit Corporation (CCC), the Export-Import Bank (Eximbank), and the Overseas Private Investment Corporation (OPIC). All are quasi-governmental corporations that received their initial capitalization from congressional appropriations. Although they are independently operated and largely financed through fees and interest, Congress must approve their yearly funding ceilings and their guarantees are still backed by the U.S. Treasury.

The importance of the U.S. presence in the Chilean economy relative to other countries cannot be overstated. In 1984 United States companies accounted for 48.8 percent of the total \$1.7 billion in operating foreign investment in Chile. By comparison, Spanish-owned businesses were next highest with 9.6 percent.¹⁰ During the first half of 1984 U.S. exports to Chile amounted to \$341 million for a 20.3 percent share of the total Chilean import market.¹¹ Given the growing political unrest and violence in Chile it is doubtful whether U.S. firms would

risk a presence of this magnitude without the U.S. government-backed insurance and guarantees provided by these agencies.

Commodity Credit Corporation

The Department of Agriculture's Commodity Credit Corporation is intended to promote the export of U.S. agricultural products. It encourages exports to by financing export sales and ensuring exporters they will receive payment. The CCC also offers below-market credit subsidies to counter foreign-subsidized competition in selected countries. Although its primary beneficiaries are U.S. farmers, commodity dealers and exporters, importing countries are assured full access to U.S. agricultural products at market or below-market prices.

While Congress has applied human rights law to CCC financing of Food for Peace (Public Law 480) sales, the much larger commercial sales program is not subject to human rights conditions. Because it is funded out of the Agriculture Department's budget the program does not receive close scrutiny of its foreign policy ramifications. Indeed, specific country allocations are made only after Congress has approved overall funding levels for the CCC. Recent commercial credit guarantees for exports to Chile have shown an increase from \$31 million in fiscal year 1983 to \$110 million for 1985.

The Eximbank

The Eximbank was established and initially capitalized by Congress to encourage trade by financing U.S. exports. Eximbank assumes all political and commercial risks of nonpayment covered by its policies. Because interest and fees now support its operations, Eximbank does not receive congressional appropriations. However, Congress does set its annual budget ceilings.

Although Eximbank has provided Chile with relatively few direct credits or loans, it has been a significant source of assistance to the Chilean economy by providing loan guarantees and insurance to U.S. investors doing business there. Eximbank has current exposure in Chile amounting to \$117 million. In 1984 alone Eximbank authorized \$36 million of its funds to projects in Chile.¹² In 1977 President Carter had imposed a ban on direct credits to Chile when Pinochet refused to extradite three Chilean secret agents indicted by a U.S. grand jury for the 1976 car-bomb murders of Orlando Letelier and Ronni Moffitt. However, this ban did not affect other Eximbank services which historically have been far more important to Chile. In 1980, one month after his inauguration, President Reagan lifted the ban without achieving the extradition of the murder suspects.

Table I illustrates the pattern of Eximbank exposure in Chile in the last thirteen years.

The Eximbank charter has one human rights provision. It states that the bank may only deny applications for reasons other than financial or commercial when "the

TABLE 1
Eximbank Exposure in Chile

<i>Fiscal year</i>	<i>Authorized funding in U.S. dollars</i>
1971	12,974,696
1972	5,582,049
1973	13,500
1974	55,800,000; including 55,600,000 in direct loans*
1975	54,866,282; including 21,315,150 in direct loans
1976	30,753,601; including 5,560,991 in direct credit
1977	48,796,204
1978	6,516,567
1979	7,865,400
1980	2,395,937
1981	29,516,054
1982	17,584,022
1983	60,914,971
1984	35,919,177; including 11,453,750 in direct credit for the Colbun-Michicura Hydroelectric project

Data from: the *Annual Report(s) of the Export-Import Bank of the U.S.*, FY1971-84.

*Congressional Research Service (the coup was in FY1974: 9/11/73)

All funds for insurance and guarantees except where otherwise noted.

President determines that such action would be in the national interest" by clearly and importantly advancing U.S. policy in the areas of international terrorism, nuclear proliferation, and human rights.¹⁴ This clause is characterized as a non-binding policy statement by the House Foreign Affairs Committee.¹⁵

Overseas Private Investment Corporation

While the Eximbank's goal is to facilitate U.S. exports, the Overseas Private Investment Corporation (OPIC) was established by Congress in 1969 to aid U.S. private investment in friendly developing nations. OPIC's primary business and largest financial commitment is to provide political risk insurance. OPIC also provides loan guarantees and direct loans to small businesses and uses its operational revenues to fund its projects. As in the case of Eximbank, Congress sets OPIC's issuing authority ceiling. OPIC provides U.S. corporations with insurance against the political risks of doing business in developing nations. Investors can purchase insurance against convertibility of local currency into U.S. dollars, against

TABLE 2
Inter-American Development Bank and World Bank Loans to Chile: 1976-1985
 (U.S. \$ millions)

Chronology of U.S. votes: 7/76-8/85

<i>Date</i>	<i>Amount</i>	<i>Loan Description</i>	<i>Institution</i>	<i>U.S. Vote</i>
7/76	21.0	Industrial Credits	IDB	NO
7/76	38.0	Agriculture	IDB	YES
12/76	25.0	Agricultural Credit and Agro-Industry	World Bank	YES
12/76	35.0	Restore Reliable Electrical Power Service	World Bank	YES
12/76	7.5	Water Supply	IDB	YES
12/77	24.5	Road	IDB	NO
3/78	14.0	Rural Health	IDB	NO
11/78	17.0	Industry/Tourism Credit	IDB	NO
11/78	17.0	Agriculture Credit	IDB	NO
4/80	38.0	Water Supply	World Bank	NO
9/80	36.0	Agriculture Credit	World Bank	NO
11/80	19.9	Rural Drinking Water	IDB	NO
12/80	42.0	Road Rehabilitation	World Bank	NO
7/8/81	126.0	Highway Reconstruction	IDB	YES
2/2/82	120.5	Urban Infrastructure	IDB	YES
3/8/82	2.0	Export Financing	IDB	YES
6/1/82	0.2	Chilean Investment Co.	World Bank	YES
6/17/82	10.0	Chilean Investment Co.	World Bank	YES
7/22/82	180.0	Spur Economic Growth	IDB	YES
5/31/83	128.0	2nd Highway Reconstruction Project	World Bank	YES
9/22/83	280.0	Colbun-Michicura Hydroelectric Power Plant	IDB	YES
11/30/83	268.0	Increase Copper Production	IDB	YES
3/21/84	2.5	Pollution Control Studies in Santiago	IDB	YES
9/26/84	82.1	Colbun-Michicura Hydroelectric Complex	IDB	YES
11/21/84	35.7	Southern Road Project	IDB	YES
11/29/84	125.0	Community Development	IDB	YES
2/21/84	48.0	Oil and Gas Exploration and Development	IDB	YES
2/7/85	130.0	Industrial Reactivation	IDB	ABSTAIN
3/14/85	10.0	Public Sector Management Technical Assistance	World Bank	ABSTAIN
5/28/85	100.0	Financial and Industrial Assistance to Private Industrial Sector	World Bank	ABSTAIN

expropriation of investments, and against political violence. Of its \$4.3 billion in insurance currently in force, OPIC has issued \$395.2 million in insurance to U.S. investors in Chile.

Due to nationalization of foreign businesses by the Allende government and a resulting \$400 million in claims for insurance, OPIC wrote no policies for Chile between 1971 and 1983. Although OPIC did achieve a "significant compensation settlement" with the Allende government, the largest claims were not settled until the Pinochet government took power.¹³ Although an OPIC source says that the corporation found the Pinochet government to be "very responsible" in settling all outstanding claims, it did not succeed in reaching a new

bilateral agreement with the junta until 1983. This permitted OPIC to resume writing policies for Chilean investments in 1984.

OPIC has two human rights provisions in its enabling legislation. It is supposed to abide by Sec. 116 of the Foreign Assistance Act, which prohibits aid to "gross and consistent" violators of human rights, unless the president determines that such aid serves basic human needs or the national interest. OPIC must also include in its Annual Report to Congress a description of any projects it turned down for human rights reasons, and those which it accepted despite them. In the latter case, OPIC must demonstrate how the projects serve basic human needs or national security.¹⁶

<i>Date</i>	<i>Amount</i>	<i>Loan Description</i>	<i>Institution</i>	<i>U.S. Vote</i>
6/18/85	55.0	Calo-Negro Methanol Plant	IFC/World Bank	YES
6/20/85	140.0	Roads III Maintenance	World Bank	YES
6/20/85	150.0	Guarantee for 300.0 Private Sector Loan	World Bank	YES
7/18/85	100.0	Industrial Recovery	World Bank	YES
8/29/85	40.0	Small and Medium Industry	World Bank	YES

Loans to Chile Pending

<i>Date</i>	<i>Amount</i>	<i>Loan Description</i>	<i>Institution</i>
10/85	250.0	Structural Adjustment Loan plus Possible Guarantee of 350.0 Private Sector Loan	World Bank
1985	40.0	Water and Sewer	World Bank
1985	120.0	Alfalzal Hydroelectric Plant	IDB
1985	100.0	Production Development	IDB
1985	20.0	Water Supply System Plan for Rural Area	IDB
1985	14.0	Investment for Agricultural Sector	IDB

Total value of U.S. votes: 7/76-8/85

<i>Administration</i>	<i>No</i>	<i>Yes</i>	<i>Abstain</i>	<i>Loans Approved</i>
Ford	21.0	105.3	0	126.3
Carter	208.4	0	0	208.4
Reagan	0	1,893.0	240.0	2,133.0
TOTALS	229.4	1,998.3	240.0	2,467.7

Data from: U.S. Department of the Treasury, *International Finance; the National Advisory Council on International Monetary and Financial Policies Annual Report(s) to the President and to the Congress for Fiscal Year(s) 1977-83*. World Bank, *Monthly Operational Summary*, June, 1985.

Multilateral Aid: The Floodgates Open Again

While direct U.S. bilateral aid to Chile has been reduced to a comparative trickle, multilateral aid has become a virtual torrent. A World Bank press release recently exclaimed that loan commitments to Chile for the current fiscal year totalled \$287 million, the "highest historical amount" for any one year to that country since the bank's founding. Indeed, loans to Chile from both of the relevant multilateral development banks (MDBs) have dramatically increased since the Reagan administration took office and reoriented U.S. policy toward Chile. These loan totals now more than supplant the precipitous decline in bilateral U.S. aid—both economic

and military—that began in fiscal year 1978 when the Kennedy amendment first took effect (see Table 3).

Because of U.S. contributions to the capitalization of the multilateral lending institutions, they serve as conduits through which increasing amounts of American tax dollars continue to reach Chile. For example, the major source of MDB funds for Chile in the last four years, the Inter-American Development Bank (IDB), currently has 35 percent of its available capital supplied by the United States. The United States is also the largest single contributor of capital to the World Bank group which includes the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD - 19.20 percent), the International Development Association (IDA - 19.54 percent), and the

TABLE 3
Loans and Grants to Chile by Source
(in millions of U.S. dollars by fiscal year)

	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
U.S. Bilateral	33.2	7.1	12.9	10.2	12.0	6.7	2.8	1.7
MDBs	60.0	59.5	35.0	74.0	258.9	192.2	573.0	352.2
IMF	0.0	18.9	0.0	0.0	0.0	0.0	564.1	230.9
TOTALS	93.2	85.5	47.9	84.2	270.9	198.9	1,139.9	584.8

Data from U.S. Department of State and *International Financial Statistics*, International Monetary Fund, 1978-1985.

International Finance Corporation (IFC - 25.53 percent). These percentages determine the proportionate voting strength that the United States enjoys relative to other member countries when the MDB executive boards consider loan applications. This is of special significance to enforcement of the Harkin amendment (Section 701 of the International Financial Institutions Act) which requires that the United States use its "voice and vote" in the MDB executive boards to advance the cause of human rights and oppose loans to gross violators of human rights.¹⁷ Given the size of its contribution and influence, the United States has by far the most powerful voice and vote.¹⁸

The International Monetary Fund (IMF), unlike the World Bank and the IDB, is not a development bank, but rather describes itself as "a mechanism to assist member-countries with [temporary] foreign exchange difficulties." U.S. actions in the IMF are not covered by the Harkin human rights language and the United States has supported recent heavy credits granted to Chile as the prices of its raw material exports (primarily copper) have declined.

Reagan administration policies in the MDBs have helped make these institutions the same source of capital for Pinochet that they were in the first days of his dictatorship. In large part because of the opposition of the Nixon administration, the World Bank and IDB had virtually stopped lending to Chile during the rule of its last elected president, Salvador Allende. However, after Allende was murdered and the military seized power in 1973, the spigots of aid from the MDBs opened up with generosity. After making no loans during the three years of Allende's presidency, the World Bank provided Chile with \$66.5 million during the first three years of the Pinochet dictatorship. The IDB was even more generous, increasing its loans to Chile nineteen fold from \$5.2 million to \$97.3 million in Pinochet's first year alone.

Because of continuing human rights abuses in Chile following the coup, Congress moved to reduce this subsidization of the junta by making the 1975 Harkin human rights language applicable to U.S. policy in the

IDB in 1976. In compliance with this law, the Ford administration took the unprecedented action of voting against an IDB loan to Chile in June, 1976. After Congress extended the Harkin language to include other MDBs in 1977, the Carter administration opposed eight loans made by the World Bank and IDB to Chile. By exerting pressure and talking to allies, President Carter reduced Chile's ration of loans to \$200 million over four years. Altogether, the Center for International Policy estimates that Carter administration policy blocked other loans to Chile worth half a billion dollars.

The Harkin language notwithstanding, both U.S. voting policy in the MDBs and the lending policies of these institutions have shifted dramatically in Chile's favor under the Reagan administration. The abruptness of this shift can be seen by the voting records and loan totals shown in Table 2.

The only hiatus in the Reagan administration's record of solid support for Chile in the MDBs occurred between February 7 and May 28 of this year when it abstained on two World Bank loans and one IDB loan to Chile. These abstentions were in response to growing concern in Congress and the U.S. human rights community over administration support for Pinochet in the face of a rapidly deteriorating human rights situation in Chile following imposition of the state of siege by the junta. The abstentions (as opposed to outright "no" votes), coupled with the failure of administration representatives to actively encourage executive board opposition, did not stop the loans from being approved.

This cautious show of disapproval by the Reagan administration toward Chile in the MDBs was short-lived. On June 18, 1985, only two days after Pinochet lifted the state of siege, the administration resumed supporting loans to Chile. The June 18 vote was for a non-basic human needs loan to build a methanol plant in southern Chile.

Resumption of U.S. support for loans to Chile undoubtedly was part of an understanding worked out with the junta. Diplomatic sources in Santiago report that U.S. State Department officials informed the junta

that any sign of human rights improvement such as permitting political parties to openly function or ending the state of siege would be rewarded. Obviously, the two-day interval between the lifting of the state of siege and the end of U.S. abstentions was hardly sufficient time to measure any real improvement in human rights. And in any case, changes made in the Chilean constitution in early June by the junta tend to minimize any differences between a state of siege and the existing state of emergency.¹⁹ It should be noted, moreover, that the Harkin amendment does not cite alleged "improvement" as a cause for supporting loans to human rights violators.²⁰

Multilateral Aid: Illegal or Just Extraordinary?

So anxious was the Reagan administration to again support Chile in the MDBs that it may be in substantive and procedural violation of the Harkin amendment. Substantively, if the Chilean junta practices "a pattern of gross violations of internationally recognized human rights," Section 701 of the International Financial Institutions Act requires U.S. opposition to non-basic human needs loans. Procedurally, Section 701 requires the Secretary of the Treasury to "consult frequently and in a timely manner" with Congress "regarding any prospec-

tive changes in policy direction toward countries which have or recently have had poor human rights records." Not only did the administration fail to provide ample time or evidence to evaluate the human rights record of the junta,²¹ but it informed Congress only *after* it changed its voting policy.

Rep. Stan Lundine (D-NY), chairman of the House Banking Committee's subcommittee on International Development Institutions and Finance (the key MDB oversight committee) reacted angrily to the administration's cavalier attitude toward the law. Responding to the abrupt change in voting policy, Representative Lundine declared, "I can't accept this immediate change in our position and violating the law with regard to consultation as an appropriate response to the Chilean government just making this announcement [termination of the state of siege]." Other than a hurried consultation by Representative Lundine with State Department officials and protest letters fired off to Treasury Secretary James A. Baker III, Congress has taken no action to hold the Reagan administration accountable for its apparent violation of the Harkin amendment.²² Failure to do so could not have come at a better time for the Chilean junta.

Chile's economic problems are so grave that the June 18 loan for \$55 million proved to be only an appetizer in satisfying Chile's enormous hunger for new foreign

RELEVANT TEXT OF INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS ACT CONTAINING HARKIN AMENDMENT

TITLE VII—HUMAN RIGHTS

Sec. 701.(a) The United States Government, in connection with its voice and vote in the International Bank for Reconstruction and Development, the International Development Association, the International Finance Corporation, the Inter-American Development Bank, the Asian Development Bank, and the African Development Fund, shall advance the cause of human rights, including by seeking to channel assistance toward countries other than those whose governments engage in—

(1) a pattern of gross violations of internationally recognized human rights, such as torture or cruel, inhumane, or degrading treatment or punishment, prolonged detention without charges, or other flagrant denial to life, liberty, and the security of person . . .

(f) The United States Executive Directors of the institutions listed in subsection (a) are authorized and instructed to oppose any loan, any extension of financial assistance, or any technical assistance to any country described in subsection (a)(1) . . . unless such

assistance is directed specifically to programs which serve the basic human needs of the citizens of such country.

(g)(1) Not later than thirty days after the end of each calendar quarter, the Secretary of the Treasury, in consultation with the Secretary of State, shall report to the chairmen and ranking minority members of the Committee on Banking, Finance and Urban Affairs of the House of Representatives, the Subcommittee on International Development Institutions and Finance of such Committee, and the Committee on Foreign Relations of the Senate, in each instance in which the United States Executive Director of an institution listed in subsection (a) opposes any loan, financial assistance, or technical assistance for reasons regarding human rights . . .

(2) The Secretary of Treasury or his delegate shall consult frequently and in a timely manner with the chairmen and ranking minority members specified in paragraph (1) to inform them regarding any prospective changes in policy direction toward countries which have or recently have had poor human rights records.

capital. Six billion dollars of Chile's \$20 billion package of foreign debt falls due this year. Repayment of Latin America's highest per capita debt, last restructured in 1983, has not been easy. Appearing before international bankers, junta Finance Minister Hernan Buchi has admitted "the unfavorable conditions Chile is experiencing today are lasting longer than we expected." Absolutely critical to Chile's obtaining the "sufficient quantity of fresh resources," Buchi says, has been the cooperation of the MDBs.²³ The World Bank proved to be extremely helpful and innovative in efforts to renegotiate and roll over Chile's debt.

Meeting on June 20, 1985, the executive directors of the World Bank joined with a consortium of private commercial banks (led by Manufacturers Hanover Trust Company) holding much of Chile's foreign debt to assemble what amounted to a debt rescheduling package of loans and loan guarantees for Chile. The result was a loan guarantee arrangement that enabled Chile to obtain a much-needed infusion of \$300 million from foreign commercial banks. The loan was made under the World Bank's cofinancing program and supplemented a previously proposed \$140 million loan for road construction and maintenance.

In justifying the loan to the executive directors, World Bank President A.W. Clausen cited "adverse developments," such as falling copper prices, that made Chile's economic position "extremely difficult." Although technically targeted for the Roads Sector Project, internal World Bank documents make it clear that if the World Bank guarantees repayment of approximately half of the \$300 million loan this will "assist Chile in agreeing with its commercial creditors on much larger package of new money financing for 1985-1986." On June 28 the Chilean Central Bank announced agreement on a package of \$1.955 billion in new money and credits as part of an overall debt rescheduling agreement with Chile's three hundred lenders.

The IMF also played a key role in the debt rescheduling package. On August 15, the board of directors approved an \$850 million loan for Chile to be drawn over the next three years. Included in this amount is \$775 million intended for an economic reform program that is part of the rescheduling agreement with commercial banks. The remainder of the loan will be made available immediately to assist Chile with its balance of payments problems.

In order to gain agreement on the new money and rescheduling package the Chilean junta consented to guarantee repayment of Chile's private bank debts and has nationalized insolvent private banks and the companies controlled by these banks. It is estimated that as much as half of the productive sector of the Chilean economy is technically insolvent. Ironically, the bank takeover means that the junta now has greater power over the private sector than did the socialist government of President Allende that it overthrew in 1973.²⁴

The fate of the remainder of this year's Chilean "new money package" may be determined in October when the

World Bank executive directors meet to vote on a \$250 million structural adjustment (balance of payments) loan for Chile. Following the Roads Sector Project formula, this proposed loan reportedly would be attached to as much as \$350 million in private sector lending with full or partial repayment guaranteed by the World Bank. Given Chile's desperate need for this money, the United States, as the World Bank's most powerful member, would seem to have maximum leverage over the Pinochet government. It is leverage that could be considerably magnified in light of reports that a number of European executive directors were ready to join the United States had the U.S. opposed the June 20 loan package. However, after overcoming its initial reluctance to guarantee commercial loans in the absence of a development project, the United States has not wavered in support for Chile since the three abstentions.

If three abstentions can lead to suspension of the state of siege in Chile, it is not unreasonable to suggest that stronger action by the United States in the MDBs could lead to equally more substantive concessions to human rights and democracy by Pinochet. U.S. approval of continued and increased subsidization of Chile's floundering economy through the MDBs does more than send the wrong message to the junta. Such aid serves to extend the life of the junta and further identify the United States with Pinochet's rule and his continuing disregard for human rights.

Time to End Constructive Engagement in the Southern Cone

Declaring that Chile suffers from "entrenched military rule," President Reagan has named Chile as an exception to the democratic tide in South America.²⁵ Nevertheless, the president and his foreign policy bureaucracy seem incapable of taking the kinds of actions necessary to move the Pinochet dictatorship toward democratic reforms. Inexplicably the Reagan administration has taken precisely the opposite path. Its pro-democratic rhetoric has been contradicted by its continued and growing support for every type of aid for Chile not specifically blocked by U.S. law. In the case of multilateral loans the administration openly flouts the law—a course of action that relies on continued Congressional failure to hold it accountable.

Once again the United States is seen as beholden to an oppressive ruler whose claim to U.S. support lies not in shared democratic values but rather in anti-communism. Recent history strongly suggests that continued U.S. support for an unyielding Pinochet will result in an escalation of political violence out of which will emerge the type of anti-American, leftist government that the United States hopes to avoid.

There are alternatives. Every source of assistance, direct and indirect, detailed in this report can serve as a lever of pressure in a constructive policy toward the Chilean junta. A systematic withdrawal of assistance, such as support for critical multilateral loans—or the potentially more powerful *threat* to do so—may move the Chilean junta to consider following the examples of the Brazilian, Argentine, and Uruguayan militaries. On the other hand, because much bilateral aid has already been suspended, its resumption could serve as an incentive to complement negative actions. The promise of the phased resumption of such aid can be made contingent on specific steps toward democracy such as permitting

political party activity and holding free elections.

It is past time for the United States to make full use of its available economic and financial leverage. The Reagan administration should abandon its Southern Cone version of "constructive engagement" and take meaningful action to make General Pinochet realize that the United States means business when it espouses human rights and democracy. For its part, Congress must cease its quiet complicity with administration policy and demand full compliance with existing human rights laws. To do less will ensure continued suffering for the Chilean people and a likely foreign policy disaster for the United States on the South American continent.

Footnotes

1. By mid-1983, 500,000 Chileans constituting 10 percent of the labor force, were employed by the government's emergency work program (PEM). This had the effect of reducing the official unemployment rate by a like amount.
2. Continued borrowing, largely to pay interest on previous obligations, had increased Chile's debt to \$20 billion by June, 1985. This made Chile Latin America's fifth largest debtor nation and the largest per capita.
3. Internal exile means confinement to remote villages without trial. No means of support or housing is provided and the victim must report to local police two or three times a day.
4. A Chilean judge agreed and indicted fourteen Carabineros, including two colonels, for the murders. Pinochet responded by replacing the Carabinero chief who is a member of the ruling junta.
5. U.S., Department of State, *Country Reports on Human Rights Practices for 1984*, Report submitted to the U.S. Congress, Senate Committee on Foreign Relations and House Committee on Foreign Affairs, 99th Cong., 1st sess., February 13, 1985, pp. 451-455.
6. For detailed documentation and analysis of this rapid infusion of U.S. aid and its importance to the Pinochet government, see William Goodfellow, "Chile's Chronic Economic Crisis: 1976 and Beyond," *International Policy Report*, September, 1976.
7. U.S. Department of Defense, Security Assistance Agency, *Foreign Military Sales, Foreign Military Construction Sales and Military Assistance Facts As of September 30, 1984*, pp. 88-89, 96-97.
8. From National Aeronautics and Space Administration document titled, "Construction of Facilities, Fiscal Year 1985 Estimates: Construct Easter Island Runway Extension."
9. Associated Press Wire, Santiago, Chile, May 16, 1985.
10. U.S., Department of Commerce, International Trade Administration, and U.S. Department of State, Bureau of Economic Affairs, *Investment Climates in Foreign Countries*, 1984.
11. U.S., Department of Commerce, International Trade Administration, *Foreign Economic Trends and their Implications for the United States*, November, 1984, p. 10.
12. Export-Import Bank, *Annual Report*, 1984.
13. U.S., Congress, House, Subcommittee on International Organizations of the Committee on Foreign Affairs, *To Require Certain Actions by the Overseas Private Investment Corporation: Hearings*, 94th Cong., 2nd sess., June 8, 1976, Statement by Gerald D. Morgan, Jr., Vice President and General Counsel of OPIC, p. 84.
14. Export-Import Bank Act of 1945 as amended, sec. 2(b)(1)(B). This authority was delegated to the Secretary of State by Executive Order No. 12166 in 1979.
15. U.S., Congress, House, Committee on Foreign Affairs, *Human Rights Documents: Compilation of Documents Pertaining to Human Rights*, Committee Print, September, 1983, p. 25.
16. Foreign Assistance Act of 1961, as amended, Title IV, Sections 239(1) and 240A(2)(A) and (B).
17. An analysis of the legislative history and uneven enforcement of this law can be found in "Enforcing Human Rights: Congress and the Multilateral Banks," by W. Frick Curry and Joanne Royce, *International Policy Report*, February 1985.
18. The United States has not hesitated to use its clout in MDBs to reward friends and punish enemies. See "The Financial Hit List," by Caleb Rossiter, *International Policy Report*, February 1984.
19. The primary differences are that under the state of emergency curfew is shortened and publications banned entirely under a state of siege can appear, albeit under heavy censorship. Party politics are still banned and the junta continues to exile, banish, or detain opponents incommunicado. Censorship is not mentioned in the Harkin amendment.
20. In 1983 Congress removed the word "consistent" from the Harkin amendment phrase "a consistent pattern of gross violations of internationally recognized human rights" in order to thwart precisely this argument. See "Enforcing Human Rights," pp. 16-18.
21. In the six months prior to the June 18 vote the Chilean Human Rights Commission documented the killing of twelve people in alleged shoot-outs with government forces; 50 attempted assassinations; 31,777 politically motivated arrests; 571 people banished to internal exile; and 1,591 sentenced to or held in concentration camps.
22. This was in recognition of the fact that although the Treasury Department has jurisdiction over policy in the MDBs it has been the State Department that has led the push for U.S. support of loans to Chile.
23. *El Mercurio*, Santiago de Chile, July 21, 1985, p. B1.
24. *Euromoney*, March, 1985, pp. 157-158. Conservatives in Congress who clamor about U.S. support for socialist governments would do well to consider this state interventionist economic policy of the Chilean junta.
25. Address at the Juan March Foundation, Madrid, Spain, May 7, 1985.

I P R • SUBSIDIZING PINOCHET

Center for International Policy
236 Massachusetts Ave., N.E.
Washington, D.C. 20002
202—544-4666

NONPROFIT
ORGANIZATION
US POSTAGE
PAID
PERMIT NO. 1503
WASHINGTON, DC

Please note new address

A project of the Fund for Peace.



A Publication of the Center for International Policy

© Copyright 1985 by the Center for International Policy. All rights reserved. The Center encourages quotation of any material herein without permission, provided the Center is credited. The Center for International Policy is a nonprofit education and research organization concerned with U.S. policy towards the Third World and its impact on human rights and human needs. Donations are urgently needed to sustain the Center's work.

YES, I would like to help continue the work of the Center. Enclosed is my tax-deductible contribution of:

\$15 \$25 \$100 Other _____

Enclosed is \$9 (U.S., Canada, Mexico) for a one-year subscription to *International Policy Reports*. (\$19 foreign air mail)

Please send me more information about the Center for International Policy.

Name _____

Street _____

City, State, Zip _____

Overseas checks must be in U.S. dollars drawn on a bank in the U.S. Canadian checks must be in U.S. dollars.

Address Change: please provide your name and NEW address above and include your OLD address label.

Staff:

William Goodfellow, *director*
Jim Morrell, *senior associate*
W. Frick Curry, *associate*
Virginia Adams, *office manager*
Gail Messier, *assistant*
Pharis Harvey, *fellow*
Cynthia McClintock, *fellow*
Caleb Rossiter, *fellow*

Indochina Project Staff:

Linda Gibson Hiebert
Murray Hiebert
Andrea Panaritis
Patricia Norland

Donald L. Ranard, *senior consultant, director, 1976-1985*

Board of Advisers:

Donald M. Fraser, *mayor of Minneapolis*

Thomas R. Asher, *attorney, Washington, D.C.*
Peggy Billings, *Board of Global Ministries, United Methodist Church*
William J. Butler, *chairman, Executive Committee, International Commission of Jurists*
Jerome Alan Cohen, *attorney, New York City*
Adrian W. DeWind, *attorney, New York City*
Richard A. Falk, *professor, Princeton University*
Gerald F. Gilmore, *Episcopal minister (retired)*
Arthur J. Goldberg, *former Supreme Court justice and ambassador to the U.N.*
Tom Harkin, *U.S. Senator*
Susan Horowitz, *Board of Trustees, Fund for Peace*
Philip C. Jessup, *former U.S. member of the International Court of Justice*
Philip Johnson, *Corporate Advisory Service*
Leon H. Keyserling, *former chairman, Economic Advisory Committee*
Wassily Leontief, *economist, Nobel laureate, New York University*
Sally Lilienthal, *sculptor, San Francisco*
Stewart R. Mott, *Board of Trustees, Fund for Peace*
Maurine Rothschild, *Board of Trustees, Fund for Peace*
Edward Snyder, *executive secretary, Friends Committee on National Legislation*
Linda Storrow, *Board of Trustees, Fund for Peace*

In North Carolina and Texas, the Republicans had a chance to make sweep-

Continued on Page A23, Column 1

Walter D. Huddleston, a Democrat, although The Associated Press reported

Continued on Page A23, Column 3

State of Siege Is Imposed in Chile

By LYDIA CHAVEZ
Special to The New York Times

7/11/84

SANTIAGO, Chile, Nov. 6 — President Augusto Pinochet imposed a state of siege in Chile today for the first time in six years.

He acted after months of political unrest and a day after his Cabinet resigned to give him a freer hand to deal with the situation.

"It is precisely to save democracy and liberty that now more than ever it is necessary to be inflexible with respect to the institutional order that rules us," the President said at a ceremony at which he announced a new Cabinet.

Greater Powers for President

Minutes after the ceremony, a nightly curfew from midnight to 5 A.M. was imposed.

The President already had considerable powers to combat terrorism under the previous state of emergency. The press could be censored and political leaders exiled.

The main difference seems to be that under the state of siege the Government can hold terrorist suspects without charges for an indefinite period and trials can be delayed indefinitely.

The new Cabinet brought only two minor changes. General Pinochet reappointed Interior Minister Sergio Onofre Jarpa, the chief minister, whose deci-

sion to step down Monday was followed immediately by the resignation of 15 other ministers.

Mr. Jarpa's resignation had been thought to be in protest against the Government's hard line against the opposition. But his decision to remain in the Cabinet indicated that he agrees with the Government's position.

The Government has taken an in-

Continued on Page A12, Column 1

A12

L+

THE NEW YORK TIMES

WEDNESDAY, NOVEMBER 7, 1984



The New York Times / Lydia Chavez

Guards outside the "control" station above Pisagua in northern Chile. With them were a priest, second from right, and a member of the local human rights commission. The visitors were not allowed past the guard shack.

3 2 4 6 0 1

Chile's Leader Imposes State of Siege and Curfew

Continued From Page A1

creasingly hard line against its opposition, which is pressing demands for a return to democracy. General Pinochet has vowed to remain in office until 1989.

The opposition, along with the Roman Catholic Church, has also been calling for consultations with the Government.

General Pinochet, who has refused to negotiate with the opposition, which represents a broad political spectrum, today blamed "subversive practices" for "impeding the full realization of democracy." He added that the "voices that affect our political life continue to be present."

Ricardo Lagos, the president of the Democratic Alliance, which represents six moderate parties, said after the General Pinochet's speech: "It seems that General Pinochet doesn't understand anything that is happening in Chile. He believes that repression will solve all that is happening."

Mr. Lagos said the Alliance would call for more protests soon. "It is the only way," he said.

In the last two days of protest, which

culminated in a national strike on Oct. 29, eight people were killed and more than 200 were sent into internal exile to the fishing town of Pisagua in northern Chile.

A spokesman for the Roman Catholic Church said the Archbishop of Santiago would have no comment until Wednesday. The church has consistently called for discussions between the opposition and the Government and has warned both sides against using violence. But it has become increasingly critical of the Government and has warned that General Pinochet's refusal to talk to the opposition would only result in more violence.

Mr. Jarpa, a civilian, was appointed Interior Minister in August 1983 in reaction to a series of protests that received widespread support. He promised the opposition that Congressional elections would be held as early as 1986. But this summer Mr. Pinochet shelved all plans for speeding up the timetable for a return to democracy that is set by the 1980 Constitution.

Under the Constitution, General Pinochet will remain in power at least until 1989 and could be reappointed President at that time by a four-mem-

ber junta. He has ruled since a military coup deposed President Salvador Allende Gossens, a Marxist, in 1973. A state of siege was declared the day after the coup and was not lifted until 1978.

The general said today that he was imposing the state of siege "to put an end to the criminal increase in terrorism."

Referring to a 1980 plebiscite that endorsed a new Constitution, he said, "A minority of the country has not respected the clear and overwhelming popular verdict in 1980."

Chile Tolerates Few Visitors At Remote Camp for Exiles

Special to The New York Times

IQUIQUE, Chile, Nov. 3 — The town of Pisagua 100 miles north of here is closed to most outsiders. The closest anyone can come to it without a pass permitting safe conduct is the aluminum "control" station perched on the sandy bluff above the remote fishing town in northern Chile.

Below the guard post, which sits in the middle of bald, softly sloping mountains, is the town where Chilean mothers threaten to send badly behaved children. The cove, surrounded on three sides by steep hills, and on the other by the Pacific Ocean, makes a perfect fortress or jail.

As in the past, the Government is sending Chileans to Pisagua. On Oct. 30 the town received 138 men between the ages of 18 and 44 who had been picked up just hours before anti-Government protests were held in Santiago and more are expected. The regional military commander has said the camp can hold 640 exiles.

The Government said the arrest of what it called common delinquents would "calm the situation" and so the men were packed on buses for the 1,250-mile ride north from Santiago.

Church Officials Allowed In

Pisagua gained the same renown as Siberia after the Government used it as a concentration camp for Communists in 1948. Since then, it has occasionally been the home for political activists banished by President Augusto Pinochet, once a young military officer in the region.

The Government has prohibited everyone except two church officials from visiting the town. Archbishop Javier Prado of Iquique, who visited the camp today, said the exiles were housed in tents set up along the beach. They have been issued bunk beds,

sheets, towels and toothbrushes.

"I don't like the process, but the conditions are better than I had hoped," the Archbishop said. He added that the prisoners had not yet been able to talk with their families.

Just who the exiles are is unclear. Archbishop Prado said that many of those he spoke with had police records.

Another church official said that according to their families some of the exiles were political organizers from poor neighborhoods in Santiago. But this has not been confirmed and no list of names is available. Archbishop Prado said none of the exiles admitted to being political activists.

He said that among the men are some alcoholics and drug addicts who are being attended by two doctors. The townspeople have asked that the exiles be kept apart from the population and so in the cove, from north to south, there are the 178 townspeople, the military and then the exiles.

Gen. Jorge Dowling, the regional military commander, declined to speak with visiting journalists. But in a written statement he said that visitors could not be allowed into Pisagua as long as "a level of security has not been established" because of the "high level of danger, indifference and aggression of the majority" of the exiles.

Archbishop Prado said that the situation at the camp today was calm and that the prisoners were preparing some entertainment for the evening.

A group of 35 exiles in the camp last year were not given food but were fed by the church, and when they left they had to find their own way home, according to church officials.

The military has promised to feed the new exiles, "rehabilitate" them and send them home in three months, which is the length of time one can be



The New York Times / Nov. 7, 1984

Prisoners picked up before recent protests were sent to Pisagua.

sent into exile during the state of emergency.

General Pinochet has frequently used internal exile as a way of banishing opponents. In 1982, the number was 86, last year it was 127 and the recent group raises this year's total to more than 250.

It is unclear how the exiles will be "rehabilitated" or whether they will be able to work in any of the 15 factories along the coast near Iquique, a town of 114,000.

Although the Government officials indicated that at some point the town would be reopened, they went to great lengths to avoid press coverage. For the first time, the armed forces canceled the annual ceremony this week commemorating the anniversary of a Chilean victory over Peru in Pisagua in 1879.

Two reporters, traveling with a priest and a member of the local human rights commission, were turned back at the guard station. One of the guards, squinting in the glare of the sun on the mountains, told a reporter it was against the law to take pictures, and refused to let the visitors walk 15 feet beyond the station to get a glimpse of the town below.

SEÑALA "THE ECONOMIST":

A-VII-2

"Limpieza en Proceso Previo al Plebiscito"

● Así lo reconoce un comentario publicado en esa influyente revista inglesa, sobre el momento político nacional.

3 2 4 6 0 1

"El proceso avanza con limpieza y los pocos que han intentado inscribirse dos veces están siendo procesados" reconoce un comentario de la revista inglesa "The Economist", en un artículo sobre el momento político chileno publicado recientemente y que hace alusión al próximo plebiscito.

Bajo el título "Bah, Capaz que Hasta Ganemos", la publicación señala lo siguiente:

"Cuando el mandatario chileno, Augusto Pinochet, prometió realizar un plebiscito presidencial hacia 1989, esperaba tranquilamente que la mayor parte de sus conciudadanos no lo notarían. Vana esperanza. La oposición se ha afanado en apremiar a los chilenos a votar contra el candidato propuesto por la Junta gobernante. Este candidato podría perfectamente ser el mismo Pinochet, pero el general está lo suficientemente preocupado como para mantener abiertas sus opciones. El 3 de noviembre pasado, aseguró a una concentración de partidarios que las últimas encuestas sugerían un amplio respaldo al Gobierno. Otros estudios calculan que, probablemente, no más del 25 por ciento de los electores dirían "sí" al candidato del Gobierno.

Pinochet ha sobrevivido a dos plebiscitos desde su cruenta llegada al poder, en 1973. En 1979, el 80% de los chilenos votó a favor del desempeño de su gobierno en materia de derechos humanos, después de haber sido criticado en las Naciones Unidas. Al año siguiente, dos tercios de los votantes aprobaron una nueva y autoritaria constitución que prolongó la presidencia del General hasta marzo de 1989. En ambos plebiscitos, los opositores tuvieron poca oportunidad de difundir sus posiciones, y las mesas electorales fueron ocupadas por partidarios del gobierno.

Esta vez, las cosas son diferentes. Desde febrero se han abierto oficinas de inscripción electoral en recintos municipales de todo el país. El proceso avanza con limpieza; los pocos que han intentado inscribirse dos veces están siendo procesados. Al comienzo, los dirigentes de oposición no podían creer lo que veían. Los niveles de inscripción eran bajos —especialmente en las áreas pobres, donde el Gobierno es menos popular— y daba la impresión de que la apatía haría ganar a Pinochet su plebiscito.

Desde mayo, esa posibilidad se ha hecho más remota. Un comité de chilenos prominentes, con partidarios que van desde la Iglesia Católica hasta el Partido Comunista, lanzó una vigorosa campaña de inscripción electoral. En algunas áreas incluso organizó prácticas de votación. Como resultado, alrededor de 450 mil chilenos se están inscribiendo cada mes; hacia mediados del próximo año, unos 6 millones (de una población de 12,3 millones) de personas pueden tener derecho a voto. Si la mayoría dice "no" al candidato del Gobierno, se procederá a realizar una elección presidencial abierta.

Nadie sabe aún quién será el candidato del Gobierno. Oficialmente, la Junta —compuesta por Pinochet como jefe del Ejército y los comandantes de la Armada, la Fuerza Aérea y la policía— debe ponerse de acuerdo sobre un candidato. Es posible que resulte difícil. Los jefes de la marina y la fuerza aérea preferirían proponer a un civil conservador en lugar del General. Si la Junta no logra ponerse de acuerdo, la decisión pasará al Consejo de Seguridad Nacional, un organismo que incluye a dos civiles, además de los jefes de las fuerzas armadas. Es poco probable que los dos civiles quieran que el General continúe. Puede que se les diga que no hay alternativa.

Después de 15 años de Pinochet, no todos los chilenos saborearán la perspectiva de ocho más. La economía se recupera: creció en 5,7 por ciento en 1986, y se espera que lo haga en aproximadamente igual proporción este año. Los empresarios están más o menos contentos, los pobres no tanto. Aunque el desempleo oficial ha comenzado a reducirse, los salarios reales siguen por debajo de los niveles de 1970.

Para conquistar nuevos adeptos, el Gobierno ha comenzado a construir viviendas para los pobres. Frecuentemente, el canal de televisión estatal muestra orgulloso a Pinochet distribuyendo títulos de propiedad. Su otro punto a favor es el miedo al terrorismo de izquierda. El Frente Manuel Rodri-

guez, que el año pasado intentó asesinarlo, sigue obsequiosamente ayudando al Gobierno. En septiembre secuestró a un coronel de Ejército. Regularmente destruye torres de electricidad con bombas, dejando a oscuras miles de kilómetros de territorio chileno.

Si tales acciones continúan, el Gobierno responderá. Pocos días después del secuestro del coronel, cinco jóvenes comunistas desaparecieron. La policía y los servicios de seguridad niegan tenerlos en su poder, pero el caso ha traído a la memoria la desaparición de izquierdistas chilenos en los años 70. La semana pasada, 78 actores de izquierda dijeron haber recibido amenazas de muerte, junto a advertencias de que abandonen el país dentro de 30 días. Y, el 5 de noviembre, un juez que investiga 35 acusaciones de tortura por parte de las fuerzas de seguridad interpuso un recurso de protección para él y su familia. Hombres de civil, dijo, habían estado fotografiando su casa. La semana anterior, otros habían ingresado a ésta y colocado un dispositivo de escucha en su teléfono.

Artículo 24

Entrevista a Claudio Illanes, abogado integrante de la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones. Voto de minoría en el "Caso Insuza-Ortega"

Los Líos en la DC

Las escaramuzas de las diversas corrientes tras la reunión de los sindicalistas en Padre Hurtado.

Santiago de Chile, Domingo 1.º de Julio de 1984

Reportajes

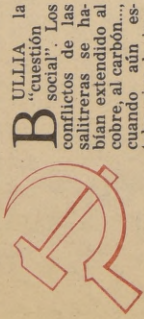
EL MERCURIO

CUERPO

D

Partido Comunista: Hoy Como Ayer

Por BLANCA ARTHUR



barren quien decide transformar su Partido Obrero Socialista en filial de Moscú, pero su concepción revolucionaria tenía su sello propio. Para él la historia debía ser una revolución que debía encarnarse en acciones y llegar así a una armonía social, consiguiendo la desaparición de las clases".

Pero ya se había dado el paso. Los ortodoxos comienzan a ganar terreno y Recabarren pone fin a su vida en 1924, dos años más tarde de su trascendental decisión.

Fue un duro golpe para el naciente Partido Comunista chileno y —pese a su derrota— Recabarren mantuvo vivo su legado, al menos en los primeros pasos de su acción, la lucha por las reivindicaciones obreras y la búsqueda de la solidaridad de las organizaciones sindicales.

Lo que la historia —más vivida que escrita aun— consigna es que esa fue la tarea de los comunistas en sus inicios, aprovechando condiciones que no les resultaban del todo adversas. Era el comienzo de los años 20, y el Presidente Arturo Alessandri intentaba resolver los conflictos políticos y sociales de la época con una constante rotativa ministerial. Los ministros eran —según el historiador Leopoldo Casanueva— "legaban y se iban".

"Mientras los flujos y reflujo de las elecciones parlamentarias y la obstrucción de una y otra banda entorpecían las prometidas soluciones a infinidad de problemas económicos, sociales e incluso diplomáticos, la cuestión social continuaba deteriorándose".

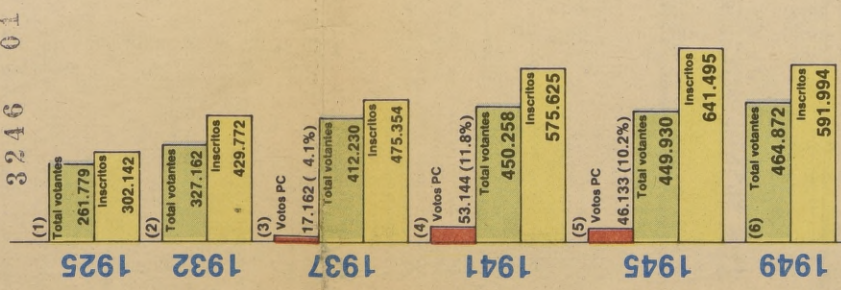
Y en los hechos, el PC —también sin borrar aún el sello de Recabarren— fue de incursión en la vía electoral aliado, el año 24 levanta la candidatura de un médico militar —José Santos Salas— en contra de Emiliano Figueroa, que aparecía como el candidato único para salir de la crisis. Las cifras le dieron un amplio triunfo a Figueroa (187 mil votos), pero el doctor Salas, abanderado de lo que se llamó "Unión Republicana de Asalarados de Chile", obtiene 74 mil.

La nueva entidad proletaria —recordada y ostentada— había adquirido una sibilina importancia. Después de un éxito un paro general apoyado en la acusación al Gobierno de fraude, que fue respondido con estado de sitio".

Progresivamente, el PC afinaba su estructura. En las parlamentarias que siguieron llega a las dos cámaras con un 10 por ciento de los votos, manteniendo lo que ya había advertido duramente la candidatura de Salas cuando dijo que éste era "el fruto de la alianza de diversas agrupaciones, ninguna de las cuales ha pensado hacer prevalecer sus ideales sobre los de los demás. Cada una conserva la integridad de los principios y doctrinas, dejadas momentáneamente de lado para salvar a la República de caer en los tentáculos de la oligarquía".

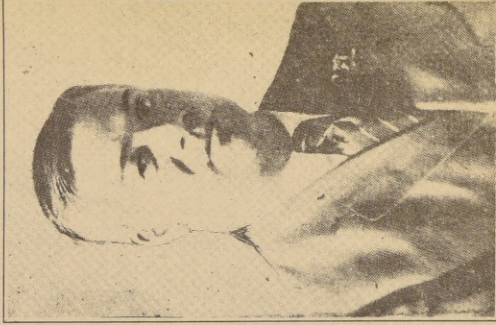
La vía de que bragarían por sus advertencias se hizo un hecho. Tras la época del caos político de los Cuartelazos que se iniciara el 25, el PC —en su congreso de 1927— decide entrar de lleno a la lucha revolucionaria, de acuerdo a la praxis leninista. Dijo en su informe:

"El partido irá acentuando su proceso de bolchevización. Los comunistas no acuden al Parlamento para consagrar el régimen capitalista, sino para derrocarlo. No se conseguirá por vías democráticas, sino por la vía revolucionaria. Su liberación no está en el Parlamento, sino en el sovietsmo".



1925 1932 1937 1941 1945 1949 1953 1957 1961 1965 1969 1973

Inicios, etapas, fundamentos y estrategias de la larga historia del comunismo criollo.



LUIS EMILIO RECARBAREN, Secretario General 1922-1924.

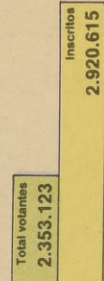
Fue entonces cuando la asamblea se reemplazó por célula como organismo de base, a fin de convertirse en "efectivo instrumento de la acción revolucionaria que debía cumplir", según palabras del historiador del partido, Hernán Ramírez Necochea, en alusión a aquel congreso. Deseché, así toda alianza con otras fuerzas políticas o sociales y es aceptado al año siguiente como el Partido Comunista, dejando su calidad de sólo "simplificante".

Ibáñez: primeros embates

No obstante, sus aspiraciones toparon con la legada del general Carlos Ibáñez al poder el mismo año 27. Como se venía perfilando, llegaría con mano firme a poner orden. Y sin vacilaciones marginó de la ley al Partido Comunista y reargó y persiguió a sus máximos dirigentes.

No fue fácil para el comunismo criollo su primera etapa de clandestinidad. El primer congreso del partido se celebró en Moscú, en el año 31, y fue dirigido por Manuel Hidalgo, el trotskista, quien tras la derrota internacional de su líder formó al Partido de Izquierda Comunista.

Tal situación no implicó que Laferte abandonara la postura adoptada el año 27. Las circunstancias que provocaron y siguieron a la caída de Ibáñez lo reforzó en su estrategia revolucionaria y abolicionista. Incluso en los días que Galdames, jefe de la policía, mandó que se volcará la situación a su favor y crean los soviets de obreros campesinos y estudiantes. También en esos días participan de la sublevación de la armada y la FOCh (Federación Obrera de Chile).



Total votantes 2.406.129

Inscritos 3.244.892

Total votantes 2.353.123

Inscritos 2.920.615

Total votantes 3.678.105

Inscritos 4.510.060

(6) Convulsión en el Frente Nacional Democrático, el PC eligió parlamentarios por Antofagasta y Víctor Galdames en calidad de comunista.

(7) En 1953, encabezado en el Frente Nacional Democrático, consiguió tres parlamentarios: Víctor Galdames, Sergio González y José Oyler.

(8) En 1957, convulsión en el Frente de Acción Popular (FRAP) obtuvo cinco nuevos diputados. Un sexto, Víctor Galdames, fue inhabilitado por el Tribunal Calificador al descalificarse su militancia.

(9) En 1961 eligió cuatro senadores y doce diputados.

(10) En 1965 logró 18 diputados y seis senadores.

(11) En 1969 consiguió seis senadores y veintidós diputados.

(12) En 1973 obtuvo nueve senadores y 19 diputados.



ELIAS LAFERTE, Secretario General.

GABRIEL GONZALEZ VIDELA, principal gestor de la proscripción comunista.

empresidieron la misión de formar el Frente Popular en Chile.

"¿Cómo hacerlo? Había entonces un 'Block de Izquierda', formado por el Partido Obrero Socialista más otras fuerzas (radicales, socialistas, democráticos), pero el radicalismo tradicional también advertía su descontento con la "derechización alejandrino". Y fue el blanco al que apuntaron. La crónica de la época recuerda que los radicales, pese a que hubo resistencia, finalmente cedieron a la tentación de encontrar la posibilidad de llegar al poder, y se unen a comunistas e incorporan al Frente de Izquierda, formando el Frente Popular.

El éxito logrado es conocido: el 38 Pedro Aguirre Cerda. Los comunistas, que habían celebrado a comienzos de ese año el llamado "congreso de la victoria" por su triunfo en la creación del Frente Popular, no aceptan, sin embargo, participar en el Gobierno.

Según relata Gabriel González Videla en sus memorias —importante gesta del Frente como presidente del dictadura de la Alemania hitleriana, y promueve una nueva estrategia para los comunistas nacionales: formar alianzas amplias, tentado a fuerzas incluso burguesas o pequeño-burguesas. Para tales efectos —formar los Frentes Populares— el comunismo internacional manda "enviados especiales" a los diversos países. A Chile llega el peruano Eudocio Karmies, quien se aboca a la tarea de preparar el programa Monrovia, en un país que —tras diez años de "comunismo"— relatará en su obra "La gran estufa".

Vientos de guerra

Pero no tuvo el Frente Popular una larga luna de miel, las pugnas en su interior se hicieron cada vez más acerbadas y vividas por diferencias doctrinarias, también por los esfuerzos de ambos en atraer a las masas populares, hasta que la ruptura se produjo el 40, a un año de iniciada la Segunda Guerra. Mientras los comunistas eran partidarios de mantener la neutralidad en que estaba la URSS, los nacionalistas propiciaban la ruptura con las naciones del eje. En bofetada del socialista Oscar Schnake se oyó decir:

"Los socialistas pensamos que el Partido Comunista, por obedecer consignas internacionales ajenas al interés de Chile y porque no hace otra cosa que despertar una falsa y perversa inquietud en la conciencia obrera, debe

ser excluido de toda combinación de avanzada".

Era el año 1941 y con la invasión alemana a Rusia, el PC crolló rompe su línea de unidad. Sydar E. U. de la URSS, el partido de los comunistas, es defender transformar al mundo en colonia nazi", declaraba Contreras Larca. Pero igual el réquiem al Frente Popular estaba dado.

No habían muerto, sin embargo, los Gobiernos radicales, pero el sucesor de Aguirre —Juan Antonio Ríos— llegó al poder como abanderado de las fuerzas de izquierda, a las que el PC se opuso, pero antes de la hazaña del regreso de Ibáñez, de triste memoria para ellos.

La verdad es que —como ocurrió desde la etapa preguerra y también la posterior— el comunismo chileno tenía puesto su foco de atención en el problema internacional, donde se jugaban los destinos de la Unión Soviética, y por lo tanto de la causa que había hecho suya. De allí que durante la administración de Aguirre todos los esfuerzos estuvieron destinados a la defensa de la línea que se ha llamado a lo largo de la historia de la Unión Nacional. Un testimonio:

"El PC de Chile se dirige a todos los sectores antifascistas del país: a los socialistas, radicales, democráticos, socialistas de los trabajadores, a los sectores antifascistas de los partidos conservador, liberal, falange y agrario, a todos los elementos progresistas sin pararse y los llama a estrechar filas para rescatar a Chile del aislamiento y despolitica de no beligerancia de Barros Jarpa y a incorporarlo a la responsabilidad de la lucha mundial contra los bárbaros, cumpliendo así el anhelo democrático que anhela nuestro pueblo".

Guerra fría: PC al poder

La guerra llegó a su fin y los ojos del comunismo volvieron al interior, claro que con la mirada puesta en los inicios de la Guerra Fría, que se derivarían las dos potencias mundiales. Las palabras de Elyas Lafertte de 1945 aclaran la política de la estrategia: "la política de unión nacional que sostuvimos durante la guerra contra la barbarie fascista es y sigue siendo válida en el período actual". Pero precisa:

En cuanto a nuestra participación en un gobierno de Unión Nacional, declaramos que no nos interesa, pero no en cualquier caso. Nos interesa sólo en un gobierno que se comprometa a realizar un programa tendiente a transformar nuestra economía, a liquidar

(Continúa en pág. D 2)



El Partido Comunista, por obedecer consignas internacionales ajenas al interés de Chile y porque no hace otra cosa que despertar una falsa y perversa inquietud en la conciencia obrera, debe

FUENTE: Dirección del Registro Electoral. Cifras correspondientes a elecciones de diputados.

(1) En 1925 eligió un senador y siete diputados. Participó aliado con el Partido Demócrata y Anarquista obteniendo, en conjunto, 58.658 votos. Al renunciar el Presidente Arturo Alessandri a la senaduría por Tarapacá y Antofagasta (mayo de 1926), el PC triunfó con su candidato Juan L. Carmona y elevó a dos senadores.

(2) Después el general Carlos Ibáñez del Campo, en 1932, el PC no obtuvo parlamentarios tras cuatro años de clandestinidad.

(3) En 1937, con el nombre de Partido Nacional Democrático, consiguió un senador (Elyas Lafertte) y seis diputados.

(4) En 1941, con el nombre de Partido Progresista Nacional, logró cuatro senadores y 16 diputados.

(5) En 1945, con el nombre de Partido Progresista Nacional, obtuvo tres senadores y 15 diputados.

Partido Comunista: Hoy como Ayer

(Viene de pág. D 1)

dar el feudalismo, a mejorar las condiciones de vida de la clase obrera, en política internacional, esté lealmente al lado de la Unión Soviética".

La tarea, otra vez, no era fácil. Con la ruptura del Frente Popular, la izquierda estaba gastada y dividida. Pero el PC, en la comprensión de la pluma de Gabriel González Videla, promueve la política de un lado y de otro logran la unidad y con la fe de la derecha en el desgaste izquierdista — fue dividida — la izquierda obtiene la victoria en las urnas. Y en esta oportunidad, con parbinete. Habían triunfado. Y se iniciaba la luna de miel entre el mandatario y los comunistas, que a través de la pluma de Neruda le había dedicado el poema de campo aína.

Desde el salitre a la espesura del pueblo lo llama Gabriel con sencillez y dulzura

En la sombra

Claro que el Mandatario tampoco afloja: "Se equivocan los actuales dirigentes del PC si creen que el Instrumento de la República será un instrumento que envía al Congreso el proyecto de ley denominado de Defensa Permanente de la Democracia, que le autoriza al gobierno a que sepa utilizar el nombre "Ley Maldita" por el PC— se aprueba en la Cámara 93 contra 20 votos y en el Senado 31 contra 8.

Trajo coleteos políticos. Los conseradores se dividieron. Incluido, el senador Eduardo Cruz Coke, candidato presidencial derrotado por González Videla, votó en contra). Pero el Mandatario estaba dispuesto a aplicar sin tregua: se borraron de los Registros Electorales a cerca de 24 mil comunistas; se alijó de sus cargos a los funcionarios públicos; y se relegó a Pisagua y otros lugares a sus dirigentes más conspicuos.

Los comunistas no perdieron su ánimo de combate. Después de las persecuciones, el Partido comunista declara su nuevo secretario general, Ricardo Fonseca al entrar a su nueva y más prolongada clandestinidad. Y es un hecho que desde la sombra no se mantuvo inactivo. Más difíciles fueron los años que restaban de Gobierno a González Videla, época en que —según palabras de Galo González (sucesor de Fonseca)— "ha aprendido a realizar un trabajo más organizado, más en la línea del Frente Popular, más en la línea del programa de la izquierda y más comprendiendo más ampliamente la necesidad de su organización y de su actividad".

Pero igual —ante la pérdida de tribunales periodísticas y políticas— no desestiman otras formas de acción, y por la vía legal logran camuflar a algunos candidatos en el llamado Frente Nacional Democrático y eligen a Víctor Galleguillos senador (otros fueron sorteados y desautorados).

La vida política de esos años tuvo los signos de la contradicción. Dóñez rezoza que dejó perplejo a los comunistas que no vacilaban en el triunfo de su candidato. Y esta vez el general tiene una actitud tolerante hacia los comunistas que, aun al margen de la ley, recuperan tribunas con la reaparición de "El Siglo", y controlan la Central Única de Trabajadores, y hacen fines de su vida clandestina, el PC crolla into una nueva —y determinante— etapa de su historia política.

La vía pacífica

Reunidos en Moscú, los 81 partidos comunistas del mundo el año 56 proclaman la posibilidad de realizar la revolución socialista por medios pacíficos.

"BENEFICIOS PARA LAS EXPORTACIONES"

CENEXI

(Tributarios, Aduaneros, Bancarios)

Seminario: 9 al 12 de Julio / 84

Objetivos: Dar a conocer todos los aspectos legales que favorecen al exportador e informar de los procedimientos y operatoria que le permiten importarlos.

Contenidos: (sintesis): CREDITOS: Pre-embarque, Post-embarque, empaque, Aduaneros, EXPORTACIONES DERIVADAS DE LA SALIDA TEMPORAL. EL IVA EN LAS EXPORTACIONES. PARALELO ENTRE EXPORTACION Y SALIDA TEMPORAL. VENTAJAS EN LA EXPORTACION. Tributación Interna y Tributación Aduanera.

Relator: Osvaldo Rivas U., Administrador Público, Vista Aduana. Fue Asesor de Aduanas, Min. de Hacienda, e Director del Área. Contraloría Gral. de la República. Prof. Inviado Ues. de Chile y de Santiago.

El seminario se realizará del Lunes 9 de Julio, de 19:00 a 21:30 hrs., en el Colegio de Ingenieros de Chile A.G., Alameda N° 1170, 9° Piso. Informaciones, temarios y matrículas: CENEXI, Huertanos N° 1117, Of. 607, Tel. 65866. Curso aprobado por el SENCE.

Servicio Técnico MazdaChile

La atención de su vehículo por nuestros técnicos especializados, utilizando repuestos legítimos de nuestro stock permanente, nos permite garantizar sin excepción los trabajos realizados en su automóvil. Consúltenos. Teléfono: 64939.

MazdaChile

Almirante Latorre 47, al 69

Ventas 845327

Servicio 64939

Repuestos 64951

Mazda

calidad superior

Mazda SHELL SUPER PLUS

PREUNIVERSITARIOS ANDRÉS BELLO

A las puertas de la Universidad

¡ASEGURA TU INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR!...

INScripciones 2° SEMESTRE

sólo refleja la capacidad y experiencia docente de un grupo dedicado EXCLUSIVAMENTE a la difícil labor de perfeccionar la preparación preuniversitaria. Decide tú y decide ud. por UN claro camino a la Universidad y al saber.

AVDA. TAJAMAR 191-209 METRO ESTACION TOBALABA FONOS: 2321191 - 2321192



VICART



Enero de 1970 Orlando Millas, Pablo Neruda y Luis Corvalán explican los alcances de la Unidad Popular

Sin embargo, aun no cantaban victoria. Luis Corvalán, ya secretario general del PC a esas alturas, señalaba que si bien no era fácil, tampoco era imposible, "en la medida en que se for- movimiento y estaba más el imponer nuevas y más profundas ampliaciones de sus derechos políticos y electorales".

Pero hubo escollos. No les resultó fácil imponer su estrategia a sus nucleistas y más ultra—acusaban al PC de revolución cubana—acusaban a las acusaciones y respondía de ellas, en boca de Corvalán el 83: "Cuando hablamos de la revolución por la vía pacífica sólo estamos revolucionarios sin recurrir a la insurrección armada o a la guerra civil, pero no descartamos otras formas de violencia en menor escala, como la huelga general, las elecciones presidenciales, que siguieron fueron un golpe bajo para su estrategia. El triunfo de Eduardo Frei, abanderado de la democracia cristiana y apoyado por la derecha, los lleva al menos a pensar que no obtendrán la victoria aliados solamente con fuerzas marxistas. Admiten que el programa reformista de la DC atrajean a sectores populares y de allí replantear su estrategia, fue fácil. Cada vez cuando más entre sus aliados la izquierda revolucionaria (de allí el origen del MIR) que el PC, que veía estabilidad política y económica, no claudica e insiste en que lograr el poder pacíficamente es la fórmula, pero con nuevos aliados, aunque esta vez bajo la hegemonía marxista-leninista. Parte del informe del congreso del año 65 señaló:

"No se puede descartar ni desestimar que marchen junto al FRAP con los sectores de la izquierda revolucionaria, que se desea incluído el socialismo".

Camino de victoria



son éstos los orgenes del proceso que lleno de sabores y sinsabores y sinsabores dio finalmente nacimiento a la Unidad Popular. Se piegaron los radicales, pese a la resistencia social, habiendo otras facciones de la DC, que propiciaban cambios que los de su gobierno (MAPU-IC). Logra así el comunismo triunfar con su tesis.

Tras la derrota

Al promediar 1973, el curso del proceso parecía claro y el PC decide sumarse a la vía insurreccional a través de la acción de la CUT en los cordones industriales.

Pero fue tarde. Y comienza una nueva etapa "con problemas derivados de la emigración, fenómeno enteramente nuevo en la vida del partido" en

JEFE DE PRODUCCION Industria procesadora de Desechos Animales. Requiere perfil académico, para asumir labores de producción y desarrollar nuevos productos. Expectativas de renta, estrechamente vinculadas a experiencia, capacidad y resultados de gestión. Escribir a: INSEQUIM, CASILLA 16505, CORREO 9.

PREUNIVERSITARIO NUEVOS CURSOS 2° SEMESTRE Preparación para las pruebas de ingreso a la universidad en 6 distintos horarios. INFORMACIONES Y MATRICULAS VITACURA ESQ. JUN XXIII FONOS 2115248-2115249

¡ IMPORTANTES EMPRESAS, EMBAJADAS, CONSULADOS, INVERSIONISTAS, ETC. SE VENDE Inmueble oficinas gran categoría, de sólida construcción. Car. los Agustín Pedro de Valdivia, barrio 1° Cordón, a 2 cuadras de la estación de ferrocarril, calefacción central y agua caliente. Verdaderos interesados. HUERFANOS 1055, OF. 406

I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES PROPUESTA PUBLICA. Llámese a Propuesta Pública por el seguro de los vehículos municipales contra riesgo de accidentes, robo o hurto, como, asimismo, seguro contra incendio de los bienes u objetos muebles e inmuebles municipales. Las bases de la Propuesta podrán ser retiradas en la Oficina de Partes de la Municipalidad, Avda. Apoquindo N° 3 300, desde el día 2 de julio de 1984, en horario de 8:30 a 13:30 horas. Valor de las bases \$ 2.500. EL ALCALDE

¡ IMPORTANTE FABRICA DE MUEBLES DE TEMUCO NECESITA JEFE SECCION MAQUINAS CON EXPERIENCIA Indicar su estimación de renta y enviar curriculum a: MUEBLES JOUANNET CASILLA 1235, TEMUCO

BUNGALOW EL GOLF CERRO SAN LUIS 200 m², 3 dormitorios, y 1.000 m² de amplia terraza con preciosa vista, living comedor, dormitorio principal con baño exclusivo y dos dormitorios con baño compartido con capa de una cama cada uno, amplios closets, cocina, lavadero, calefacción Central, dependencia de servicio completa, garage para 2 autos, construcción de 14 años muy bien mantenida. SERGIO MIGUEL VIAL RODRIGO MIGUEL W. AHUMADA 312. OF. 203. 84684 - 68094

LOCAL INDUSTRIAL ARRENDAMOS 1.200 m² de superficie, Superflexit, calefacción, corriente trifásica, oficinas, entrada de camiones. Especial Industria Textil o Electrónica. Verifi: PANAMERICANA NORTE N.º 4500 TELEFONO: 371163

palabras de Volodia Tittelboim, quien condujo el partido durante los tres primeros años del régimen militar.

En 1976, tras su liberación, Corvalán retoma las riendas del comunismo. Objetivo: "derrocar al régimen fascista". Y una vez más las miradas se vuelven hacia otros sectores políticos. "El asunto clave —decía en un momento— es el entendimiento que se establece entre la UP y la DC. La UP y nosotros mismos, hemos expuesto claramente nuestra disposición unitaria. Falta que la DC haga lo mismo. Una palabra en común sería un factor de primera importancia, en verdad, decisivo, en la marcha de la unidad, en el desarrollo de un movimiento de masas para una nueva democracia en la lucha por derrocar la tiranía".

Desde 1977 hasta el 80 trabajan en la línea que se llamó de "unidad antifascista". En 1979 emite un documento "Nuestro Proyecto Democrático" en que, para atraer a las otras fuerzas, aclara que "la unidad antifascista no requiere que nadie renuncie a sus principios, sino que pongamos en primer plano los objetivos comunes".

No, tuvieron éxito. Se asomaba el "boom" económico, lo participó el "boom" de la Unidad. El objetivo de este constitucional de 1980. Y a partir de entonces comienzan a oírse las voces de "rebelión" e "insurrección". Desde Moscú llegan las palabras de Corvalán: "El escudo nacional dice: ¡Por la razón o la fuerza! Esto significa que cuando no bastan las razones, o éstas no se escuchan, hay que recurrir a la fuerza. El derecho a rebelión es, por así decirlo, un derecho sagrado".

A la rebelión



A la tentación de iniciar una fase de rebelión accede, en primer lugar, su enemigo de la UP como era el MIR, y algunas facciones de otros partidos de izquierda, como el almeidismo socialista y el sector radical encabezado por Anselmo Sule. Y en Ciudad de México como escenario suscriben en septiembre de 81 un acuerdo tendiente a unificar las fuerzas contra el régimen militar. El PC precisa entonces: "estamos en la primera etapa de un proceso de rebelión imprevisible, que se desate por ahora por etapas, en que plazos y en la forma que el tiempo".

En su aviso. Y en 1982 el curso comienza a complicarse: la reacción muestra a sus primeros síntomas, y la transición a la democracia se estanca. Desde su nuevo plataforma lanzan los llamados al resto de la oposición para unirse en la acción contra el régimen. No son escuchados y siguen excluidos de alianzas políticas. Pero para el comunismo lo importante es la unidad en la movilización de las masas, que si han logrado.

Es un hecho que el potencial de violencia, advertido con el inicio de las protestas, comenzó a valditar, la opción alternativa a la "vía pacífica" que plantea aquellos sectores que ésta no les resultara efectiva. Como se dijo en el XX congreso en Moscú:

"En el caso de que las clases explotadoras recurran a la violencia en contra del pueblo, hay que tener en cuenta la otra posibilidad: el paso al socialismo por la vía no pacífica. El leninismo enseña —y la experiencia histórica lo confirma— que las clases dominantes no ceden voluntariamente al poder. La dureza y las formas de lucha de clases, en los momentos de crisis, no debe ser el objetivo de los revolucionarios, sino que los círculos reaccionarios opongan a la voluntad de la inmensa mayoría del pueblo, del empleo de la violencia por esos círculos en una u otra etapa de la lucha por el socialismo".

Condicionantes políticos de la
planificación en los países
del Cono Sur

Vol. XVIII No 72
Dic 84



M. T. Lladser A. Flisfisch A. O. Cintra L. Tomassini P.
Armanet J. Estévez L. Macadar E. Arriagada S. Melnick V.
Tockman M. A. Garretón E. Palma E. Boeninger E. Faletto y
R. Lagos W. Cancela.

ORGANO DE LA SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PLANIFICACION
VOLUMEN XVIII - NUMERO 72 - DICIEMBRE DE 1984

Revista 3246



Interamericana
de Planificación

ENZO FALETTO*
RICARDO LAGOS**

EL FUTURO DEL
ESTADO EN CHILE. Opciones de
transformación económica y social

Abordar el problema del Estado en Chile en forma comprensiva supondría una visión temporal que logre dar cuenta de la experiencia social acumulada a este respecto, las características de la coyuntura presente, y los desafíos del futuro inmediato. Por otra parte, a nadie escapa que el Estado también representa una determinada relación entre clases y grupos sociales y, por lo tanto, formular una política respecto al mismo, implica concebir tales relaciones sociales de una determinada manera.

Sin embargo, en esta primera aproximación se ha querido no ser demasiado sistemáticos y privilegiar algunos aspectos que aparecen como claves. La tesis principal que orienta estas notas sostiene que para salir de la actual crisis es necesario prever responsabilidades crecientes y directas del Estado. Pero, al mismo tiempo, se postula que un Estado fortalecido en lo económico requiere, necesariamente, de una democracia en lo político que resguarde los derechos y las iniciativas de los distintos grupos y personas sociales.

Conscientes de que no se puede reducir el papel del Estado a una sola función, es posible, no obstante, aceptar que, por lo menos, el crecimiento del Estado se expresará como un crecimiento del sector público en la actividad económica.

Es conveniente destacar que cuando se hace referencia a actividades del sector público se quiere significar que dichas actividades, de un modo u otro, pertenecen a la sociedad en su conjunto y, por consiguiente, su control corresponde a la esfera de ese sector. Se requiere subrayar el problema del control público de la actividad porque, obviamente, es este uno de los problemas políticamente más difíciles y controvertidos.

Retomando el tema de la expansión del sector público, algunos autores han señalado que el aumento de la participación de dicho sector en la economía no es continuo, sino que se produce a saltos que coinciden generalmente con períodos de grandes transformaciones políticas, económicas y sociales. Entre esos períodos de grandes transformaciones existe una relativa estabilidad en la relación gasto público-producto nacional¹.

En el caso de Chile, si bien no se ha hecho un estudio similar, no es arbitrario postular la ocurrencia de tal fenómeno; ha sido en los períodos de grandes mutaciones en los que se

* Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Santiago, Chile.

** Economista, abogado.

1. Peacock, A. T. y Wiseman, J., *The growth of public expenditures in the United Kingdom*, Allen and Unwin, Londres, 1967.

han producido cambios cuantitativos importantes en la participación del sector público, y nada tiene de improbable que nos encontremos a la puerta de uno de esos momentos, por lo que será imprescindible contribuir a definir con precisión la orientación de dicho gasto público.

Por lo general, pareciera existir consenso en cuanto a qué debe considerarse como objetivos del gasto público. Estos serían: i) la satisfacción de las denominadas "necesidades públicas"; ii) la búsqueda de un crecimiento equilibrado, tratando de corregir y mejorar los mecanismos propios del mercado; iii) corregir la distribución de la renta; y iv) propender a una opción de pleno empleo.

Como es comprensible, estos distintos objetivos tienen —cada uno de ellos— grados de precisión y de desarrollo que son de extraordinaria importancia. El concepto de "necesidades públicas", por ejemplo, que en las formulaciones clásicas tendía a circunscribirse a los rubros de defensa (externa e interna) y justicia, se ha ampliado a las necesidades de salud, educación, vivienda y, obviamente, seguirá enriqueciéndose.

Tiende a aceptarse, también —en especial a partir de la formulación Keynesiana—, que el Estado no solamente provee la satisfacción de necesidades públicas, que arrancan, en último término, de preferencias individuales, sino que constituye un ente que persigue fines propios, como, por ejemplo, dando lugar a un crecimiento equilibrado, tanto en términos coyunturales como de largo plazo.

El tercer gran rubro en el cual se acepta la intervención del Estado en el campo económico, se refiere al mejoramiento en la distribución, tanto personal, como regional, del ingreso. Aceptar este objetivo implica reconocer que el resultado de la distribución del ingreso como consecuencia de las fuerzas de mercado no es el óptimo desde un punto de vista social, y, en consecuencia, los poderes públicos, a través de una acción política, deben tomar las medidas necesarias para modificarlos.

La consecución del pleno empleo como objetivo de la intervención del Estado en la economía ha tendido a ser aceptada, especialmente a partir de la gran crisis de 1930. En el caso de Chile, las altas tasas de desempleo abierto y de desempleo encubierto hacen más apremiante que el empleo sea un objetivo en sí mismo sin esperar que el mejoramiento se logre como efecto secundario de la aplicación de una determinada política económica.

Si se acepta que existe un cierto consenso respecto a que éstos son los objetivos de la intervención del Estado en la economía, la situación de crisis por la que atraviesa el país hace que, en la intención de superarla, se tenga la necesidad de otorgarles aun mayor importancia que en el pasado, puesto que es evidente que se ha perdido el ritmo de crecimiento de la economía, se ha empeorado la distribución del ingreso, y son alarmantes los niveles de distintos tipos de desempleo. En consecuencia, estos objetivos, que de suyo son importantes, son más apremiantes en una situación como la actual.

Debe hacerse notar que las funciones del gasto público, arriba anotadas, se vieron fuertemente afectadas en la medida en que predominó, como orientación de la economía, la concepción neo-liberal. Los supuestos principales que derivaban de tal planteamiento pueden resumirse como sigue: i) la asignación de recursos es más eficiente por la vía del mercado; ii) el dinamismo de la economía se logra por la apertura del sector externo, aprovechando las ventajas comparativas existentes; iii) el mercado permite la fluidez del factor trabajo; y iv) la fluidez del factor trabajo permite el pleno empleo.

La escasa validez de tales supuestos ha sido dramáticamente demostrada por la experiencia, como ha sido el caso del rol deficiente que ha cumplido el mercado actual para asignar recursos, y en donde la producción del comportamiento de la demanda se ha mostrado profundamente inadecuada. Respecto a las ventajas comparativas, éstas tendieron a ser aprovechadas en términos estáticos y no dinámicos. Además, para que esto último sea posible, el sector público debe actuar muy intensamente y el Estado debe procurar los mecanismos para que las ventajas existentes en un momento dado sean constantemente actualizadas. La idea de "liberalizar" los mercados de trabajo, de modo que el "justo precio"

de ese factor permita el pleno empleo, ha contrastado con una situación en donde, durante los diez años de aplicación del modelo, las cifras de desempleo abierto han alcanzado magnitudes constantemente superiores al doble de las históricas. Difícilmente se puede postular, entonces, que liberalizando el mercado, se resuelve el problema del empleo.

El hecho concreto es que, para enfrentar los problemas acumulados, una alternativa política, económica y social tendrá que encarar la urgente necesidad de revitalizar la opción de la planificación, uno de cuyos desafíos fundamentales será el del desempleo. En primer lugar, no habrá solución de carácter global al problema mencionado si no existe una reactivación real de la economía. Esta reactivación, para que sea efectiva, requiere de un aumento sustancial de los niveles de inversión y, dada las dificultades que previsiblemente tendrá el sector privado para aumentar dichos niveles, será sobre el sector público donde seguramente recaiga el peso del aumento de la inversión bruta.

El segundo elemento se refiere a la política de inversiones, que debe tener en cuenta el impacto diferente de cada sector en términos de empleo. De ahí, entonces, que orientar las inversiones públicas hacia aquellos sectores que tienen una mayor absorción de mano de obra sea una decisión de autoridad que puede ayudar de un modo importante a resolver el tema. Un tercer punto dentro de los objetivos de la planificación atinentes al empleo se refiere a la caída que éste ha tenido en el sector público; ello, como consecuencia del rol subsidiario que la visión neo-liberal le asignaba al Estado. Es indudable que el propio sector público tendrá que enfrentar la tarea de aumentar el número de puestos de trabajo existentes en ese sector. Por último —y como una opción de política de corto plazo— será indispensable que el Estado aborde programas de emergencia para absorber las principales bolsas de cesantía existentes en el país.

Todo indica, por lo tanto, que será necesario aumentar la actividad estatal, reforzar su capacidad de decisión, y renovar esfuerzos en el sentido de la planificación. Por lo demás, no debe olvidarse la extrema necesidad de enfrentar de modo coherente la agobiante deuda externa, lo que conduce a una mayor presencia del Estado. Tampoco es arbitrario pensar que, dada la situación y comportamiento anterior del sector privado, en el futuro inmediato sólo el Estado podrá obtener recursos externos y será él quien tendrá que asignarlos.

En la perspectiva de futuro, es inevitable considerar el problema de las "herencias que se reciben". La aludida deuda externa es una de ellas, en donde las condiciones que se logren para el pago serán determinantes en el éxito o el fracaso de un proceso de redemocratización. Es obvio que ésto no será la única causa, pero será un elemento clave.

También es necesario visualizar la recomposición de la estructura productiva, lo que, en algunos casos —como el de la industria—, casi significa su virtual refundación, la que debe encararse conjuntamente con un proceso de reconversión.

Una lección que se desprende de la experiencia neo-liberal es la necesidad de orientar bienes y servicios que satisfagan necesidades esenciales de la población, lo cual no sólo asegura que la dinámica de crecimiento no quede extremadamente dependiente de las condiciones del mercado externo —que no se controla— sino que, además, el estilo de desarrollo pueda tener modalidades más de acuerdo con las condiciones nacionales. De hecho, tal opción implica modificar la estructura productiva y de inversión, y el instrumento que lo haga posible no parece ser otro que una acción decidida del Estado y de la acción de planificación.

Pero no solo es necesario subrayar —como hasta aquí se ha sostenido— la importancia del papel que corresponderá al Estado en la reactivación de la economía. La acción económica del Estado es fundamental en un posible proceso de redemocratización. A nadie escapa que existió y existe una estrecha correspondencia entre el poder económico, concentrado en algunos grupos, y el poder social que alcanzaron, de modo que la dominación no solo es el producto de un Estado autoritario, y que todo se corregirá en la medida en que esto desaparezca, sino que, también, la modalidad autoritaria está estrechamente asociada con una extrema concentración del poder en la sociedad civil. Se impone, por consiguiente, una restitución del poder a los grupos que fueron despojados de él, lo que implica profundos

cambios en la institucionalización vigente, en materias laborales, en el papel de los sindicatos, en el de las organizaciones políticas, y muchas otras.

Respecto a la necesidad de intervenir y corregir la actual estructura de la sociedad, un aspecto determinante se refiere a la forma de distribución del ingreso. No sería justo pretender reactivar la economía manteniendo los actuales grados de desigualdad. Más, para que un principio de equidad tenga real viabilidad, es necesario compatibilizar el propósito de redistribución del ingreso con una nueva estructura productiva. Como ya se ha insinuado, es necesario ampliar el concepto de necesidades públicas y, además, redefinir la orientación de los sectores tradicionales de salud, vivienda y educación, todo lo cual implica una mayor participación del Estado en esos servicios.

Por lo expuesto, se puede, quizás, concordar en la importancia que deberá adquirir el Estado, pero debe estar claro que eso no resuelve la totalidad del problema; es necesario precisar mejor el carácter posible del Estado, como el tipo de opciones con que puede orientar su acción.

Tomando como base una tipología elaborada por Alain Touraine², se podrían distinguir tres opciones fundamentales concordantes con las temáticas planteadas: i) "dirigista"; ii) "distribucionista"; y iii) tendencia autogestionaria.

La opción "dirigista" se basa, por lo general, en el supuesto de que es necesaria una mayor y más directa intervención del Estado en la vida económica. El programa dirigista es uno de estatización, que pretende formularse como de socialización, aspecto que se lograría en la medida en que exista una real capacidad de la sociedad para controlar y orientar la acción del Estado. La imagen que a menudo se aduce es que el Estado puede servir como un recurso eficaz para enfrentarse a un poder excesivo del sector privado; supone, en cierta medida, que por su intermedio es posible expresar un interés general de la sociedad, distinto al puro interés particular. Para muchos sectores, el Estado es una garantía eficaz como protección contra el desempleo y, por todo lo dicho, este último aspecto le otorga bastante atracción.

En un plano de mayor profundidad, la ampliación de la presencia del Estado en la actividad económica intenta sustituir el tema capitalista de la empresa, el lucro o la ganancia, por la noción de servicio público. En otros términos, se pretende constituir, como de mayor importancia, la noción de valor de uso que la de valor de cambio.

Las distintas dimensiones señaladas encuentran, probablemente, mayor apoyo entre sectores obreros y populares, como, también, en sectores medios y en grupos ligados al propio sector público; pero, a la vez, el "dirigismo" puede ser reivindicado por un sector empresarial, principalmente por aquellos que quisieran llevar a cabo una política de expansión industrial, en donde —dada la actual orientación del capital financiero— aparece como necesario algún grado de intervención directa del Estado en la promoción de tal alternativa.

Como se ha intentado mostrar, la orientación dirigista, y en particular el refuerzo del sector público, responde en gran medida a las exigencias de la presente situación. Por lo demás, en el caso de Chile hay una larga herencia ideológica al respecto que arranca, por lo menos, desde los inicios del Frente Popular en 1938, y se prolonga hasta 1973 con el gobierno de la Unidad Popular. Las experiencias de la Corporación de Fomento a la Producción (CORFO), las políticas de desarrollo de infraestructura, por ejemplo ENDESA (Empresa Nacional de Electricidad), la implantación de la siderurgia y muchos otros ejemplos, avalan una opinión positiva respecto al papel del Estado, y lo mismo puede señalarse respecto a la experiencia acumulada en servicios como educación, salud y vivienda.

Ciertamente que el predominio de una opción dirigista constituye algunos temores; uno de ellos hace referencia a la formación de una categoría dirigente, la techno-burocracia del Estado, que, a partir de una particular concepción del interés público —que de hecho sólo refleja su particular concepción—, tiende a imponer un cierto tipo de sociedad y un estilo de vida al conjunto de la población.

2. Touraine, Alain, *Franca: um novo período da história política*, en "O novo socialismo francês e a América Latina", en Cardoso, F. H. y Trindade, H. (eds.), "Paz e terra", Rio de Janeiro, 1982.

Tampoco es ajena al dirigismo una orientación que pueda calificarse de "voluntarista", donde los rasgos más comunes son un cierto predominio de las imágenes de largo plazo, la tendencia a la edificación de grandes conjuntos de producción y el énfasis en una racionalización, a veces excesiva, en la formulación de los planes.

La "opción distribucionista" acentúa el tema de la distribución de los ingresos, y la finalidad que se propone es actuar sobre los bajos salarios y, por la vía de la redistribución, propender a procesos de mayor integración social. Si la dimensión de socialización es predominante en la primera opción, el rasgo igualitarista pareciera conducir a esta segunda.

Los mecanismos tradicionales son los impuestos a la fortuna, la presión del fisco sobre las altas rentas, o favorecer, a través de los servicios, a los sectores que se encuentran en posiciones intermedias o bajas de la escala social.

No obstante, tendencias actuales en la orientación distribucionista hacen posible que esta opción se constituya en un freno o corrección a los procesos de centralización estatal, puesto que puede incidir distribuyendo los recursos fiscales entre el nivel nacional, regional y local, departamental y comunal.

El distribucionismo no sólo puede favorecer a determinadas clases y grupos sociales, sino que también puede orientarse a categorías específicas, tales como las mujeres, los jóvenes, u otras categorías que se consideren significativas.

Como en el caso de la opción anterior, la tendencia distribucionista tiene, también, largos antecedentes en el caso chileno, pero, como muchos han señalado, el problema mayor que presenta es que, por lo general, tiende a favorecer a los grupos mejor organizados, tanto por su capacidad de presión, como por disponer de una estructura —la propia organización— que les permite recibir con cierta eficiencia el bien o recurso que se distribuye.

La opción autogestionaria, más que pronunciarse por una opción estatizante, intenta reforzar la autonomía y la capacidad de decisión de los actores sociales, poniendo énfasis en la transformación de las relaciones sociales de autoridad y en el cambio de los mecanismos tradicionales y consagrados de decisión. Su propósito, por consiguiente, es no dejarse conducir por una intervención creciente del Estado.

La tendencia auto-gestionaria puede, en algunos casos, surgir como una alternativa defensiva de algunos grupos que se sienten amenazados por la arbitrariedad de las decisiones económicas tomadas con criterio estrictamente empresarial-capitalista, y pueden citarse varios casos de este tipo en la actual experiencia chilena; no obstante, se sostiene³ que, por lo general, esta corriente corresponde más a un período de expansión que a un período de crisis en donde la conciencia de debilidad orienta más a cifrar las expectativas —por lo menos de la mayoría— en una intervención decidida del Estado.

Es claro que las opciones reseñadas no son excluyentes, y que el desafío es la compatibilización —tanto entre sí, como en el posible predominio de una u otra en un cierto itinerario posible—; por ejemplo, puede pensarse que la opción dirigista predomine, en un primer momento, en donde el esfuerzo para enfrentar la crisis sea lo decisivo; en un segundo momento, la opción distribucionista puede adquirir mayor relieve para dar paso, por último, a la tendencia cogestionaria. No se quiere indicar con esto un simple esquema de tres tiempos, puesto que elementos de todas las opciones estarían presentes en cada uno de ellos; así, el primer esfuerzo reactivador necesariamente deberá estar acompañado de medidas de redistribución que hagan posible que la reactivación no consagre las desigualdades existentes; a la vez, la autogestión y cogestión, por lo menos en las decisiones, pueden asegurar mecanismos de compromiso social y un real respeto por los intereses de los sectores afectados por las medidas que se tomen.

Del conjunto de temas señalados en este ensayo se desprenden —desde un punto de vista sociológico— dos problemas de extrema importancia: i) que es casi inevitable la formación y desarrollo de una tecnocracia y de una burocracia que crecen al abrigo del Estado y cuyo

3. Touraine, Alain, *op. cit.*

control es necesario; y ii) que debe visualizarse cómo hacer posible la apertura de vías para la formación y desarrollo de capacidades de participación de nuevos grupos en la dirección de la sociedad.

Enfrentar estos problemas implica introducir una ruptura con las prácticas anteriores en la relación Estado y masas, o más concretamente, en la relación entre burocracia y masas. De hecho, debe intentarse superar el "particularismo" del Estado, fenómeno que fue evidente en la estrecha relación que se constituyó a partir de 1973 entre "grupos económicos" y la dirección del Estado. Pero también significa el abandono de ciertas prácticas, igualmente presentes con anterioridad a 1973, que podrían rotularse como "populismo", entendido éste como "organización desde arriba de las masas".

Una alternativa de real democratización en donde la participación sea uno de sus puntos centrales requiere, por lo tanto, un cambio en la relación burocracia-masas, la que debería constituirse como un verdadero intercambio entre la sociedad y el Estado, en donde la sociedad civil no sea una simple receptora de políticas, sino que contribuya a generarlas; tal posibilidad requiere de la participación ciudadana en el proceso político. En esta perspectiva, el Estado deja de ser concebido como el espacio o simple lugar de articulación de intereses, incorporándosele, a través de la participación social, una voluntad de transformación.

Por otra parte, se pretende, a la vez, que el Estado asegure la dimensión de largo plazo, no porque se pretenda que solo el Estado la posee, sino porque, estando presente en la propia sociedad civil el particularismo y el universalismo, es el Estado el lugar donde esta dimensión se privilegia.

En todo lo dicho está también en juego una redefinición de la noción de "progreso social". Este se entiende no sólo como el mejoramiento cuantitativo de una determinada condición, sino como la posibilidad de formación y desarrollo de nuevas clases dirigentes. De este modo, los derechos sociales, además de su carácter positivo, en la acepción jurídica del término —es decir, consagrados en el derecho positivo—, asumen también un carácter programático, de donde se deriva que:

- i) La planificación, además de instrumento técnico, se reivindica como conducción política de la economía.
- ii) Se postula la transformación de la naturaleza jurídica de la propiedad, incorporando, junto a la propiedad privada, formas distintas, como cooperativas, propiedad socializada, propiedad del Estado, etc., en donde el tema es la articulación de la propiedad con el interés social.
- iii) Se propician formas de autogestión y cogestión, donde no se trata solo de la transformación de la gestión económica, sino, también, de transformación de la condición obrera o de otros sectores reducidos a una sola función.
- iv) Se impulsa la participación en los beneficios que realiza la sociedad en su conjunto, tanto económicos como culturales.

Todos estos elementos señalan la importancia que puede tener el Estado en promover, no sólo económicamente, sino también institucionalmente, el necesario proceso de cambio social.